DIARIO DE DEBATES

DE LA

CAMARA DEL SENADO

DE LA

REPUBLICA DE VENEZUELA

Mes IV. – Caracas, 27 de abril de 1959 – No. 39

CAMARA DEL SENADO

Sesión del día 27 de abril de 1959

Presidencia del Senador Dr. Raúl Leoni

ACTA

Previo anuncio por Secretaría de la existencia del **quórum** reglamentario, la Presidencia declaró abierta la sesión a las 4:50 p. m. con asistencia del primer y segundo Vicepresidentes, J. M. Domínguez Chacín y Patrocinio Peñuela Ruiz, respectivamente, y de los Senadores César Morales Carrero, J. M. Siso Martínez, Raúl Ramos Giménez, Verónica Coello, Mauro Páez Pumar, Edecio La Riva Araujo, Froilán Alvarez Yépez, Ramón Escovar Salom, Jesús Faría, Carlos Augusto León, Alfredo Célis Pérez, Juan Mogna, Braulio Jatar Dotti, Rómulo Henríquez, Cipriano Heredia Angulo, J. L. Salcedo Bastardo, Martín Pérez Guevara, Servio Tulio León, Luis Alejandro González, Enrique Méndez Romero, Bonifacio Velázquez, J. A. Medina Sánchez, Francisco Faraco, Ernesto González Araujo, Francisco Olivo, Víctor Mazzei González, Ramón Vicente Casanova, Argimiro Bracamonte, Antonio Delgado Lozano, Alberto Ravell, José Núñez Aristimuño, César Gil Gómez, Stanislao Mejía Salvatierra, Rafael Hernández Rodríguez, Antonio Tinoco Marín, Cristóbal Azuaje, Isidoro Hernández, Julio C. Sánchez Olivo y Alberto Turupial.

Leída y puesta en consideración la minuta de acta de la sesión anterior fue aprobada sin modificaciones.

Seguidamente, y a petición de la Presidencia, la Secretaría dio lectura a la forma como quedaron reformadas las siguientes comisiones:

Comisión Permanente de Agricultura y Cría: Dr. Alejandro González B., Dr. Víctor Mazzei González, Sr. Julio César Sánchez Olivo, Dr. Froilán Alvarez Yépez y Dr. Carlos Augusto León.

Comisión Permanente de Educación: Dr. J. M. Siso Martínez, Dr. Argimiro Bracamonte, Dr. Mauro Páez Pumar, Sr. Jesús Faría y Dr. Antonio Tinoco Marín.

Comisión Permanente de Relaciones Exteriores: Dr. Elbano Provenzali Heredia, Dr. Raúl Ramos Giménez, Dr. J. M. Siso Martínez, Dr. Edecio La Riva Araujo, Dr. Bonifacio Velázquez, Dr. J. L. Salcedo Bastardo y Dr. Argimiro Bracamonte.

Seguidamente el Secretario dio cuenta:

1º—Comunicación del ciudadano Ministro de Hacienda remitiendo un anteproyecto de Reforma del Capítulo Constitucional referente al Poder Judicial, acompañado de su correspondiente Exposición de Motivos.—(A LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE REDACTAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION NACIONAL).

2º—Oficio del ciudadano doctor Mario Briceño Perozo, participando a esta Cámara que ha sido nombrado Director del Archivo General de la Nación y que ha tomado posesión de dicho cargo.—(CONTESTACION Y ARCHIVO).

3º—Oficio del ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Estado Portuguesa, recomendando como medida de urgencia la obtención de un lote de terrenos de la jurisdicción del Distrito Esteller de ese Estado, que servirán de base a los planes de reubicación de más de dos mil campesinos.—(A LA COMISION PERMANENTE DE AGRICULTURA Y CRIA).

4º—Comunicación del ciudadano Luis Juvenal Peña, de Guri, Estado Bolívar, remitiendo 14 solicitudes de tierras baldías y haciendo observaciones sobre dichas concesiones.—(A LA COMISION PERMANENTE DE AGRICULTURA Y CRIA).

5º—Comunicación de los ciudadanos Dr. Miguel Roberto Castillo y Licenciado Miguel Gerónimo Osío, en el carácter de apoderados de la familia del difunto Teniente León Droz Blanco, solicitando un estudio minucioso de los hechos y sucesos relacionados con el asesinato del mencionado Teniente y que se acelere dentro de los límites vigentes el juicio respectivo.—(A LA COMISION PERMANENTE DE JUSTICIA).

6º—Telegrama de la Federación de Maestros de Trujillo, Estado Trujillo, apoyando el Proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa).—(ARCHIVO).

7º—Telegrama del Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros La Paz, de la Concepción, Estado Zulia, solicitando la reforma de la Ley del Trabajo.—(ARCHIVO).

8º—Telegrama de varios ciudadanos de Santa Bárbara del Zulia, Estado Zulia, manifestándose contrarios a la aprobación de un modus vivendi con la Santa Sede.—(ARCHIVO).

9º—Informe de la Comisión Permanente de Fomento sobre un asunto sometido a su consideración y estudio.— (RESERVADO).

10º—Informes (2) de la Comisión Permanente de Justicia sobre asuntos sometidos a su consideración y estudio.—(RESERVADO).

A continuación el Senador Siso Martínez solitó se diera lectura por Secretaría al 4º número de la cuenta: Comunicación del ciudadano Luis Juvenal Peña, de Guri, Estado Bolívar, remitiendo copias de catorce solicitudes de tierras baldías en la citada entidad y cuya concesión, a juicio del peticionario resultaría lesiva para los intereses nacionales. Luego de la lectura que hizo la Secretaría por inuicación de la Presidencia, el Senador Siso Martínez hizo algunas consideraciones alrededor del asunto planteado en la comunicación y observó que la mayoría de las solicitudes estaban firmadas por extranjeros nacionalizados residentes en Caracas y otras ciudades; leyó una comunicación de El Manteco sobre el mismo problema y terminó proponiendo: a) Que esta Cámara se dirija al Ministerio de Agricultura y Cría para hacer las denuncias correspondientes y que se proceda a hacer una revisión de las concesiones hechas y a la resolución de los contratos hechos con aquellas personas que no cumplan con lo estipulado en la Ley o cuyas tierras han sido concedidas por medios dolosos; b) que la aplicación del Artículo 29 de la Ley que autoriza al Ejecutivo a conceder mayor cantidad de tierras en arrendamiento, sea utilizada con las máximas precauciones; c) que las nuevas concesiones sean hechas después de detenido estudio y que aún cuando no sea requisito específico determinado en la Ley se considere la necesidad de que los solicitantes sean realmente agricultores y posean animales y maquinarias agrícolas para que les puedan ser hechos estos arrendamientos y posteriormente la compra; y que la Comisión Permanente de Agricultura y Cría se aboque al estudio de una Ley de Tierras Baldías y Ejidos que contemple formas completamente nuevas de carácter económico del estudio de los suelos, de las zonas reservadas, de las relaciones que tenga con la Ley Forestal y que se contemple, si no se ha contemplado, la inclusión en el articulado de la Reforma Agraria, disposiciones que vengan a poner coto a estas irregularidades presentes.

Sometidas a consideración dichas proposiciones intervino el Senador Alvarez Yépez para apoyarlas y manifestar que no se podía considerar como causal negativa el que los solicitantes fueran extranjeros nacionalizados. También apoyaron las proposiciones los Senadores Faraco y Heredia Angulo. Nuevamente intervino el Senador Siso Martínez para aclarar que cuando había hecho mención de que la mayoría de las solicitudes estaban firmadas por extranjeros nacionalizados estaba muy lejos de su ánimo cualquier sentimiento chauvinista. El Senador González apoyó las proposiciones del Senador Siso Martínez, en nombre de la Fracción Parlamentaria de Copei, y propuso modificarlas en el sentido de que pasaran a la Comisión Permanente de Agricultura y Cría, en vista de que el contenido del Nº 4 de la cuenta había sido pasado a dicha comisión por orden de la Presidencia, lo cual fue acogido por el Senador proponente.

Cerrado el debate y votadas las proposiciones del Senador Siso Martínez con la modificación del Senador González fueron aprobadas.

Leído y puesto en consideración el primer número reservado de la cuenta: Informe de la Comisión Permanente de Fomento sobre una comunicación del Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Monagas, por la cual solicita que en el próximo presupuesto a elaborar para el año fiscal 1959-1960 se incluya (entre otras obras) la extensión del resto del Estado en los planes de electrificación de la Corporación Venezolana de Fomento, fue aprobado.

Leído y puesto en consideración el segundo número reservado de la cuenta, consistente en dos informes de la Comisión Permanente de Justicia, el primero referente a una diferencia con el Registrador Subalterno de La Grita, Distrito Jáuregui, del Estado Táchira por interpretación de una Ley, y el segundo, sobre comunicación del Comité Ejecutivo Regional de Veteranos Revolucionarios de Guasina y Sacupana del Estado Anzoátegui, fueron aprobados.

Concedido el derecho de palabra y no habiendo hecho uso de él ningún Senador, la Presidencia levantó la sesión a las 5:35 p. m.

El Presidente,
Raúl Leoni.

El Secretario,
Orestes Di Glácomo.

CAMARA DEL SENADO

Sesión del día 27 de abril de 1959

Presidencia del Senador Dr. Raúl Leoni

DEBATES

SUMARIO:

1.—Apertura de la sesión —Acta anterior.

2.—Lectura organización Comisiones Permanentes de Agricultura y Cría, Educación y Relaciones Exteriores.

CUENTA:

3.—Distribución

4.—Solicitud del Senador Siso Martínez de que se leyera el Nº 4 de la Cuenta. — Lectura.—Proposición Siso Martínez sobre el particular.—Apoyo del Senador González y proposición de pase a Comisión de Agricultura y Cría.—Aprobado.

5.—Primer reservado. — Informe Comisión de Fomento sobre comunicación Asamblea Legislativa Estado Monagas.

6.—Segundo reservado.—Informes de la Comisión de Justicia.—Aprobados. — Clausura de la sesión.

1

EL PRESIDENTE.—Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay **quórum**.

EL SECRETARIO.—Hay **quórum**, ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.— Se declara abierta la sesión.—**(A las 4 y 50 p. m.)**.—Sírvase darle lectura a la minuta de acta de la sesión anterior, ciudadano Secretario.

(Se lee, se considera y es aprobada sin observaciones).

2

EL PRESIDENTE.—Sírvase darle lectura a las Comisiones como han sido reorganizadas, ciudadano Secretario.

EL SECRETARIO.—(Lee): Las Comisiones reformadas son las siguientes: Comisión de Agricultura y Cría, queda en la siguiente forma: Dr. Alejandro González B., Dr. Víctor Mazzei González, Julio César Sánchez Olivo, Froilán Alvarez Yépez, Carlos Augusto León. Comisión de Educación: Dr. J. M. Siso Martínez, Dr. Argimiro Bracamonte, Dr. Mauro Páez Pumar, Sr. Jesús Faría, Dr. Raúl Villarroel. Y Comisión de Relaciones Exteriores: Dr. Elbano Provenzali Heredia, Dr. Raúl Ramos Giménez, Dr. J. M. Siso Martínez, Dr. Edecio La Riva Araujo, Dr. Bonifacio Velázquez, Dr. J. L. Salcedo Bastardo y Dr. Argimiro Bracamonte.

3

EL PRESIDENTE. — Cuenta, ciudadano Secretario.

EL SECRETARIO.—(Lee):

1.—Comunicación del ciudadano Ministro de Hacienda remitiendo un anteproyecto de Reforma del Capítulo Constitucional referente al Poder Judicial, acompañado de su correspondiente Exposición de Motivos.—(A LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE REDACTAR EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL).)

2.—Oficio del ciudadano doctor Mario Briceño Perozo, participando a esta Cámara que ha sido nombrado Director del Archivo General de la Nación y que ha tomado posesión de dicho cargo.—.CONTESTACION Y ARCHIVO).

3.—Oficio del ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Estado Portuguesa, recomendando como medida de urgencia la obtención de un lote de terrenos de la jurisdicción del Distrito Esteller de ese Estado, que servirá de base a los planes de reubicación de más de dos mil campesinos. — (A LA COMISION PERMANENTE DE AGRICULTURA Y CRIA).

4.—Comunicación del ciudadano Luis Juvenal Peña, de Guri, Estado Bolívar, remitiendo 14 solicitudes de tierras baldías y haciendo observaciones sobre dichas concesiones.—(A LA COMISION PERMANENTE DE AGRICULTURA Y CRIA).

5.—Comunicación de los ciudadanos doctor Miguel Roberto Castillo y Licenciado Miguel Gerónimo Osío, en el carácter de apoderados de la familia del difunto Teniente León Droz Blanco, solicitando un estudio minucioso de los hechos y sucesos relacionados con el asesinato del mencionado Teniente y que se acelere, dentro de los límites legales, el juicio respectivo.—(A LA COMISION PERMANENTE DE JUSTICIA).

6.—Telegrama de la Federación de Maestros de Trujillo, Estado Trujillo, apoyando el proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa.—(ARCHIVO).

7º—Telegrama del Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros La Paz, de la Concepción, Estado Zulia, solicitando la reforma de la Ley del Trabajo.—(ARCHIVO).

8.—Telegrama de varios ciudadanos de Santa Bárbara del Zulia, Estado Zulia, manifestándose contrarios a la aprobación de un modus vivendi con la Santa Sede.—(ARCHIVO).

9.—Informe de la Comisión Permanente de Fomento sobre un asunto sometido a su consideración y estudio.—(RESERVADO).

10.—Informes (2) de la Comisión Permanente de Justicia sobre asuntos sometidos a su consideración y estudio.—(RESERVADO).

Ha terminado la Cuenta, ciudadano Presidente.

4

SENADOR SISO MARTINEZ.—Pido la palabra.—**(Concedida)**. — Ciudadano Presidente: ciudadanos Senadores: Es para agradecer se le dé lectura al aparte Nº 4, dirigida a la Cámara por el ciudadano Peña.

EL PRESIDENTE.— Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura a la comunicación mencionada por el ciudadano Senador.

EL SECRETARIO.—Son 14 solicitudes que vienen acompañadas de una comunicación, fechada en Guri, Estado Bolívar, el 8 de abril que dice: (Lee):

COMUNICACION:

Guri, Estado Bolívar, 8 de abril de 1959.

Ciudadano
Presidente de la Cámara del Senado
Caracas.

Por órgano de usted me dirijo a esa Honorable Cámara, adjuntándole catorce solicitudes de tierras baldías de las innumerables que han sido concedidas en el Estado Bolívar. Como se deduce de su lectura, el más alto porcentaje de ellas ha sido pedido y tal vez concedido a ciudadanos de nacionalidad extranjera.

No escapará a ese Ilustre Cuerpo, el problema que plantea esta indiscriminada concesión que debido a las deficiencias de la Ley de Tierras Baldías, se está realizando.

Espero que una Comisión del seno de esa Honorable Cámara se aboque al estudio de este problema que afecta a la nacionalidad misma.

Me suscribo de usted muy atentamente,

(Fdo.).

Luis Juvenal Peña.

SENADOR SISO MARTINEZ.—Pido la palabra.—**(Concedida)**.— Ciudadano Presidente: ciudadanos Senadores.—He leído con alguna atención las solicitudes que acompaña el ciudadano Luis Juvenal Peña, y en efecto, me he encontrado con que la mayoría de ellas son hechas por ciudadanos nacionalizados venezolanos y no residentes en el Estado Bolívar. La mayoría de ellos están residenciados en el Distrito Sucre, del Estado Miranda y algunos hasta en el Estado Mérida. Esto me ha movido a plantear aquí un problema en el cual va envuelto el desarrollo económico mismo del Estado Bolívar. Esto es una consecuencia de la deficiencia de la actual Ley de Tierras Baldías y Ejidos. La Ley de Tierras Baldías y Ejidos, es prácticamente una ley colonial, dictada con un sentido completamente individualista, sin atender a las necesidades económicas y sociales de la región. En el caso específico de Guayana, fue dictado cuando Guayana estaba completamente inaccesible, cuando era toda una aventura internarse a ella, pero la industrialización de Guayana, la creación de la Siderúrgica, plantea esto en un terreno completamente nuevo. En efecto, debido a la liberalidad de la Ley de Tierras Baldías, a diario se conceden, indiscriminadamente, solicitudes de arrendamiento de tierras que al cabo de cinco (5) años pueden ser convertidas en adquisición por compra a la nación. En estas tierras, la mayoría de estas solicitudes, generalmente están viciadas. Puede comprobarse con un simple análisis de esas solicitudes, que la mayoría de ellas declaran tierras de agricultura de primera y de segunda clase como de cría, de primera y de segunda con el objeto de evadir el pago del cánon de renta que establece la Ley. Del mismo modo para evadir el pago en la compra, ya que el precio de las tierras de agricultura son totalmente distintas a las tierras de cría. Además, esto plantea un hecho nuevo, se ha comprobado también, que una gran cantidad de hacendados han ido acrecentando sus fundos debido a estas deficiencias de la Ley. Por medio de interpósitas personas han logrado el arrendamiento y posteriormente la compra y la han incorporado a su fundo creando en una región donde existen millones de hectáreas, un verdadero latifundio de las tierras aptamente útiles para la agricultura y para la cría. Además, el Artículo 13 de la Ley de Tierras Baldías, es completamente taxativo al respecto, estipula que no se podrán ceder en arrendamiento sin estudio previo, todos aquellos bosques, maderas, etc., y las regiones aquellas donde existen fuentes de agua; sin embargo, eso se está haciendo. Precisamente, en una de esas solicitudes, en abierta contradicción con la Ley de Tierras Baldías y con la Ley Forestal y de Aguas, que prohibe, ésta última, porque han sido declaradas zonas protectoras, que se concedan tierras donde nacen fuentes de agua, dice uno de los peticionarios lo siguiente: "que se le conceda un lote de terrenos de 1.000 hectáreas que se extiende desde las cabeceras del Río Camoirán, hacia el oeste", etc. etc. Como verán ustedes, se desprende de la lectura de esa solicitud, que incluso en la misma petición se están violando artículos expresos de la Ley Forestal y de Aguas. Por eso es por lo que me ha movido a traer esta tarde a consideración, una proposición con el objeto de que se le ponga coto a esta situación. Además, no hay que olvidar que Guayana, por su situación específica, se encuentra en este momento asediada por vastos intereses extranjeros que quieren, en una forma u otra, apoderarse de sus grandes recursos naturales. Yo, particularmente, creo que estos arrendamientos que se piden en la zona de Santa Elena, que además es una zona no apta para la agricultura, conforme lo estipula un estudio hecho por el Ministerio de Agricultura, y que está siendo concedida para agricultura y para cría, tiene otras finalidades, el de reservar esa zona para yacimientos diamantíferos o el de tener en un momento dado, tierras suficientes que puedan valorizarse. He sabido que una legua de terreno en Guayana, valía hasta no hace mucho, Bs. 4.000,00, sin embargo, hoy se ha elevado a Bs. 50.000,00 esta tierra. De modo que yo me he permitido traer unas proposiciones para que sean cursadas ante la Cámara, y las cuales voy a desdoblar en dos partes, la primera es de carácter inmediato, que con la venia de la Presidencia me voy a permitir leer: **(Asentimiento)**. Primera: "Que esta Cámara se dirija al Ministerio de Agricultura y Cría para hacer las denuncias correspondientes y que se proceda a hacer una revisión de las concesiones hechas y a la resolución de los contratos hechos con aquellas personas que no cumplen con lo estipulado en la Ley o cuyas tierras han sido concedidas por medios dolosos; que en la aplicación del artículo 29 de la ley se autoriza al Ejecutivo a conceder mayor cantidad de tierras en arrendamiento sea utilizado con las máximas de las precauciones; y que las nuevas concesiones sean hechas después de detenido estudio y que aun cuando no sea requisito específico determinado en la ley se considere la necesidad de que los solicitantes sean agricultores de verdad, estén dedicados a la agricultura o a la cría para que les puedan ser hechos estos arrendamientos y posteriormente dicha compra" y una segunda proposición de más largo alcance y que sería objeto, pues, del estudio de la Comisión Permanente de Agricultura quizás para las próximas reuniones de la Cámara o del Congreso: "Que la Comisión Permanente de Agricultura se aboque al estudio de una Ley de Tierras Baldías y Ejidos que contemple formas completamente nuevas de carácter económico, del estudio de los suelos, de las zonas reservadas, de las relaciones que tengan con la Ley Forestal y que se contemple, si no se ha contemplado, la inclusión en el articulado de la Reforma Agraria, de artículos que vengan a poner coto a estas irregularidades presentes". Con ese sentido, pues, voy a poner en manos de la Secretaría estas proposiciones. Además, para avalar todo lo que estoy diciendo me voy a permitir recordar que no hace mucho cursó ante esta Cámara y pasó a la Comisión Permanente de Agricultura una denuncia de unos ciudadanos de El Manteco que textualmente y con la venia de la Presidencia voy a leer. **(Asentimiento)**. Dice así: "Hoy ratificámosle—textualmente—alarmados ante posible explotación ilegal recursos forestales este Municipio dirigímonos a usted a fin esclarecer proyectos contratados a verificarse entre la Nación y el Ingeniero Angola. Según hojas publicadas consideramos muy vagos linderos demarcación zonas abarcando estas extensísimas regiones incluyendo propiedades particulares. Como hasta el presen-

te no se ha efectuado levantamiento topográfico y censo de las especies conforme a ley respectiva y en resguardo a intereses nacionales y de esta colectividad pedimos a ese Despacho a su digno cargo envíe ingeniero forestal fin constatar nuestra información y protesta. No extrañe demora en formular esta ya que anteriormente era imposible denunciar tales atropellos a los intereses nacionales por terrible mordaza régimen dictatorial. De ustedes atentos compatriotas. Ismael Gómez Rengel. Rafael Fernández, etc.".

De modo que esto, pues, plantea la urgencia de que la Cámara se dirija al Ministro de Agricultura y también la urgencia de que se aboque al estudio de una Ley de Tierras Baldías y de Ejidos que destierra completamente del espíritu de nuestra Legislación ese sentido quiritario individualista y proteja verdaderamente a los ocupantes de esas tierras y garantice a la Nación el derecho que sobre ellas tiene.

EL PRESIDENTE.— Está en consideración la proposición del Senador Siso Martínez.

SENADOR ALVAREZ YEPEZ. — Pido la palabra.— **(Concedida)** — Ciudadano Presidente: ciudadanos Senadores: Yo estoy en amplio acuerdo con la exposición del Senador Siso Martínez y quizás habría que buscar alguna medida, en el sentido de paralizar la cesión de tierras baldías en las puertas de una Reforma Agraria que se nos avecina. No voy a hacer una proposición concreta al respecto puesto que, habrá oportunidad al considerar esta en la Comisión Permanente de Agricultura. De tal manera que voy a darle mi pleno apoyo a las proposiciones del Senador Siso Martínez; sin embargo de paso se ha aludido y se ha dicho, como causal negativo el hecho de que los solicitantes sean venezolanos por naturalización o simplemente inmigrantes. Me da la impresión de que esa no debería llamarse como causal, puesto que si han venido aquí los inmigrantes, si se les ha dado la oportunidad de nacionalizarse, yo creo que también debe dárseles la oportunidad de trabajar y precisamente, de trabajar la tierra. Es una simple observación, más que todo por un poco de escrúpulo.

SENADOR FARACO.—Pido la palabra. — (Concedida).—La Fracción de Unión Republicana Democrática ha oído con interés la exposición del Senador Siso Martínez en relación con el problema del acaparamiento de las tierras baldías. Este es un problema que cobra contornos nacionales. Se ha producido en el país una verdadera legión de terrófagos que a través de estos contratos se han apoderado de las mejores tierras en los diferentes Estados de la República. En Falcón, por ejemplo, las mejores tierras de los Distritos Silva, Acosta y Federación han caído en manos de estas personas que a través de una solicitud al Ejecutivo han logrado controlar cuatrocientas y más hectáreas per capita. Este es un verdadero problema porque para la adquisición de las concesiones se emplean todos los medios fraudulentos posibles. Se exige, entre otras cosas, según el procedimiento, que el individuo que solicite en arrendamiento tierras baldías produzca documentos en los cuales compruebe su estado de pobreza y el trabajo que realiza directamente en la tierra. Se da el caso de que muchas personas, millonarios por cierto, se presentan con estos justificativos declarando pobreza absoluta para apoderarse de tierras que están en el interior del país. Se da el caso concreto de que una sola persona haya logrado acaparar en el Distrito Federación alrededor de cuatro mil hectáreas de tierras que se encuentran en las márgenes del Río Tocuyo, mediante esos procedimientos viciosos, de cohecho, por medios fradulentos, llegando a utilizar a los Inspectores Forestales en sus maniobras, ya que éstos tienen que rendir informe en relación con las solicitudes introducidas por estos señores. De manera, pues, que la proposición del Senador Siso Martínez viene a plantear la solución de un problema gravísimo en el país, sobre todo en momentos, que como dijo el Senador Alvarez Yépez, estamos frente a una Reforma Agraria que ha de realizarse en beneficio de la transformación de las relaciones de producción en el campo. Por todo lo expuesto nosotros, los de la Fracción Parlamentaria de U. R. D., apoyamos ampliamente la proposición del Senador Siso Martínez.

SENADOR HEREDIA ANGULO.— Pido la palabra.—**(Concedida)**.—Ciudadano Presidente: ciudadanos Senadores: También de manera muy breve voy a referirme a la importante materia que contemplan las proposiciones formuladas por el doctor Siso Martínez.

En primer término, tengo perfecto conocimiento de que es cierto que durante mucho tiempo se ha venido violando de una manera singular la Ley de Tierras Baldías. No existe hoy la Ley de Tierras Baldías y Ejidos porque, como muy bien sabemos los que trajinamos estas materias jurídicas, desde hace bastantes años se desglosó esta última materia, desde que quedó establecido el criterio de que no se podía legislar nacionalmente sobre la materia de ejido ya que esta era de la estricta competencia del poder municipal. Pero, si es cierto que dentro de la cuestión de terrenos baldíos no solamente se opera este tráfico que pretende apropiarse de ellos mediante la consecución por la vía del arrendamiento y la futura opción de compra de los mismos terrenos, sino que, gran parte de la riqueza forestal de la República y de esos caros recursos renovables que nosotros aquí hemos defendido con calor y singular entusiasmo, han sido objeto del mayor despilfarro en terrenos baldíos, a través de los contratos respectivos. Las explotaciones que se han hecho en los terrenos baldíos sobre los recursos forestales han sido verdaderamente exhaustivas. Las explotaciones de esta índole son mucho mayores que las explotaciones en los terrenos particulares porque hay facilidades mayores de burlar el Fisco o los intereses de la Nación, que los intereses de particulares, que hasta la fecha los custodian y defienden de una manera mucho más enérgica que el Estado. Por esta razón, yo, a título de simple sugestión, por ende no de proposición concreta, quiero llevar hasta el ánimo de la Comisión que vaya a estudiar esta materia de la proposición del Senador Siso Martínez, si resultare aprobada dicha proposición, que no deje de sugerirse al Ministerio respectivo la conducta más enérgica en cuanto a la revisión de los contratos que existen para la explotación de la riqueza forestal en los terrenos baldíos. Es bien sabido que se burla con mucha frecuencia esa disposición legal conforme a la cual son inalienables los terrenos baldíos en los cuales existan riqueza forestal preciosa. Hoy tenemos la ventaja de que existen decisiones de la Corte Federal en este sentido y han sido declaradas la nulidad de algunos contratos en igual respecto. Ahora, como no la contempla la proposición de una manera expresa, pero encuentro que en su espíritu si se encuentra contenido porque al referirse a la protección de este tipo de riqueza nacional o sea de la riqueza baldía, está implícito todo lo que constituye o todo lo que forma parte de esa riqueza. No debemos olvidarnos nosotros como representantes que somos de los Estados de la Unión, que en particular nos concierne esta materia, porque los terrenos baldíos no son nacionales. Los terrenos baldíos son de la propiedad de los Estados y la Nación sólo tiene de ella la administración; sin embargo, ha sido una administración bastante alegre la que hasta el presente ha tenido lugar respecto a toda esta clase de terrenos, respecto a los recursos que existen en esos terrenos baldíos, y, por tanto, a nosotros, tanto por el celo de esa amplia representación que ejercemos nos corresponde de una manera muy específica apoyar cuestiones como la propuesta por el doctor Siso Martínez en la cual se ventila la defensa y preservación de una riqueza extraordinariamente preciosa como es la que se encuentra en las tierras baldías, y cuanto a ellas le es inherente. Por estas razones, apoyo la proposición del Senador Siso Martínez y me permito sugerir a título de observación la exposición que ya hice sobre la riqueza forestal a la Comisión que al respecto sea designada.

SENADOR GONZALEZ.—Pido la palabra **(Concedida)**.—Ciudadano Presidente: ciudadanos Senadores: Nosotros, los integrantes de la Fracción de Copei en la Cámara del Senado, nos vamos a mostrar totalmente de acuerdo con el fondo de la proposición Siso Martínez, pero, sin embargo, quisiéramos proponer y así lo hacemos, que esta proposición pase a la Comisión de Agricultura en vista de que ya ha sido pasada la materia respectiva de la cuenta, o sea el número 4 por el ciudadano Presidente del Senado a la consideración de la Comisión Permanente de Agricultura. Consideramos que la materia es de gran trascendencia y en la discusión y estudio en el seno de la Comisión pueden presentarse una serie de nuevos argumentos a consideración y se podría traer una resolución que contuviera factores que no han sido traídos al debate. Por todas estas razones, vamos a proponer que se apruebe en principio la proposición del Senador Siso Martínez y sea pasada a la Comisión Permanente de Agricultura para que dicha Comisión presente un informe a la brevedad posible.

SENADOR SISO MARTINEZ.—Pido la palabra.—**(Concedida)**. — Ciudadano Presidente: Precisamente el sentido de mi proposición es que fuera estudiada por la Comisión específica, en este caso la Comisión Permanente de Agricultura, por lo tanto acojo la proposición que acaba de hacer el Senador González. Además es para hacer una breve aclaratoria respecto a algunas palabras del Senador Alvarez Yépez. En realidad, cuando hice alusión a que la mayoría de los solicitantes eran de nacionalidad extranjera, estaba lejos de mi ánimo ningún sentido chauvinista Sencillamente, me di cuenta de que la mayoría de esas solicitudes eran hechas por extranjeros y tengo la impresión de que no son agricultores. Si se lee con detenimiento se ve que la mayoría de ellos son residentes de quintas en Bello Monte, en San Bernardino, en las zonas del Country Club. Es decir, que este tipo de agricultores que en México llaman agricultores nylon, son, pues, agricultores que buscan estas tierras para arrendarlas y no con fines posteriores; creo que esa clase de inmigración de gentes con intenciones posteriores para comerciar con las tierras no nos convienen. Sí nos conviene específicamente el inmigrante que venga a colonizar, idea que no creo tengan los solicitantes.

EL PRESIDENTE.—Con la aceptación de la proposición del Senador González por el Senador Siso Martínez en realidad no hay sino una sola proposición que es que las proposi-

ciones del Senador Siso Martínez pasen al estudio de la Comisión Permanente de Agricultura y Cría.

(Cerrado el debate. Se vota la proposición del Senador González aceptada por el Senador Siso Martínez: aprobada).

5

EL PRESIDENTE.— Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al primer reservado de la cuenta.

EL SECRETARIO.—(Lee):

INFORME:

Caracas, 24 de abril de 1959.
150° y 101°

Ciudadano
Presidente de la Cámara del Senado
Su Despacho.

Los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de Fomento de la Cámara del Senado, tenemos a honra presentar a esa honorable Cámara el presente Informe:

MATERIA: Comunicación del Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Monagas, fechado en Maturín el 22de Enero del presente año, por la cual solicita "que en el próximo Presupuesto a elaborar para el año Fiscal 1959-1960 incluya (entre otras obras) la extensión al resto del Estado de los planes de Electrificación de la Corporación Venezolana de Fomento".

Por cuanto el pedimento de la referida comunicación que ha sido sometido a nuestra consideración y estudio se relaciona directamente con los planes de Electrificación que adelanta la Corporación Venezolana de Fomento, y ésta, por disposición de la Ley, es un Instituto Autónomo que elabora sus programas y presupuestos con independencia de las Cámaras Legislativas, esta Comisión se permite PROPONER a la Presidencia que transcriba la referida comunicación al citado Instituto a los fines consiguientes.

Atentamente.

(Fdo.).

Dr. Martín Pérez Guevara,
Presidente.

Dr. Braulio Jatar Dotti,
Vice-Presidente.
Dr. Cipriano Heredia A.
Dr. Carlos Augusto León.
Dr. Frollán Alvarez Yépez.
Dr. Rafael Octavio Jiménez
Dr. Luis Alejandro González

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota: aprobado).

EL PRESIDENTE.—Sírvase pasar al siguiente reservado, ciudadano Secretario.

EL SECRETARIO.— Dos informes de la Comisión Permanente de Justicia. (Lee):

INFORME:

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DEL SENADO

COMISION DE JUSTICIA

Caracas, 27 de abril de 1959.

Los suscritos, integrantes de la COMISION DE JUSTICIA de la Cámara del Senado, tenemos a honra presentar a ese Cuerpo el siguiente Informe.

Comunicación suscrita por Juan Ramírez Gandica, Ramón Montoya y otros, de 10 de marzo del presente año, por la que denuncian que el Registrador Subalterno de La Grita, Distrito Jáuregui, del Estado Táchira, se niega a protocolizar los documentos por ellos redactados, fundándose en el Artículo 80 de la Ley de Abogados, no obstante que el Artículo 85 de la Ley de Registro Público vigente autoriza a quienes no sean abogados ni procuradores a redactar documentos públicos, cuando se cumplan las condiciones establecidas en dicha disposición legal.

Esta Comisión ha estudiado detenidamente la materia objeto de este Informe y ha dictaminado que esta materia escapa completamente a la competencia propia de las Cámaras Legislativas. El Artículo 11 de la Ley de Registro Público atribuye a la Corte Federal y de Casación (actualmente Corte Federal) la resolución de las dudas que ocurrieren en cuanto a la inteligencia o aplicación de dicha Ley. En consecuencia, si los interesados consideran errada la interpretación que da el ciudadano Registrador de La Grita a la disposición que citan en su comunicación, no es el Congreso Nacional sino la citada Corte Federal la llamada a resolver su queja.

Por tanto, respetuosamente, nos permitimos PROPONER: que el ciudadano Presidente de la Cámara dé contestación a la comunicación de los peticionarios, en el sentido expresado en este INFORME.

(Fdo.).

Martín Pérez Guevara,
Presidente.

José S. Núñez Aristimuño,
Vice-Presidente.

Edecio La Riva Araujo.

Ernesto González A.

(En consideración.—Cerrado el debate.— Se vota: aprobado).

EL SECRETARIO.—(Lee):

INFORME:

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DEL SENADO

COMISION DE JUSTICA

Caracas, 27 de abril de 1959.

Los suscritos, integrantes de la COMISION DE JUSTICIA de la Cámara del Senado, tenemos a honra presentar a ese Cuerpo el siguiente

INFORME:

MATERIA: Comunicación del 24 de marzo del presente año, por el cual, "EL COMITE EJECUTIVO REGIONAL DE VETERANOS REVOLUCIONARIOS DE GUASINA Y SACUPANA DEL ESTADO ANZOATEGUI", pide al Presidente y demás Miembros del Congreso Nacional:

a), que se constituyan en acusadores de Marcos Pérez Jiménez Laureano Vallenilla Lanz, Luis Felipe Llovera Páez y demás culpables de los crímenes cometidos durante la dictadura;

b), que se castigue a los asesinos de Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevalli, Antonio Pinto Salinas y otros civiles o militares, víctimas de la dictadura, a fin de que no queden impunes estos crímenes; y

c), que se haga un estudio minucioso de todos los funcionarios que ocupen cargos en el actual gobierno constitucional o de quienes puedan culparlos en el futuro, a fin de sanear la administración pública e impedir que se infiltren en ésta los enemigos del pueblo venezolano.

Esta Comisión ha estudiado detenidamente la materia objeto de este Informe y ha dictaminado que es una expresión más del sentimiento de justicia que, desde un extremo a otro de nuestro país, clama por la condenación y castigo de quienes, utilizando los recursos del poder, atentaron contra la libertad, la seguridad, el sosiego y la paz de millares de ciudadanos y, que aún pretenden perturbar el orden y la tranquilidad públicas, aprovechándose del clima de libertades que caracteriza esta etapa de la historia de la Nación.

Aunque el Congreso Nacional no puede constituirse en acusador por ante los Tribunales de Justicia de los culpables de tales crímenes, acoge la petición que se le hace con el mismo respeto con que ya ha recibido otras comunicaciones similares y, a través de sus diversas Comisiones, se ocupa actualmente del estudio de las medidas más adecuadas para dar satisfactoria respuesta al sentimiento colectivo de justicia del cual es genuina expresión el documento objeto del presente INFORME.

En tanto sean adoptadas tales medidas, esta Comisión se permite PROPONER:

Que la Cámara transmita la comunicación en referencia al Ciudadano Procurador de la Nación por considerar que los firmantes de ella podrían prestar una valiosa contribución al esclarecimiento de algunos de los crímenes que actualmente son objeto de inquisición por ante los tribunales penales. Igualmente, se permite recomendar esta Comisión al Ciudadano Presidente de la Cámara, dé respuesta a la petición que es materia de este Informe en el sentido arriba expresado.

(Fdo.).

Dr. Martín Pérez Guevara,
Presidente.

Dr. José S. Núñez Aristimuño.
Vice-Presidente.

Dr. Edecio La Riva Araujo.
Dr. Ernesto González Araujo.

(En consideración.— Cerrado el debate.— Se vota: aprobado).

EL PRESIDENTE.— Se concede el derecho de palabra.—(Pausa). — Si ningún Senador hace uso de la palabra se va a clausurar la sesión.—(Pausa). — Se levanta la sesión. — **(A las 5.35 p. m.).**

Los Taquígrafos,

Hipólito Acosta Merlo.
Estrella de López.

LA REFORMA AGRARIA Y LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

(Exposición que formula el compañero Pérez Segnini en torno a las observaciones que sobre el tema ha hecho el compañero Ramón Quijada)

El compañero Secretario General del Partido me ha hecho conocer un memorándum presentado por el compañero Ramón Quijada para justificar su renuncia al Directorio del Instituto Agrario Nacional. En dicho documento se anotan críticas que, a mi juicio, pueden sintetizarse así:

A) Indebida orientación del presupuesto y política conservadora en cuanto a inversiones para compra de fincas.

B) Lentitud en la marcha de la Reforma Agraria.

A) La orientación, distribución y manejo del presupuesto.-

Tengo el firme convencimiento de que para un hombre de Gobierno constituye timbre de orgullo el ser buen administrador, y cuando este hombre de Gobierno compromete con su actitud la responsabilidad de un partido político de la jerarquía de Acción Democrática, esta razón se convierte en un deber ineludible. Consciente de esta responsabilidad he mantenido y mantengo un estricto control no sólo sobre la orientación sino, especialmente, sobre el manejo del presupuesto, para impedir que una alegre distribución de los gastos o una irreflexiva política administrativa, pueda generar crisis que sólo perjudican y le-

sionar el crédito de la administración pública y comprometer el prestigio de nuestra organización política. Como un ejemplo del resultado de esta línea de conducta, vale la pena señalar que cuando recibimos el Instituto Agrario Nacional, en el mes de abril de 1959, los balances de fines de ese año fiscal nos indicaron que habíamos recibido una administración en quiebra, porque para ese momento el Instituto arrastraba un sobregiro de aproximadamente - 15 millones de bolívares. En tales condiciones entramos a manejar el año fiscal 59-60 sin que entonces el Instituto hubiese apelado a la solicitud de créditos adicionales a que legítimamente tenía derecho para equilibrar su déficit presupuestario. En el transcurso de ese año, el Instituto, - con una política de austeridad y reajuste en sus gastos, de revisión y rescisión de contratos de obras no urgentes y de sencilla ejecución, de sus menores erogaciones, no sólo llegó a cubrir el sobregiro con su presupuesto ordinario, sino que pudo prestar al Ministerio de Obras Públicas aproximadamente 10 millones de bolívares y lo que es más importante, terminar su ejercicio fiscal con un superávit.

Llegamos al presupuesto 60-61. El hecho de que la administración nacional no hubiese podido atender los requerimientos del Instituto, sino que le asignó una suma muy inferior a la solicitada, nos impuso la obligación de redistribuir la asignación real con que contábamos, o sea la cantidad de 200 millones de bolívares.

p/deforestación y desenmontado	4.000.000	-	1,61%
p/gastos de topografía	2.000.000	-	0,80%
p/expropiación servidumbres	3.000.000	-	1,21%
p/servidumbres campo abierto	7.000.000	-	2,81%
p/estudios	2.000.000	-	0,80%
p/programas especiales	1.000.000	-	0,40%
p/todo lo restante	1.000.000	119.000.000	248.000.000,oo

Un ligero análisis de cada una de estas líneas de presupuesto podrá convencer de la correspondiente necesidad que cada una de ellas tiene señalada en la cuantía de nuestro cálculo. Todas y cada una de estas clases de presupuesto están muy por debajo de los requerimientos que en cada una de las diferentes Delegaciones del Instituto en el interior y en relación a cada obra realizada con el criterio de mantenerse en su nivel original la línea de presupuesto destinada para adquisición de tierras, que como es sabido supera el 60% de nuestras disponibilidades para programas.

Manejo y aplicación del presupuesto.-

El manejo del presupuesto y la técnica de su inversión están íntimamente ligados a la naturaleza de los trabajos que realiza el organismo respectivo. Las peculiares de la ingeniería y los fenómenos naturales determinan variantes notables en el cálculo de las inversiones. Así, pues, es un error considerar que la regularidad de los ingresos debe marchar aparejada con

ma regularidad habitual para los agricultores. En lo que toca al Instituto, durante el año fiscal, nuestra época de mayores ingresos [illegible] los meses de noviembre a abril, cuando la presente campaña llega a su clímax por coincidir con la época de preparación de tierras y siembras de invierno, y al mismo tiempo nuestras obras materiales (desmontes, desenconado, construcción de carreteras, drenajes, etc.) cobran su mayor impulso por razón del aprovechamiento de la época de verano. De allí que los primeros meses del año fiscal (julio a octubre) se caractericen por un relativo estancamiento de nuestras disponibilidades, mientras los últimos meses del año fiscal (mayo y junio) señalan un índice notablemente contrario. El corto desarrollo [illegible] puede ser muy peligroso para una correcta administración, especialmente cuando, como en el caso del Instituto, el organismo administrador está empeñado en desarrollar sus funciones ajustado al ritmo de sus recursos, sin alterar el normal desenvolvimiento de los créditos administrados.

Habiendo transcurrido 1/3 de año fiscal (julio a octubre), podemos apreciar con cifras la forma como se ha desenvuelto nuestra economía financiera.

Para el último día del mes de octubre nuestros ingresos constituidos por cobranzas del año fiscal anterior, disponibilidades en la cuenta especial para adquisición de maquinaria agrícola, diversos correspondientes a cuatro meses, entradas por concepto de recuperación de servicios de maquinaria -

convenga al Instituto debe convencer al propietario para que pueda concluir en un acuerdo, y esto pocas veces se logra de inmediato; y, por último, un acuerdo final no puede olvidar las reacciones de la opinión pública -que no siempre es la de la calle- sino la de minorías representativas con influencias reales en las altas esferas de los diversos poderes. Como dato curioso, demostrativo de las situaciones antagónicas a que tiene que enfrentarse un funcionario, a veces casi simultáneamente, valga la pena señalar que mientras ahora los compañeros Quijada y Alberti señalan lentitud en el proceso de adquisición de fincas, hace apenas unas semanas CORDIPLAN suponía lo contrario: que la política del IAN en ese sentido estaba siendo adelantada con alguna precipitación, obligándonos a exponer cifras para demostrar lo correcto de nuestra orientación. Esas mismas cifras que nosotros expusimos entonces y que hoy están obsoletas, son las que ahora emplean los compañeros Quijada y Alberti para aflanzar una idea contraria. El compañero Quijada se ha referido a la pérdida de tiempo por regateo de parte del IAN con miras a rebajar los precios, y por otra parte, se me hace concurrir a la Comisión de Política Agraria del Congreso Nacional para responder a las acusaciones de algunos miembros del parlamento, que consideran que estamos pagando precios demasiado altos por las fincas que se adquieren, especialmente en Carabobo, Portuguesa y Sucre, lo cual no es una posición nueva del Congreso, sino una ratificación de lo que constituyó una observación de dicho Poder Legislativo al IAN en la oportunidad de examinar nuestra última Memoria.

do el Instituto desarrolla sus mayores actividades.

De los 60 millones de bolívares (61,54%) de nuestra gran partida para programaciones, destinadas al pago en efectivo por concepto de tierras adquiridas a particulares, el Instituto invirtió hasta el último día del mes de octubre, Bs 18.945.831,93, que sumados a los 40.317.781,15 pagados en bonos por el mismo concepto totalizan Bs 61.466.069,08. La gran mayoría de estas adquisiciones, como podrá observarse en el cuadro detallado que se anexa a esta exposición, ha sido de realización posterior al planteamiento que hicieran los compañeros Alberti y Quijada en el seno del Directorio. Si se recuerda que este primer tercio de año fiscal es el de menor inversión, será fácil juzgar la política del instituto en este sentido. Es conveniente agregar que estamos operando en un campo completamente nuevo como es éste de la adquisición de tierras de particulares para fines de reforma agraria y, más que eso, que estamos frente a una escala de valores totalmente deformada por efecto de la política inflacionista de la dictadura, siendo precisamente ahora cuando empezamos, mediante esta intervención del IAN, a conformar un sistema de justiprecio y a elaborar una justa escala de valores para la tierra, que más adelante nos va a ser de gran utilidad, permitiéndonos avanzar con mucha más celeridad.

Finalmente, es interesante hacer notar que la mecánica de la adquisición de tierras por las vías del común acuerdo no es tan fácil como se cree. Primero está sujeta al criterio del avaluador: un avalúo irreal, hacia arriba o hacia abajo, genera nuevos avalúos y pérdida de tiempo; un avalúo que

De los 15 millones de bolívares (11,54%) de nuestra partida de programaciones, 7 millones están destinados a la compra de galpones; y de estos 7, ya se habían gastado para el último día de octubre 2.500.000 de bolívares, en galpones que están siendo instalados actualmente en zonas de Portuguesa, Cojedes, Lara, Yaracuy y Sucre. Es de observar que estos galpones fueron pedidos desde la fecha en que los compañeros Quijada y Alberti hicieron su exposición en el Directorio y que, aun cuando no han sido terminados, ello se debe a que el período de lluvias no permitiría este tipo de labores. No obstante podrá observarse que nuestra inversión se ajusta a su distribución en el tiempo.

En lo que respecta a servicios mecanizados, es obvio señalar que solamente es a partir de esta fecha (noviembre), cuando se intensifican los trabajos de mecanización en el campo, pese a lo cual, de los 12 millones de bolívares destinados para ello en nuestro presupuesto, ya se invirtieron en los meses de julio a octubre Bs 2.534.152,00, habiéndose realizado trabajos durante esa misma época, que pasan de las 6.000 hectáreas deforestadas y destroncadas y de otras 15.000 Has. roturadas y rastreadas.

Vale la pena llamar la atención sobre trabajos no propiamente agrícolas pero sí de gran trascendencia para la comunidad, que han realizado las maquinarias del Instituto, como es el caso de la carretera Los Caracas-Chuspa, decretada por Gómez, López Contreras, Medina Angarita, Betancourt, Gallegos y Pérez Jiménez sin haberla construido nunca y que el Instituto acaba

de poder en nuestro país concluyendo nuestra charla con algunas palabras de la Biblia, con libros a un determinado grupo de pobladores y cantores que en los días pasados dieron muestra de su arte.

LA MARCHA DE LA REFORMA AGRARIA -

Y ahora finalmente no puedo dejar de hacer el compañero Quijada en relación a la marcha de la reforma agraria, un recuento breve de lo que continuamos haciendo. Ya se ha dicho mucho sobre fuerzas del Estado y sobre entidades privadas en este momento. En cuanto al uso de nuestros recursos naturales renovables, en particular para el uso de las tierras de explotación agropecuaria, la reforma, tiene por objeto fundamental el de entregar a los campesinos. Así pues, debemos ver con la mayor satisfacción que en el año de 1959 al tiempo de la caída de Batista existían, como ya lo mencionó el señor Ministro, en el período de los años 1955 a 1958... Mientras en el año de 1959 se entregó a los campesinos una extensión de 18.000 Hás. de diversas calidades, equivalente al 72.39% de la superficie total entregada en el año 1960, para el Ministerio de Agricultura, en entregarse 178.031 Hás. equivalentes al 46.61% de la superficie total entregada. Estas cifras porcentuales de hectáreas entregadas en ambos períodos gobernados por un mismo régimen nos dan la pauta para apreciar la gran diferencia que existe entre una política de reforma agraria que fue orientada en 1959 y otra que en 1964 tiene en sus manos grandes extensiones de particulares (en cuyo caso equivale al 2.5% del total de familias asentadas) en el año 1960 (equivalente a 7.000 Hás. lo que representa el 41.67% del total de familias asentadas hasta el último día de octubre de 1964).

No obstante lo anterior, nosotros desearíamos imprimirle mayor velocidad aún al proceso de la reforma, pero nos lo han impedido hasta esta fecha factores muy importantes que no son precisamente los que señala el compañero Quijada.

A mi juicio, es el instrumento jurídico y no la voluntad de los funcionarios, lo que en mayor grado impide el que pueda imprimírsele más velocidad a este proceso, en el cual nuestra organización política se juega su destino histórico. De allí que sea muy importante señalar con entera sinceridad estas causas, de manera tal que no vayamos a caer en aquello de que "los árboles nos impiden ver el bosque". Cuando la Ley Agraria consagra un mismo procedimiento para adquirir las fincas que cumplen función social y para las que no la cumplen manteniéndose en irritante ociosidad, está frenando la marcha del proceso. Si nosotros contáramos con un instrumento jurídico que nos permitiese ocupar, mediante simple comprobación judicial ocular, cualquier tierra ociosa, sea quien fuere su dueño y el lugar donde se hallare, el Instituto estaría en capacidad de acelerar en forma extraordinaria el proceso. Cuando la Ley Agraria consagra, como lo hace ahora, un procedimiento para el juicio de expropiación -que es el instrumento decisivo que toda reforma agraria posee para el logro de su cometido- sometido a una mecánica tal que nos coloca en posición desventajosa, al grado tal que nos hace eludir constantemente este tipo de procedimiento, está frenando el proceso de la reforma. Cuando la Ley Agraria nos obliga, como lo hace ahora, a consignar bonos de tipo privilegiado para lograr la ocupación previa de una finca que debe ser pagada en bonos de la serie menos protegida, ha-

ciéndonos correr el riesgo de perder el depósito en caso de que la parte a expropiarse acepte el precio consignado, se está obstruyendo la marcha del proceso. Cuando la Ley Agraria deja de fijar un precio tope para los pagos en efectivo y en cambio acoge una escala de porcentaje -de por sí onerosa para el Estado- y cuando obliga al pago de las bienhechurías en efectivo, sea cual fuere su monto, está encareciendo y de por sí limitando la marcha del proceso. Podríamos seguir enumerando la serie de fallas que la Ley presenta, para justificar los puntos de vista de que es aquí donde reside la causa específica que nos impide avanzar con mayor rapidez, pero no consideramos esta la oportunidad más adecuada para ello.

CONCLUSIONES:

A mi juicio, no existen razones suficientemente valederas para justificar las afirmaciones que ha hecho el compañero Quijada y que le llevan a tomar la determinación que anuncia en su memorándum. No quiere decir esto que deje de reconocer relativa importancia a los argumentos señalados por él en uno y otro caso, pero me atrevo a afirmar que sobre su ánimo golpean con más vigor razones de otro tipo que debemos plantear y discutir con toda sinceridad, como es norma tradicional de nuestra organización y como lo requiere el país en momentos por demás difíciles.

El compañero Quijada plantea la existencia de discrepancias de criterio entre él y yo, especialmente en cuestiones de tipo administrativo, y señala sin ambajes que el órgano ejecutor del Directorio es incapaz de realizar con la eficacia que el momento requiere, las decisiones del mismo.

Debo empezar por reconocer que el compañero Quijada tiene razón cuando denuncia la existencia de esa disparidad de criterio en cuanto se refiere a la mecánica administrativa. Con la sinceridad y franqueza a que nos obliga no sólo los nexos de compañerismo político sino una vieja y larga amistad, el compañero Quijada me planteó crudamente, en conversación que ambos sostuvimos en la tarde del día 2 de los corrientes, que él no estaba dispuesto a continuar en el Directorio del IAN manteniendo una posición de segunda importancia, como a juicio suyo había sido hasta ahora. Me atrevo a creer que esta y no otra es la principal razón que hoy determina su actitud. Siendo así, me parece innecesario entre nosotros, enojoso para el Partido e inconveniente para el Gobierno, continuar una discusión que debe plantearse y resolverse sobre bases enteramente distintas a las que ahora le han servido de fundamento, aparte de que no es justo ni correcto tratar de lograr por las vías de la discusión de calle y mediante el descrédito de la línea política gubernamental, una reorganización burocrática e incluso un cambio de línea política si es que así se considera necesario, cuando a tal meta podemos arribar mediante la discusión interna en el seno de nuestra gran familia acciondemocratista.

Si como dice el compañero Quijada, su retiro y el del compañero Alberti del Directorio del IAN obedece al hecho escueto de que la mecánica ejecutiva de este Instituto no responde a las necesidades que el problema agrario plantea y tampoco cumple las decisiones que el Directorio concibe y ordena para solucionarlo, ni su salida ni la del compañero Alberti constituyen una solución al problema. Siendo así, no hay otro camino que la sustitución inm

como Presidente del Instituto, por cuanto tal hecho involucraría un cambio fundamental en la dinámica que el organismo, a juicio de los compañeros, reclama. Por otra parte, si las diferencias que llevan a los compañeros a separarse no se nutren en estas razones, sino que están conformadas por discrepancias de tipo personal, tampoco es su retiro la solución al problema, ya que mi permanencia al frente del Instituto podría significar la continuidad de una línea de acción con la cual ellos están en desacuerdo y que, por consecuencia con la clase que representan, si la han combatido dentro del Instituto, mañana estarán obligados a seguirla combatiendo fuera de él. Y esto sería poco saludable para la situación política del país y para el afianzamiento del sistema democrático.

Las excelentes condiciones personales que el compañero Quijada posee, sus relevantes méritos de luchador y la poderosa fuerza que él representa y conduce dentro de nuestra organización partidista, le obligan con el país, con el Partido y con su clase a continuar en la función que hasta ahora ha tenido encomendada dentro del Instituto y que, quizás por mi inexperiencia política y administrativa, le he impedido cumplir a cabalidad. Por las razones expuestas me permito rogar a nuestra Dirección Nacional que no acepte la posición que el compañero Quijada asume y que, por el contrario, determine su continuidad en el aparato administrativo, invistiéndolo, si es posible, de mayores responsabilidades. Por lo que a mí toca, solicito se me autorice a retornar a mi curul en la Cámara de Senadores, donde podré

cumplir la tarea que el Partido me encomiende y servir más directamente a la causa de obreros que me eligieron su regidor.

Caracas, 15 de septiembre de 1960.

TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA ADQUIRIDAS POR EL INSTITUTO AGRARIO NACIONAL EN 1960

PARA SER ENTREGADAS GRATUITAMENTE A LOS CAMPESINOS

FECHA	VENDEDOR	BIENES	EXTENSION Has.	JURISDICCION MUNICIPIO	DISTRITO	ESTADO	VALOR Bs.	PAGO INICIAL EFECTIVO Bs.	BONOS Bs.	OBLIGACIONES SUBROGADAS. Bs
29-8-60	JULIO ABDON PEREZ PERDOMO	"SANTA LUCIA" y "LAS MERCEDES"	2.400		Ricaurte	Aragua	1.100.000,oo	225.524,oo	646.989,45	227.486,55
30-9-60	RAMON PIMENTEL	"VIGIRIMA" o "VIGIRIMA ARRIBA"	11;500		Guacara y Valencia.	Carabobo	26.500.000,oo	6.400.000,oo	20.100.000,oo	---
31-10-60	JULIAN BRITO	"EL CERRITO"	300		Guacara y Valencia.	Carabobo	750.000,oo	150.000,oo	600.000,oo	---
8-8-60	DR. CARLOS COSSE MANINAT	"EL PAITO" Y BIENHECHURIAS	20	Candelaria	Valencia	Carabobo	180.000,oo	108.000,oo	---	72.000,oo
31-8-60	DR. CARLOS LUGO ESCOBAR	PARTE DE "EL COROZO"	70	Belén	Carlos Arvelo.	Carabobo	160.000,oo	53.463,oo	---	106.537,oo
17-6-60	DR. INMER BELIZ HERNANDEZ	"PARCELA N° 9", POTRERO 1,LA ADUANA	45	Güigüe	Carlos Arvelo.	Carabobo	100.000,oo	100.000,oo	---	---
6-11-60	FRANCISCO DE PAULA LEON	"SABANA ARRIBA"	400		Montalban, Nirgua.	Carabobo Yaracuy	478.900,oo	198.900,oo	280.000,oo	---
7-10-60	EVENCIO LUQUE	"CAMPO ALEGRE", "JOBAL" o "CAÑAOTES" Y "PALO QUEMADO"	7.000		Ricaurte y San Carlos	Cojedes	700.000,oo	140.000,oo	560.000,oo	---
22-9-60	SUC. DR PEDRO M. ARCAYA	"HUEQUES", "MACUARE" y "LOS RIEGOS"	2.200	Colina Cabure	Petit	Falcón	500.000,oo	200.000,oo	300.000,oo	---
30-9-60	MANUEL IGNACIO ALVAREZ	"QUIRAGUA"	864	Pto.Cumarebo.	Zamora	Falcón	175.000,oo	130.000,oo	45.000,oo	---
27-9-60	JOSE A. GUEVARA ARAGORT	'LOS ROBLES" Y BIENHECHURIAS EN BALDIOS "EL PAURAL".	1.000	Altagracia de Orituco	Monagas	Guárico	112.250,60	112.250,60	---	---
22.7-60	Dr. PEDRO LINARES PEREZ	"LAS VERAS"	1.000	Catedral y José M. Blanco.	Iribarren y Crespo	Lara	199.360,oo	84.087,60	99.360,oo	15.912,40
30.-9-60	DR. JULIO ALVARADO SILVA	"LA MATA" Y "LA MONTAÑA"	2.173	Los Rastrojos y Cabudare.	Palavicino	Lara	1.500.000,oo	200.000,oo	747.990,10	552.009,90
3-6-60	JOSE HERRERA LIRA	"BOCA DE PERAZA"	839	Panaquire	Acevedo	Miranda	206.675,oo	41.335,oo	165.340,oo	---
1-6-60	DR. JESUS R. LEZAMA GOMEZ	"EL SITIO"	1.339	Panaquire	Acevedo	Miranda	303.453,44	60.690,68	242.762,76	---
7-10-60	JOSE LOZADA VELIZ y FRANCISCO PRADO T.	"EL CHORRO"	550	Capaya	Acevedo	Miranda	100.000,oo	100.000,oo	---	---
22.-9-60	DR. MANUEL HERRERA LIRA	"LA CASTELLANA"	370	Panaquire	Acevedo	Miranda	310.000,oo	35.768,98	143.075,92	131.155,10
26-9-60	JUAN BOADA HERRERA	"PALACIOS" Y "LA PROVIDENCIA"	107		Páez	Miranda	270.000,oo	100.000,oo	147.658,90	22.341,10
21-10-60	COMPAÑIA ANONIMA LA MARAVILLA	"LA MARAVILLA"	329	Tacarigua	Brión	Miranda	130.000,oo	130.000,oo	---	---
22-6-60	ZOILO J. HERNANDEZ	"MANGO DE OCOITA"	542	Panaquire	Acevedo	Miranda	227.887,50	45.577,50	182.310,oo	---
27-5-60	JOSE A. HERNANDEZ ROURA	"SANTA ROSA"	576		Acevedo	Miranda	312.187,50	62.437,50	249.750,oo	---
7-10-60	SUCESION ABREU JIMENEZ	"PLANTACIONES"	2.795	San Simón	Maturín	Monagas	580.000,oo	195.000,oo	385.000,oo	
3-6-60	SUCESION M. PEREZ PEREZ	"CHORO SOTELDEÑO" Y "CHORO BOCOY"	5.040		Araure	Portuguesa	1.500.000,oo	225.000,oo	1.275.000,oo	---
8-7-60	BLANCA CELINA CALANCHE DE ARZOLA	"MARATAN"	5.152		Páez	Portuguesa	1.600.000,oo	240.000,oo	1.360.000,oo	---
21-10-60	JOSE ASUNCION RODRIGUEZ	"COCUIZA"	7.000	Santa Cruz Santa María	Ribero	Sucre	2.587.027,oo	602.027,oo	1.985.000,oo	---

30.-9-60	DR. JULIO ALVARADO SILVA	"LA MATA" Y "LA MONTAÑA"	2.173	Los Rastrojos y Cabudare.	Palavicino	Lara	
3-6-60	JOSE HERRERA LIRA	"BOCA DE PERAZA"	839	Panaquire	Acevedo	Miranda	
1-6-60	DR. JESUS R. LEZAMA GOMEZ	"EL SITIO"	1.339	Panaquire	Acevedo	Miranda	
7-10-60	JOSE LOZADA VELIZ y FRANCISCO PRADO T.	"EL CHORRO"	550	Capaya	Acevedo	Miranda	
22.-9-60	DR. MANUEL HERRERA LIRA	"LA CASTELLANA"	370	Panaquire	Acevedo	Mirada	
26-9-60	JUAN BOADA HERRERA	"PALACIOS" Y "LA PROVIDENCIA"	107		Páez	Miranda	
21-10-60	COMPAÑIA ANONIMA LA MARAVILLA	"LA MARAVILLA"	329	Tacarigua	Brión	Miranda	
22-6-60	ZOILO J. HERNANDEZ	"MANGO DE OCOITA"	542	Panaquire	Acevedo	Miranda	
27-5-60	JOSE A. HERNANDEZ ROURA	"SANTA ROSA"	576		Acevedo	Miranda	
7-10-60	SUCESION ABREU JIMENEZ	"PLANTACIONES"	2.795	San Simón	Maturín	Monagas	
3-6-60	SUCESION M. PEREZ PEREZ	"CHORO SOTELDEÑO" Y "CHORO BOCOY"	5.040		Araure	Portuguesa	1.
8-7-60	BLANCA CELINA CALANCHE DE ARZOLA	"MARATAN"	5.152		Páez	Portuguesa	1.
21-10-60	JOSE ASUNCION RODRIGUEZ	"COCUIZA"	7.000	Santa Cruz Santa María	Ribero	Sucre	2.
16-3-60	SERGIO LYON HERNANDEZ	LOTE TERRENO SAN BONIFACIO	99	Catuaro	Ribero	Sucre	
29-8-60	LUIS BELTRAN BASTARDO	"SAN AGUSTIN" Y "SAMURAI"	360	Yaguaraparo	Mariño		
14-10-60	CORONEL CARLOS LUIS ARAQUE	"SECTOR CASCARI"	1.391	Irapa Rubio	Arismendi Junín	Sucre Táchira	1.(1.(
21-10-60	JOSE A. QUINTERO GUILLEN	"SAN MATEO" DE LA FUNDACION	15.000		Jáuregui	Táchira	5
13-10-60	ENZO APAINI BERZANI	"EL CERRO" o "LA BETICO"	5.000	Pampán	Trujillo	Trujillo	1.5
	SUB-TOTALES;		75.461				44.7

	2.173	Los Rastrojos y Cabudare.	Palavicino	Lara	1.500.000,oo	200.000,oo	747.990,10	552.009,90
	839	Panaquire	Acevedo	Miranda	206.675,oo	41.335,oo	165.340,oo	---
	1.339	Panaquire	Acevedo	Miranda	303.453,44	60.690,68	242.762,76	---
	550	Capaya	Acevedo	Miranda	100.000,oo	100.000,oo	---	---
	370	Panaquire	Acevedo	Mirada	310.000,oo	35.768,98	143.075,92	131.155,10
IDENCIA"	107		Páez	Miranda	270.000,oo	100.000,oo	147.658,90	22.341,10
	329	Tacarigua	Brión	Miranda	130.000,oo	130.000,oo	---	---
	542	Panaquire	Acevedo	Miranda	227.887,50	45.577,50	182.310,oo	---
	576		Acevedo	Miranda	312.187,50	62.437,50	249.750,oo	---
	2.795	San Simón	Maturín	Monagas	580.000,oo	195.000,oo	385.000,oo	
"CHORO BOCOY"	5.040		Araure	Portuguesa	1.500.000,oo	225.000,oo	1.275.000,oo	---
	5.152		Páez	Portuguesa	1.600.000,oo	240.000,oo	1.360.000,oo	---
	7.000	Santa Cruz Santa María	Ribero	Sucre	2.587.027,oo	602.027,oo	1.985.000,oo	---
ONIFACIO	99	Catuaro	Ribero	Sucre	30.000,oo	30.000,oo	---	---
AMURAI"	360	Yaguaraparo Irapa	Mariño Arismendi	Sucre	1.012.000,oo	400.000,oo	612.000,oo	---
	1.391	Rubio	Junín	Táchira	1.089.478,60	328.918,60	320.000,oo	440.560,oo
FUNDACION	15.000		Jáuregui	Táchira	520.000,oo	105.000,oo	415.000,oo	
BETICO"	5.000	Pampán	Trujillo	Trujillo	1.500.000,oo	900.000,oo	485.000,oo	115.000,oo
	75.461				44.734.219,64	11.703.980,46	31.347.237,13	1.683.002,05

FECHA	VENDEDOR	BIENES	EXTENSION Has.	JURISDICCION MUNICIPIO	DISTRITO	ESTADO	VALOR	PAGO INICIAL EFECTIVO	BONOS	OBLIGACIONES SUBROGADAS.	
VIENEN.....							44.734.219,64	11.703.980,46	31.347.237,13	1.683.002,05	
7-10- 60	MARY PIMENTELDE GONZALEZ	" LA URBINA"	1.497.5,917	CANDELARIA	CARACHE	TRUJILLO	280.000,oo	85.000,oo	195.000,oo		
9-10- 60	DR. HUGO UNDA BRICEÑO	" PUNTA DE MAYA"	1.388	IA CEIBA	BETIJOQUE	"	138.000,oo	138.000,oo			
2-10-60	ELADIO SEVERINO MIRANDA	" AGUA VIVA" Y " EL SALTO"	1.800		YARATIGUA	YARACUY	850.000,oo	170.000,oo	680.000,oo		
24- 5-60	ANTONIO CILIBERTO PEREZ	COCUIMA " EL MIIANERO	74	CAMPO ELIAS	BRUZUAL	"	15.000,oo	15.000,oo			
1- 6-60	DRE. EDSAR Y CRUZ M. YEPEZ GIL	" LA PAIMA"	1.927		BRUZ. URACHICHE	"	800.000,oo	240.000,oo	560.000,oo		
13-10-60	VICTOR M. GABALDON	"MOSQUITO " O COCORITO"	250	SAN JAVIER	SAN FELIPE	"	275.000,oo	100.000,oo	175.000,oo		
3- 6- 60	DR. LUIS HERNANDEZ ROVATI	" SAN RAMON"	1.350	CHIVACOA	BRUZUAL	"	1.500.000,oo	450.000,oo	722.546,oo	327.454,oo	(BAP)
31- 8-60	DR° MANUEL A LOPEZ RIVAS	" SABANA LARGA"	800		"	"	400.000,oo	100.000,oo		300.000,oo	"
27- 5-60	THE SUPERIOR OIL CO. OF VENEZ.	" LAS GUADUAS"	3.693	ROSARIO	PERIJA	ZULIA	406.280,61	122.280,61	284.000,oo		
31-10-60	W. M. RINCON Y LUIS G. PIANAS	" CACHIRI"	1.391	SAN RAFAEL	MARA	"	152.273,oo	72.273,oo	80.000,oo		
3- 11-60	JACINTO ATIAS R.	" CASAÑAS"	75	RIO CHICO	PAEZ	MIRANDA	101.350,oo	101.350,oo			
3- 11-60	AQUILES CASADO ALCALA	" MARARITO"	314	OCUMARE DEL TUY	LANDER	"	164.900,oo	164.900,oo			
3- 11-60	IGNACIO ASMHAD	" EL IGNACIERO"	44	CHIVACOA	BRUZUAL	YARACUY	31.600,oo	31.600,oo			
3- 11-60	JUAN PEREZ GONZALEZ	" LA ZAMURIA"	130	PAEZ	SUCRE	"	108.971,oo	108.971,oo			
3- 11-60	MADRIZ INVERSIONES C. A.	" EL PASO " FEDERACION" PEÑAS-CAL Y MORROCOY"	26.000	UNION	FEDERACION	FALCON	353.760,oo	193.760,oo	160.000,oo		
3- 11-60	GABRIEL AREVALO GARCES	"ZAPATAL"	4.224	"	"	"	42.240,oo	42.240,oo			
3- 11-60	JORGE ROMERO GUTIERREZ	"EL CARMEN"		S. JOSE DE LOS ALTOS.	GUAICAIPURO	MIRANDA					
3- 11-60	JUAN JOSE MUÑOZ	" EL CARMEN Y EL ROSARIO		Sta. LUCIA	PAZ CASTILLO	"					
3- 11-60	ORLANDO OLIVIERI LEONE Y SRA.	" LA ANTONIA"	78	SAN JAVIER	SAN FELIPE	YARACUY	74.264,80	74.264,80			
8- 11-60	ELIAS SAAP	"SABANA ALTA"	1.114	SARARE	PALAVICINO	LARA	572.700,oo	202.700,oo	370.000,oo		
3- 11-60	VICENTE HURTADO	"LAGUNA DE PIEDRA"	345	S. JOSE DE TIZN.	ROSCIO	GUARICO	200.000,oo	100.000,oo	100.000,oo		
3- 11-60	FRAN K. PERNALETE	" EL PAUJI"	2.000	CATEDRAL Y J.M. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	244.600,oo	17.000,oo	CVF
3-11 -60	DANIEL MONTERO	" CANAIMA"	632	JOSE M. BLANCO	CRESPO	LARA	250.000,oo	150.000,oo	100.000,oo		
3- 11-60	SOCIEDAD HACIENDA SAN MIGUEL	" SAN MIGUEL"	600	PIRITU	ESTELLER	PORTUGUESA	79.000,oo	79.000,oo			

3- 11-60	GABRIEL AREVALO GARCES	"ZAPATAL"	4.224
3- 11-60	JORGE ROMERO GUTIERREZ	"EL CARMEN"	
3- 11-60	JUAN JOSE MUÑOZ	" EL CARMEN Y EL ROSARIO	
3- 11-60	ORLANDO OLIVIERI LEONE Y SRA.	" LA ANTONIA"	78
8- 11-60	ELIAS SAAP	"SABANA ALTA"	1.114
3- 11-60	VICENTE HURTADO	"LAGUNA DE PIEDRA"	345
3- 11-60	FRAN K. PERNALETE	" EL PAUJI"	2.000
3-11 -60	DANIEL MONTERO	" CANAIMA"	632
3- 11-60	SOCIEDAD HACIENDA SAN MIGUEL	" SAN MIGUEL"	600
3- 11-60	SUCESION MONASTERIOS	" LA ESPERANZA"	980
3- 11-60	ALEJANDRO ROMANACE	" LA JUSTA"	30.000
3- 11-60	JOSE ROSARIO MANRIQUE	" EL PORTICO"	61,25
3- 11-60	GONZALO AMAÑA TOLOSA	" LA ARGENTINA"	400
	T O T A L E S :		156.628,8.417

ygi*.-

"	"	"	[illegible]	[illegible]			
S. JOSE DE LOS ALTOS.	GUAICAIPURO	MIRANDA					
Sta. LUCIA	PAZ CASTILLO	"					
SAN JAVIER	SAN FELIPE	YARACUY	74.264,80	74.264,80			
SARARE	PALAVICINO	LARA	572.700,oo	202.700,oo	370.000,oo		
S. JOSE DE TIZN.	ROSCIO	GUARICO	200.000,oo	100.000,oo	100.000,oo		
CATEDRAL Y J.M. IRIBARREN Y CRES.		LARA	444.600,oo	183.000,oo	244.600,oo	17.000,oo	CVF
JOSE M. BLANCO	CRESPO	LARA	250.000,oo	150.000,oo	100.000,oo		
PIRITU	ESTELLER	PORTUGUESA	79.000,oo	79.000,oo			
ANTOLIN DEL CAM.	ARISMENDI	NVA. ESPARTA	500.000,oo	250.000,oo	250.000,oo		
CANOABO	MONTALBAN	CARABOBO	600.000,oo	120.000,oo	480.000,oo		
RUBIO	JUNIN	TACHIRA	458.000,oo	238.000,oo	100.000,oo	120.000,oo	BAP
RUBIO	JUNIN	TACHIRA	215.000,oo	95.000,oo		120.000,oo	"
			53.747.159,05	15.331.319,87	35.848.383,13	2. 567.456,05	

FECHA	VENDEDOR	BIENES	EXTENSION	JURISDICCION			VALOR	PAGO INICIAL EFECTIVO.	BONOS	OBLIGACIONES SUBROGADAS
			Has.	Municipio	Distrito	Estado	Bs	Bs.		
VIENEN.....							53.747.159,05	15.331.319,87	35.848.383,13	2.567.456,05
3- 11-60	JUAN JOSE RODRIGUEZ V.....	" LA FORTUNA"	800	Urribarré	Colón	Zulia	172.000,oo	172.000,oo		
8- 11-60	JOSE A. RINCON.....	" LA SIERRA"	820	-	Baralt	"	130.000,oo	130.000,oo		
3- 11-60	SUCESION GARCIA.....	" LA CARIDAD"	1.000	Cabure	Petit	Falcón	99.910,oo	99.910,oo		
3- 11-60	JOSE C. PABON.....	" CARAMBU"	412	La Ceiba	Betijoque	Trujillo	162.000,oo	32.400,oo	129.600,oo	
23- 6-60	ROSELIANO Y MARTIN PAIACIOS.	" EL PAIACIERO"	844	Los Rastrojos	Palavicino	Lara	150.000,oo	100.000,oo	50.000,oo	
	HNOS. VIRSILIO Y JUAN.....	" AGUA CIARA	2.000	Libertad	Betijoque	Trujillo	400.000,oo	200.000,oo	200.000,oo	
	VICTORIANO LEON.....	" SARA LINDA"	400	"	"	"	400.000,oo	200.000,oo	200.000,oo	
	AMENODORO MOLINAS VEGAS.....	" CARDENAS"	700	Reyes Cuesta	Paz Castillo	Miranda	700.000,oo	200.000,oo	500.000,oo	
3- 11-60	SUCESION VARGAS.....	" LA CONCEPCION"	5.000	Carmen de Cura	Irdaneta	Carabobo	2.500.000,oo	785.000,oo	1.715.000,oo	
6- 10-60	SUCESION MALARET.....	" NORUCUAL"	2.000	Sta. Fé	Sucre	Sucre	90.000,oo	90.000,oo		
24-10-60	ANA GOMEZ DE DELFINO.....	" LAS VUELTAS"	1.756	'	Guacara	Carabobo	1.500.000,oo	700.000,oo	800.000,oo	
7- 10-60	EMILIO BOSCHITTI.....	" EL COCO"	400	Guaraunos	Benitez	Sucre	725.000,oo	350.000,oo	375.000,oo	
7- 10-60	EMILIO BOSCHETTI.....	" EL PUENTE Y CAÑO DE CRUZ	100	Mariño	Ribero	Sucre	90.000,oo	90.000,oo		
	CARMELO SERVA.....	" SANTA TERESA"	3.800			Yaracuy	1.000.000,oo	300.000,oo	700.000,oo	
	T O T A L E S:		176.660,8.417				61.866.069,05	18.780.629,87	40.517.983,13	2.567.456,05

ygi*.

Agraria 3

MEMORANDUM

PARA: DR. RAUL LEONI

DE: SR. CARLOS BEHRENS

ASUNTO: Sobre el Estado Apure

Fincas cuyos expedientes van a ser enviados al Congreso Nacional y que están incluidas en el crédito adicional que va a ser pedido:

Finca "La Guanota",10.000 hectáreas, Propietario: León Mosser Guerra, precio Bs 100.000,oo;

Finca "Las Angosturas", 12.500 hectáreas, Propietario: Sucesión González, precio Bs 301.110,oo;

Todas las fincas que constituyen la Compañía Inglesa como Gato - Gordo, Santa Rita, Caño Negro, La Madera, Las Guasimitas, Santa Rosalía, Guasimote, Oripopo, las cuales están sometidas a juicio - de expropiación . Asimismo las pertenecientes a la Compañía Anónima INVEGA y las cuales son: "La Becerra", "El Guayabo", "El Tolumito", "La Tigra", "La Esperanza" y "El Garzón".

Fincas que están en proceso para ser adquiridas por el Instituto, las siguientes: "El Jopal", 20.000 hectáreas, Propietario, Jesús Gabaldón;

"El Algarrobo", 5.000 hectáreas, Propietario: Hermanos Tirado; -

"Santa María", Monte Oscuro y La Fortuna", 8.000, 10.000 y 12.000 hectáreas respectivamente, Propietario: José Herrera U.;

"Mata Caña", 20.000 hectáreas, Propietario: Sucesión Fuentes ;

"La Morita", 5.000 hectáreas, Propietario: Hermanos Barbarito;

"Mata de Garza", 5.500 hectáreas, Propietario: Federico D' Estes;

"Mata de Guamo", 7.500 hectáreas, Propietario: Manuel J. Puente;

Mata de Cabo", 3.000 hectáreas, Propietario: Sucesión Sánchez;

"Merecure", 14.414 hectáreas, Propietario Eloy Lugo;

"Caugaral" y "Palo Quemado" de 1.200 y 2.500 hectáreas respectivamente, Propietario Antonio Cestari;

"Los Araguaneyes", 5.000, hectáreas, Propietario Pedro M. Tapia;

"La Rinconera", 1.800 hectáreas, son baldías;

y "Cardonal", 10.000 hectáreas, Propietario Sucesión Orozco Bernal.

El Instituto dentro de un plan mínimo de inversiones, para pequeñas obras fundamentales y de carácter urgente, tiene programado la cantidad de ~~un millón quinientos~~ CIENTO CINCUENTA mil bolívares (Bs ~~1.500.000,00~~ 150.000,00) asignada para la Delegación del Estado Apure.

La Delegación Agraria tiene, además, un presupuesto anual de Bs 1.128.449,oo.

El total de las fincas pedidas por los campesinos apureños, son: 34 con 218.675 hectáreas y un costo estimado de Bs 3.154.524,oo.

Caracas: 5 de marzo de 1963.-

CARLOS BEHRENS
Director

CB:ypl.-

NEGATIVIDAD DEL PARTIDO COPEY EN LA EJECUCION DE LA REFORMA AGRARIA.

A continuación me permito señalar algunos hechos que creo han incidido en una u otra forma en la ejecución de la reforma agraria. Trataré de ser concreto y referirme a asuntos que supongo interesan al Partido.

El informe se divide en dos: uno Administrativo tocante a la labor realizada por los organismos directamente responsabilizados en la realización de la reforma agraria, y otro que podríamos llamar Político (para darle alguna denominación) en el cual trataremos acerca de la forma en que se han conducido los funcionarios y empleados de esos organismos citados en defensa y propaganda de los Partidos donde militan.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Funciones del IAN, MAC y BAP.: La Ley basamenta la reforma agraria en los siguientes postulados: distribución equitativa de la tierra, asistencia integral para los campesinos, una adecuada organización del crédito y el mercadeo de los productos (*1). Esas tareas por la misma Ley están encomendadas respectivamente al IAN, al MAC y al BAP las dos últimas. Para abundar sobre su significado vamos a recurrir a la exposición de motivos al proyecto de Ley de Reforma Agraria y a algunas conferencias dictadas posteriormente por el Dr. Giménez Landínez: " una concepción verdaderamente integral de la Reforma Agraria tiene que basarse en estas 4 columnas estructurales: tenencia, extensión agrícola, crédito y mercadeo"..... "Es necesario destacar también que, al lado de estos aspectos, existe en todo el fondo de la cuestión agraria un gran problema de educación y principalmente de lo que hoy se llama extensión agrícola. No tanto porque se pretenda dentro de la Reforma Agraria cubrir todo el aspecto educacional de nuestra población rural, sino porque hay aspectos muy concretos que se refieren a la formación específica del campesino que, si no se entiende como parte de la Reforma Agraria, hacen de ésta algo incompleto o inconciente. En efecto, no se trata de que el campesino reciba o no aquella instrucción e ilustración de tipo general que puede brindarle el sistema educativo que rige en el país. Lo grave no es que nuestro campesino ignore las Guerras Púnicas o las campañas de

.../...

Alejandro Magno, o los secretos de la química o la física moderna. Lo grave es, y lo que atañe y compete a la Reforma Agraria, que el campesino ignore y desconozca lo que a su profesión y manera de vivir le interesa para ser un mejor productor, para lograr mayores ganancias, para vivir mejor en su medio rural. Y esto es lo que puede y debe darle un buen servicio de extensión agrícola que transforme y eleve su mentalidad y sus hábitos de empresario. La Reforma Agraria debe, por tanto, enseñarle al hombre de nuestros campos las normas fundamentales de la génética, los métodos modernos de cultivos, la utilización de los fertilizantes y los yerbicidas, el aprovechamiento adecuado de la maquinaria y de los implementos agrícolas y, en fin, todo aquello que suponga una verdadera transformación no sólo de los métodos que utilice sino de su propia mentalidad en relación a las formas y sistemas de producción que desarrolle" (*2)..."... "Estos Institutos (se refiere al IAN y al BAP) responden específicamente, por tanto, de los problemas de la tenencia y del crédito. La asistencia técnica especialmente en lo relativo a investigación, extensión y planificación agrícolas, están reservadas expresamente al Ministerio de Agricultura y Cría, aunque por especial decisión de este mismo Despacho la planificación tanto de la Reforma Agraria como del desarrollo agrícola se viene realizando en forma conjunta, como es lo natural y conveniente al mejor desarrollo de las actividades, reservándose el Despacho las funciones de coordinación. También funciona directamente en el Despacho de Agricultura la Oficina Nacional de Catastro que, de acuerdo con la Ley, irá realizando progresivamente el catastro general de tierras y aguas de la Nación, así como toda la política general de Conservación de Recursos Naturales Renovables, de Ingeniería Agrícola (caminos vecinales, carreteras de penetración agrícola, obras pequeñas de regadío y abastecimiento de aguas, etc.), Política de Inmigración, etc., etc." (*3).

El significado práctico que se deriva de esas atribuciones es el siguiente: al IAN le corresponde: Recibir las solicitudes de tierras, levantar informes sobre ellas y avaluarlas, negociarlas para su adquisición, comprarlas o expropiarlas, entregarlas al comité campesino solicitante con un título colectivo provisional, promover la creación del Centro Agrario y la designación entre los campesinos del Comité Administrativo que se encargará de representar al grupo ante el IAN, MAC y BAP., hacer las deforestaciones y labores elementales, hacer el levantamiento perimetral, construír vías internas dentro de los asentamientos, parcelar en lotes de acuerdo con las conveniencias técnicas, asesorar al Comité Administrativo preferentemente con un técni-

.../...

co agropecuario, otorgar el título de propiedad definitivo a cada uno de los sujetos merecedores, etc.

Al B.A.P. atender las solicitudes de créditos, estudiarlas, otorgarlos y supervisarlos, organizar el mercadeo.

Al M.A.C. catastrar las tierras y aguas, principalmente las afectables a la Reforma Agraria (84). Determinar e investigar las tierras baldías, ejidos, particulares, etc. Llevar el registro de propiedades rurales en general, tramitar el traspaso al IAN de las tierras públicas solicitadas, obras pequeñas de regadío para asentamientos, abastecerlos de agua para consumo humano, construír caminos de penetración de los pueblos a los asentamientos, construír lagunas para los semovientes, otorgar permisos de deforestación, legalizar y asesorar las cooperativas, coordinar el asentamiento de inmigrantes, estudiar los suelos para recomendar su mejor uso, combatir plagas y enfermedades, enseñar al campesino el mejor uso de abonos, maquinas y semillas, sacarlo de los cultivos tradicionales, enseñándole otros que mejoren sus ingresos, hacerlo producir más y mejor. "Yo he dicho en muchas partes por ahí que no se crea que la Reforma Agraria es extensión agrícola, enseñansa agrícola, pero sí creo que sin enseñansa, sin extensión agrícola no puede haber Reforma Agraria"... "En ese sentido el Ministerio de Agricultura tiene obligación de desarrollar de una manera muy especial los servicios de investigación y de extensión en estos momentos en que se está haciendo Reforma Agraria".... "Ustedes se imaginarán lo grave, terrible que sería que alargáramos inmensamente el renglón de las dotaciones y de los asentamientos campesinos, también el renglón de los créditos, o sea, que damos mucho crédito y damos mucha tierra, pero dejamos al campesino sin asistencia técnica. Entonces estas dos columnas del asentamiento y el crédito van a ser tan altas como delgadas y como débiles, porque no van a tener el soporte básico que las va a defender cuando algún mal viento las sopie. Eso es indispensable entenderlo y una de las transformaciones básicas que supone desde el punto de vista administrativo de la Reforma Agraria en los actuales momentos es precisamente el impulso y el desarrollo que hay que darle y se le va a dar a la investigación y a la extensión agrícola".

En resúmen el IAN debe dar las tierras, el BAP el crédito y el MAC la enseñansa agrícola.

.../...

LABOR CUMPLIDA POR EL IAN, MAC y BAP EN EL PERIODO 1959 - 1963:

El Instituto Agrario Nacional ha recibido un poco más de 143.000 solicitudes de tierras, abarcando una afectación aproximada de ------- 3.338.735 Has. De esas solicitudes han sido satisfechas 57.093, que - es el número total de familias asentadas (25.823 en tierras públicas y 31.270 en tierras privadas), en una superficie de 1.538.735,29 Has. - (670.601,54 de tierras públicas y 868.133,75 de tierras de origen privado). Para lo anterior se ha recibido una asignación presupuestaria durante el período de 752.391.644,84 bolívares, de los cuales se han invertido 598.662.604,75 en compras de tierras y bienhechurías (------ 261.391.897,60 en efectivo y 125.935.000,oo en bonos) y en obras de consolidación (*5) (211.335.707,15) lo que da un promedio aproximado de costo por familia asentada en los gastos de adquisición de fincas y - obras de consolidación de Bs. 10.500,oo.

Con la inversión citada se han adquirido 451 fincas de propiedad - privada, se han expropiado 10 (*6), han sido intervenidas a través de - los órganos legales 23, están demandadas en juicios de expropiación 70 (*7), se han entregado 6.166 títulos definitivos de propiedad (*8) y se - han constituído 649 Centros Agrarios (322 en tierras públicas y 327 en tierras privadas) con una capacidad agraria de 57.093 familias.

En la cantidad de 211.335.707,15 bolívares gastados en obras de consolidación se destacan los rubros de deforestación, destroncamiento y acondicionamiento de tierras (Bs. 69.450.765,35)(*9), levantamientos topográficos (Bs. 13.281.085,oo) (*10) y otros gastos que no siendo de la competencia del IAN fueron realizados tales como la construcción de 4.901 viviendas rurales (Bs. 35.598.561,67) (*11), la construcción de 936,367 Kms. de carreteras y 621,975 de caminos de penetración, con un costo de Bs. 29.508.293,13, la construcción de 19 edificaciones escolares y médico-asistenciales y otras edificaciones (Bs. 15.680.371,12). Acueductos y obras complementarias (Bs. 8.892.408,47). Obras de riego y drenajes, de urbanismo y otras inversiones similares (Bs. ------- 13.008.133,29) (*12).

Aparte de lo antedicho el IAN ha puesto en práctica dos planes importantes: uno denominado del Maíz y el cual es la principal obra de - consolidación realizada por haberse deforestado, y ampliado por tanto

.../...

la frontera agrícola, unas 40.000 Has. y preparado mecanizadamente 110.000 Has. más, y otro el plan de Regularización de la Tenencia a los ocupantes de ejidos y baldíos, el cual consiste en demarcarle a los campesinos que tienen una posesión precaria de tierras, un lote económicamente aprovechable, otorgarle el título definitivo de propiedad y prestarle la asistencia técnica, crediticia y de extensión que les corresponde como sujetos de Reforma Agraria. El plan fué concebido para regularizar, en un período de un año (abril 1963 a marzo de 1964), la situación de 32.000 familias a un costo de Bs. 16.000,oo (500 por familia). Hasta ahora (*13) se han levantado 167.700 hectáreas ------ (30.000 Yaracuy y Falcón, 40.900 Monagas, 15.000 Delta Amacuro, 14.500 Guárico y 67.300 Cuenca del Sur del Lago, Trujillo, Zulia y Mérida), y estudiado unas 78.560 hectáreas con lo que se espera otorgar las tierras en propiedad a principios del corriente año a unas --- 18.492 familias más, con lo cual la cifra de asentados por este plan pasará de las 19.492 familias.

El Instituto cuenta en la actualidad con un total de 215 técnicos agropecuarios, de los cuales 44 son Ingenieros Agrónomos o Técnicos Agrícolas, 140 Peritos, 16 Veterinarios y 15 Peritos Forestales.

Labor del Ministerio de Agricultura y Cría: Catastro: La Ley de Reforma Agraria coloca la Oficina Nacional de Catastro en el MAC y recomienda que éste debe comenzar por donde existan más agudamente conflictos agrarios (*13) y es taxativa cuando recomienda que tendrán preferencia "las etapas catastrales que se consideren apremiantes para a coadyuvar la ejecución de planes agrarios" (*14). La misma Ley declara establecido el Registro de la Propiedad Rural (*15). En las memorias y cuentas del período dice el MAC "tener el control de levantamientos de 164.300 Has." (* 16), haber "realizado estudios para determinar las mejores zonas agrícolas del País en una superficie de 760.114 Has.", haber "identificado predios mediante fotografías aéreas en un total de 2.577.930 Has., teniendo croquis y cartas catastrales primarias de 2.684 predios" (*17). El Catastro Nacional funciona con Oficinas Subalternas en 11 Estados, en algunos de los cuales funcionan Departamentos de Ingeniería y Departamentos Legales y en otros sólo el Departamento Legal. "Las actividades de la Oficina Nacional de Catastro se circunscriben a las siguientes: 1°) Política de tierras, 2°) Registro de la propiedad rural, 3°) Trabajos topográficos y aereofotogramétricos y 4°) Estudios jurídicos". (* 18) "Funcionan

.../...

en el interior de la República 10 Oficinas de Registro de la Propiedad Rural en las cuales se ha registrado e inscrito las documentaciones correspondientes a 1.395 propiedades".

Nada de lo dicho anteriormente ha sido puesto en servicio de la Reforma Agraria. Cuando se ha necesitado la cooperación de Catastro para levantar algunos baldíos o ejidos para asentar en ellos a los campesinos ocupantes, ha habido necesidad de hacer erogaciones especiales tales como los Bs. 300.000,oo erogados el pasado año para que la Oficina de Catastro del Estado Sucre pudiera realizar algunos levantamientos en terrenos públicos que eran indispensables para solucionar una fuerte presión campesina existente en el sector oriental de esa Entidad, aún no se han recibido los trabajos formalmente. O en casos como en el inicio del Plan de Regularización del Estado Monagas, cuando quien suscribe, para entonces Jefe del Departamento de Reubicación y Dotación, diligenció hasta conseguir por la perseverancia la ayuda del Catastro Nacional para que hiciese algunos levantamientos en tierras baldías y ejidos del Distrito Maturín. Esto sólo se logró en base a que el IAN pagara viáticos de transporte y mantenimiento a los empleados del MAC, pero lejos de habernos sido útiles, nos causaron una serie de problemas por querer sólos reconocer como de propiedad privada terrenos que a juicio de los funcionarios del IAN eran públicos. De tal forma que esta primera prueba de colaboración no resultó positiva. Actualmente la Oficina de Catastro sólo es utilizada por el Instituto como intermediario para solicitar ante el Consejo de Ministros el traspaso al patrimonio del IAN de las tierras baldías que son levantadas p topográficamente por una Oficina que funciona en este Instituto y a quien se le han encargado las labores catastrales que debía realizar el MAC.

Extensión Agrícola: Es lamentable que ninguno de los 649 Asentamientos del Instituto Agrario Nacional se beneficie con los servicios de educación agropecuaria que debía de prestarle alguna de las 164 Agencias Agrícolas que posee la Dirección de Extensión en el País, (* 20) con 676 Técnicos de Campo (Obsérvese que en todo el Instituto Agrario Nacional sólamente existen 215 Técnicos Agropecuarios). La única colaboración que podríamos mencionar por parte de la Agencia de Extensión Agrícola fué la que prestaron unos 104 Agentes de Extensión para colaborar en el Plan del Maíz "adiestrando a campesinos guías, quienes a su vez y bajo la supervisión de los Agentes impartirían adiestramiento a los restantes campesinos a razón de 1 por cada 30 cabezas de fami

.../...

lia, esto fué sólo durante 3 meses (* 21). Las Agencias de Extensión se han dedicado fundamentalmente a prestar servicios a los empresarios agrícolas, a los llamados Clubes 5V, a proyectar películas y programas radiales en centros poblados y a fomentar asociaciones de jóvenes rurales. En cuanto a la Sanidad e Industria Animal, no tenemos ningún conocimiento de que se haya prestado colaboración directa a los campesinos asentados por el IAN en lo que se refiere a combatir plagas y enfermedades o a la prestación de servicios de Veterinarios o al control de las enfermedades parasitarias ni mucho menos la enseñanza de mecanización o del mejor uso de semillas o de recomendaciones para la mejor producción y productividad. Es decir el IAN no se ha beneficiado en casi nada de los Bs. 68.512.787,oo a que han alcanzado las inversiones presupuestarias del Programa de Extensión durante los años 60 al 63.

Ingeniería Agrícola: De los 5.743 Kms. de vías vecinales que dice el MAC haber construído, salvo contadas excepciones, ninguna ha sido para unir asentamientos campesinos con poblaciones,, sólamente recordamos las excepciones de Trujillo y Zulia con ocasión del Plan del Maíz, según el cual el MAC reparó algunas vías de penetración (* 22). De los 3.083 pozos y 1.342 lagunas (* 23) muy pocos de los primeros han sido para asentamiento de los campesinos y ninguna de las segundas. Cada vez que el IAN solicita la colaboración para construír vías, pozos o lagunas, del MAC, ésta regularmente sólo presta los equipos, debiendo el IAN pagar personal, combustible, reparación de la maquinaria, etc. En las memorias del IAN y del MAC no se menciona la construcción por propia cuenta y riesgo del primero de alguna de estas obras.

Recursos Naturales Renovables: Esta Dirección tan importante del MAC no ha colaborado tampoco con el IAN, incluso le ha causado serios problemas por declarar como de reserva forestal, sin previo estudio de sus consecuencias, zonas tales como Guatopo, Burro Negro y el Avila, que han costado al IAN en indemnizaciones y reubicación gruesas cantidades de dinero y que aún no ha podido finiquitar; tal es el caso de Guatopo en donde el costo de lo dicho se estima en más de Bs. 60.000.000,oo. Esto causa no sólo descontento por parte de los afectados sino también paralización de los programas y descalabro administrativo. Se nos han presentado conflictos que revisten cierta gravedad por el hecho de que esta Dirección del MAC otorga permisos de deforestación en tierras públicas a terratenientes, los cuales además de desalojar a los campesinos ocupantes, amparados en esas autoriza

.../...

lia, esto fué sólo durante 3 meses (* 21). Las Agencias de Extensión se han dedicado fundamentalmente a prestar servicios a los empresarios agrícolas, a los llamados Clubes 5V, a proyectar películas y programas radiales en centros poblados y a fomentar asociaciones de jóvenes rurales. En cuanto a la Sanidad e Industria Animal, no tenemos ningún conocimiento de que se haya prestado colaboración directa a los campesinos asentados por el IAN en lo que se refiere a combatir plagas y enfermedades o a la prestación de servicios de Veterinarios o al control de las enfermedades parasitarias ni mucho menos la enseñanza de mecanización o del mejor uso de semillas o de recomendaciones para la mejor producción y productividad. Es decir el IAN no se ha beneficiado en casi nada de los Bs. 68.512.787,oo a que han alcanzado las inversiones presupuestarias del Programa de Extensión durante los años 60 al 63.

Ingeniería Agrícola: De los 5.743 Kms. de vías vecinales que dice el MAC haber construído, salvo contadas excepciones, ninguna ha sido para unir asentamientos campesinos con poblaciones, sólamente recordamos las excepciones de Trujillo y Zulia con ocasión del Plan Maíz, según el cual el MAC reparó algunas vías de penetración (* 22). De los 3.083 pozos y 1.342 lagunas (* 23) muy pocos de los primeros han sido para asentamiento de los campesinos y ninguna de las segundas. Cada vez que el IAN solicita la colaboración para construír vías, pozos o lagunas, del MAC, ésta regularmente sólo presta los equipos, debiendo el IAN pagar personal, combustible, reparación de la maquinaria, etc. En las memorias del IAN y del MAC no se menciona la construcción por propia cuenta y riesgo del primero de alguna de estas obras.

Recursos Naturales Renovables: Esta Dirección tan importante del MAC no ha colaborado tampoco con el IAN, incluso le ha causado serios problemas por declarar como de reserva forestal, sin previo estudio de sus consecuencias, zonas tales como Guatopo, Burro Negro y el Avila, que han costado al IAN en indemnizaciones y reubicación gruesas cantidades de dinero y que aún no ha podido finiquitar tal es el caso de Guatopo en donde el costo de lo dicho se estima en más de Bs. 60.000.000,oo. Esto causa no sólo descontento por parte de los afectados sino también paralización de los programas y descalabro administrativo. Se nos han presentado conflictos que revisten cierta gravedad por el hecho de que esta Dirección del MAC otorga permisos de deforestación en tierras públicas a terratenientes, los cuales además de desalojar a los campesinos ocupantes, amparados en esas autoriza

.../...

ciones, impiden al IAN la realización de sus planes de regularizar la situación a aquellos sujetos de reforma agraria que señala la Ley como primeros beneficiarios en varios de sus artículos (* 24) (* 25).

Demostradoras del Hogar Campesino: Esta noble tarea que deben cumplir, especialmente en función de Reforma Agraria, las Demostradoras, se ha visto torpedeada porque su actuación es más que todo de proselitismo político.

Hay 462

El MAG cuenta en sus Zonas y en la Oficina Central con [illegible] Técnicos Agropecuarios y sin embargo su función primordial en la Reforma Agraria, cual es la enseñanza de los campesinos, no se ha notado en los beneficiarios de los diversos Centros creados por el IAN (Nótese la gran diferencia de este equipo de personal existente entre el MAG y el IAN).

Labor del Banco Agrícola y Pecuario: En general el Banco Agrícola y Pecuario ha cumplido con el otorgamiento de créditos a los campesinos asentados por el IAN. No obstante, es bueno recordar la necesidad de incrementar la utilización del crédito supervisado ya que muchas veces y debido a contingencias extrañas al propio individuo, estos no pueden cancelar oportunamente sus acreencias y se presenta para el IAN un escabroso problema: Que después de haber preparado tierras a campesinos asentados el BAP les niegue el crédito para las siembras por haber quedado mal la vez anterior que se le otorgó, ante este hecho nos preguntamos que podría hacer el IAN, no puede desalojar al campesino ni tampoco otorgarle el crédito para que siembre, por eso sugerimos la conveniencia de estimar con un crédito especial el que se le haga a estos sectores. El BAP ha otorgado al "sector campesino" desde 1950 a julio de 1963 279.798 créditos por un monto de ₡. 376.438.031,00. En cuanto al mercadeo ha tenido sus fallas pero en general los campesinos de los diversos Centros Agrarios se encuentran satisfechos por esa labor (* 26) (* 27).

NEGATIVIDAD O POSITIVIDAD DE LA REFORMA AGRARIA:

Para mayor información sobre la labor realizada por los 3 organismos directamente responsables de la Reforma Agraria sería conveniente repasar siquiera ligeramente las diversas Memorias y Cuentas presentadas por el MAG. Allí observaremos que el Ministerio presenta a la opinión pública y a los organismos legislativos no su propia labor sino la del IAN y la del BAP. Da la impresión de que en el Ministerio de Agricul

.../...

tura y Cría los presupuestos no se utilizaran.

A través de lo que hemos dicho se desprenden 2 cosas: que el Instituto Agrario Nacional ha entregado suficientes tierras a campesinos como para disminuir notablemente la presión o las solicitudes que existían al comienzo del período. Es decir que el IAN ha cumplido más que regularmente con la función que le corresponde de acuerdo con la Ley, o sea solucionar el problema de la tenencia. Igualmente el BAP. Pero en el caso del MAC éste no ha colaborado con los individuos que podemos calificar como sujetos de reforma agraria, es decir con los campesinos asentados por el IAN fundamentalmente.

A título de conclusión podemos afirmar que si al Instituto Agrario se le ha criticado por parte principalmente de los más calificados dirigentes del Copey, el hecho de no haber entregado todos los títulos definitivos de propiedad, ninguno se ha pasado por la circunstancia de que los campesinos asentados por el IAN no tienen la base de arraigo que les debe dar el Servicio de Extensión Agrícola del MAC. Mientras al campesino de los Centros Agrarios no se le enseñe a producir otros cultivos que el tradicional y anti-económico maíz o yuca o, mientras no se le preste colaboración para que alcance en esos cultivos una mayor productividad, la Reforma Agraria no podrá ser positiva, y esta labor ya lo sabemos por boca del propio ex-Ministro Giménez Landínez, corresponde al MAC y es imprescindible para el arraigo y mejoramiento económico y social del campesino. De tal forma que si existe alguna falla, que existe, se debe única y exclusivamente al Ministerio de Agricultura y Cría, ya que es éste el único que no ha cumplido con el deber que le señala la Ley. El IAN ha dado tierras, el BAP ha dado créditos, pero el MAC no ha dado la extensión agrícola ni ha construído los caminos de penetración.

Por otra parte, los campesinos asentados si cuentan con un título de propiedad, sino individual, por lo menos colectivo, que les da la seguridad de que no podrán ser desalojados de las tierras entregadas.

Si alguna falla existe en el IAN y que es necesario corregir es la falta del Reglamento de Ley y la modificación de algunos artículos que aligeren los diversos trámites. Sobre esto último ya sabemos que la fracción de Diputados de A. D. llevó un proyecto al Congreso. Es necesario también acelerar la promulgación de las Leyes y Reglamentos de

.../...

que habla la Ley: Art. 11 (Trabajo Asalariado Agrícola); Art. 20 (Impuesto predial); Art. 41 (Aguas); Art. 55 (Catastro); Art. 59 (Comités Administrativos de Centros Agrarios); Arts. 111 y 195 (Crédito - Supervisado y Ley de Crédito Agrícola); Art. 129 (Mercadeo); Art. - 133 (Vivienda Rural); Arts. 140 y 150 (Contratos Agrícolas); Art. 156 (Delegaciones IAN); Arts. 180 y 197 (Obras de Riego) y Art. 204 (Clasificación tierras).

LGC/hmh. -

INFORME POLITICO:

Haciendo abstracción de los empleados irresponsables y de los que ocupan cargos menores, el comportamiento de los hombres de Acción Democrática y de Copey en los organismos agrarios se puede tipificar por existir una notable diferencia: mientras los acción democratistas se guiaron por la consigna de que hacer buena labor de Gobierno es la mejor propaganda para el Partido, actuando silenciosa y tesoneramente para llevar a cabo los programas trazados, los copeyanos se caracterizaron por el lema de aprovechar políticamente la obra positiva del Gobierno (y también la negativa) actuando para ello con un bien estructurado aparato de propaganda y una estrecha coordinación entre sus hombres.

Esa diferencia señalada, unida a una especie de chantaje político y a una fuerte articulación en los activistas copeyanos fué sin lugar a dudas la causa por la que pudieron hábilmente efectuar la labor de proselitismo que restó a Acción Democrática un considerable número de votos en el campo.

Veamos como han actuado en el I. A. N.:

El Instituto Agrario tiene como máximo organismo de Dirección y Administración a un cuerpo colegiado llamado Directorio, lo forman un Presidente y 4 Directores, 2 adecos representantes de la Federación Campesina, 1 independiente y 1 copeyano. Este cuerpo estructura el presupuesto, la acción a realizar y en general todas las decisiones de trascendencia. Cumplida esa tarea, es el Presidente del Directorio quien tiene la facultad exclusiva de ejecutar las resoluciones, nombrar y remover al personal, etc., junto con el Presidente y con las facultades ejecutivas que el mismo trabajo señala, están el Secretario General, el Consultor Jurídico, 3 Jefes de División (2 técnicas y 1 administrativa), Jefes de Oficina, de Departamento, etc.

Como se observa, los Directores una vez cumplidas sus funciones colegiadas, no tienen facultades ejecutivas, salvo como la misma Ley lo prevee (*1), que el Directorio le encomiende tareas específicas.

Es el caso, que desde un principio y en virtud a que el promedio de reuniones del Directorio es de 3 días por mes, el Director independiente (Pro-adeco) que es Ingeniero Agrónomo, solicitó y se interesó -

.../...

por las programaciones del Instituto, hasta el punto de ser nombrado Encargado de esa Oficina. Los Directores adecos siempre han estado trabajando -comisionados por el Directorio- en la resolución de asuntos laborales o en la reestructuración de los programas de mecanización del IAN o en cualquier tarea como es su deber fundamental, atendiendo las diferentes solicitudes, quejas y reclamos del sector campesino, pero el Director copeyano, lejos de pedir algún trabajo especial para colaborar con el IAN, ha dedicado sus deberes (* 2) para con el Instituto, argumentando exceso de trabajo y sólo se ha dedicado, junto con sus compañeros que tienen cargos "claves" dentro del IAN, a una eterna campaña política estratégicamente concebida más o menos así:

a) Aprovechamiento de las resoluciones que signifiquen mejoramiento o reivindicaciones para determinado Asentamiento o grupos de campesinos. (* 3).

b) Aprovechamiento del descontento o frustración que hubiera en determinado Asentamiento o grupo campesino.

c) Complacencia y apoyo a todos los reclamos que se presenten vengan de donde vinieran.

d) Presión constante y hasta de chantaje para obtener más cargos y remover el personal copeyano colocando activistas que le rindan una labor positiva.

Vamos a dar algunos ejemplos: a) Aprovechamiento de las resoluciones que signifiquen mejoramiento o reivindicaciones para determinado Asentamiento o grupos de campesinos.

En realidad esto no merece crítica sino autocrítica:

1) Cuando en el Directorio se aprueba la adquisición de una finca o cuando se presume por el informe técnico y las posibilidades presupuestarias que va a ser adquirida, inmediatamente y cuando los es posible el aparato copeyano se moviliza y dirigentes agrarios de su tolda acaparan para ellos la solicitud y aparecen luego ante los campesinos como los únicos "después de tanto tiempo" que lograron la justa dotación. Posteriormente obtendrán sin dificultad un crédito con el F. A. P.

.../...

2) El Jefe de la División de Dotación (que tiene que ver entre otras cosas con el otorgamiento de títulos) o el Director copeyano, se enteran forzosamente de que van a ser entregados un determinado número de títulos de propiedad a campesinos. Ya antes hay una fuerte campaña nacional denunciando al IAN de inepto. Aparecen entonces los copeyanos dirigentes agrarios o empleados del IAN, incluso el propio Director (* 4) a comunicar que "por fin" lograron a duras luchas obtener los títulos. Después vendrá el perdón de los créditos atrasados por el BAP o el zinc del MAC.

3) Se sabe en el IAN que tal día se van a entregar tierras o títulos. Aparecen en la prensa capitalina grandes titulares "El Ministro de Agricultura entregará tal día tierras o títulos, etc." y en la leyenda "igualmente acompañan al Ministro, el Presidente del IAN, etc." (* 5).

4) Se va a realizar un programa de gran envergadura, por ejemplo Las Majaguas, el Jefe del Sector Agrícola de Cordiplán, trata en lo posible de que las funciones de tipo proselitista estén en manos del MAC o de su gente y los dirigentes copeyanos ya han comenzado a "invadir" esas zonas o a llenar solicitudes con su gente.

Si lo dicho en el punto anterior es jocoso y hasta cierto punto valedero en política, lo que vamos a tratar en este próximo punto lo consideramos desleal, y demuestra el doble juego que ha caracterizado a Copey en el Gobierno: son sus leales partidarios y abanderados cuando la obra es plausible (el caso de la Reforma Agraria: los Ministros copeyanos son los Ministros de la Reforma Agraria, pero el IAN ha fallado porque no ha entregado títulos), pero sus más aguerridos detractores cuando no se ha logrado de una sola vez complacer a todos los sectores: no importando que ellos sepan de las imposibilidades materiales o especiales. Es decir: por una parte ganan prosélitos por buena labor y por la otra lo ganan acaparando [illegible] el descontento o sentimentalmente el resentimiento.

Veamos algunos ejemplos: b) Aprovechamiento del descontento o frustración que hubiera en determinado Asentamiento o grupo campesino.

.../...

1) El IAN para crear los Centros Agrarios debe promover el nombramiento, entre los campesinos a los cuales se les ha entregado provisionalmente un título colectivo de tierras, del Comité - Administrativo (* 6), estos por una razón de conocida preponderancia casi siempre son adecos o dominan y también por razones que no ameritan explicaciones las tierras acaban de ser entregadas y los beneficiarios no tienen sino eso: tierras, pero - los campesinos comienzan a solicitar maquinarias para deforestar, alambre, zinc, máquinas agrícolas, créditos, etc. Es común que no a todos los Asentamientos ni a todos los campesinos se les pueda complacer de una sóla vez. Allí empieza la labor subterránea de los dirigentes locales copeyanos o del dirigente enviado desde Caracas para acaparar los resentimientos. Crean Comités Administrativos paralelos, obtienen con el PAP los créditos, el MAC les proporciona alguna ayuda e influyen en el Directorio del IAN para conseguir maquinarias o el parcelamiento por ejemplo. Se mueven en general de una manera plausible, el lema es: aunque los adecos no quieran Copey lo logró. Esto - causa una serie de problemas de tipo administrativo que resquebraja la tradicional disciplina campesina, llegando hasta el caso de tenerse que intervenir dos Comités Administrativos en un - mismo Asentamiento para evitar desgracias personales (* 6).

2) Otra modalidad es la de impedir los planes de dotación del IAN otorgándoles por adelantado a determinados grupos de campesinos los permisos de deforestación que dá el MAC, esto hasta - cierto punto es una especie de entrega de tierras, e impiden al IAN cumplir con su cometido. Cuando es del caso y les conviene políticamente logran retirar los permisos y entonces si se - puede crear el Centro Agrario, tal es el caso de la zona de la Panamericana en donde el IAN comenzó trabajos que se vieron constantemente entorpecidos por las circunstancias anotadas o el del Zulia y Bolívar en donde han impedido la dotación de tierras a un grupo mayoritario de campesinos por haber entregado permisos de deforestación p en considerable cantidad a un grupo minoritario de sus adeptos (* 7).

c) Complacencia y apoyo a todos los reclamos vengan de donde vinieran:

Esta es una de las tácticas de uso más corriente y que por cierto

.../...

ha causado serios daños al IAN. Vamos a poner un exemplo concreto: el de las Empresas Campesinas Tacarigua, que está integrada por una gran mayoría de campesinos viciados y a los cuales ya se les había logrado una disciplina y un comportamiento más o menos aceptables. Los dirigentes de Copey comenzaron a hacer labor proselitista y la bandera era de la de que se le pagasen prestaciones sociales a los afiliados, aun cuando ya ellos habían aceptado que eran una empresa autónoma y con personalidad jurídica propia, no debiendo por tanto el IAN tratarlos como a trabajadores suyos. El caso de la Cooperativa de Cascarí, en donde la bandera del Copey fué la de que se parcelara individualmente la Unidad a los fines de romper la pre-Cooperativa que había creado el IAN especulando los sentimientos individualistas de los campesinos que ya empezaban, por otra parte, a ver los frutos de la unificación por el sistema del trabajo en común.

(*)

2) En la propia sede central del IAN no hay empleado que solicite pasaje por ejemplo o no hay obrero que solicite ayuda monetaria que no sea bien recibido y recomendado por el Director copeyano a fin de que se le atienda su solicitud, no importa para ello que no exista partida o que en su conciencia sepa que esto crea inconvenientes y vicios en la administración. Si logra lo solicitado quedan bien, sino lo logran les queda por lo menos el agradecimiento por la gestión. Este es un ejemplo vivo del doble juego, de Gobierno y oposición, que ha venido practicando Copey en todas sus actuaciones.

Para lo anterior el Director copeyano es el único que tiene a tiempo completo un secretario privado bien remunerado, que no le rinde trabajo en ningún tipo al IAN y que sólo se ocupa de estas series de detalles y de hacer prosélitos dentro del propio Instituto, llegando hasta el colmo de decir a un recien empleado de la Secretaría General, quizás confundido, "que el puesto que ocupaba era clave para los intereses del Copey, que tendría que ocurrir donde él para recibir las consignas o instrucciones". Igualmente cuenta el citado Director con dos porteros, uno de los cuales activista connotado de Copey, quien no ejerce su cargo de portero, sino que se dedica exclusivamente al trabajo político. Aparte de estos entre el grupo de copeyanos del IAN casi todos con cargos importantes para el trabajo político, existe una disciplina rígida.

.../...

d) Presión constante y hasta de chantaje para obtener más cargos y remover el personal copeyano colocando activistas que le rindan una labor positiva:

1) Mientras Acción Democrática no escoge para ninguno de sus cargos miembros activos del Partido sino fríos técnicos a los cuales no los mueve a otro fin que el cumplimiento de su trabajo o empleados de oficina y de campo a los cuales es necesario ayudar por determinada circunstancia, el Copey en cada cargo tiene un activista, un hombre de disciplina partidista que trabaja obedeciendo instrucciones precisas y que tiene que responder cada determinado tiempo por su actuación, es así como cada vez que le conviene el Copey mediante memorándum de su Director al Presidente del IAN exige la remoción de cargos. Cuando existen problemas para el Gobierno en los cuales peligra la estabilidad el Director copeyano empieza a chantajear exigiendo cargos o prebendas para sus compañeros, dejando ver en forma a veces excesivamente arrogante que su Partido está dispuesto a retirarse si no se le concede tal o cual petición.

Como han actuado en el MAC:

Mientras en el IAN los copeyanos tienen cargos de los más importantes nombrados por su Partido los pocos adecos que existen en el MAC han sido escogidos por el Copey de entre los amigos de determinados funcionarios y los cuales son pasivos en política, no responden ante Acción Democrática por su actuación. El número de adecos en el MAC es ínfimo. El lema del ex-Ministro de Copey y creo que del actual era el siguiente: "El Ministerio es eminentemente técnico, yo no acepto Punto Fijo, no acepto postulaciones ni de AD ni de Copey". (* 3). Con esto cerraba las posibilidades a los adecos de colocar militantes que pudieran hacer algún tipo de labor política, pero esto desde luego, no operaba para el caso de los copeyanos, pues es bien conocido el sectarismo de estos en el MAC.

La labor realizada en este Ministerio desde el punto de vista administrativo es nula, cuenta con un aparataje burocrático de tal magnitud que el Presupuesto de funcionamiento durante los 2 años últimos superaba en mucho al de los gastos de capital, he aquí las cifras: Presupuesto de 1962 Gastos de Funcionamiento Bs. 135.921.670,oo; Gastos de Capital Bs. 67.756.841,oo. Presupuesto de 1963: Gastos de Funcionamiento Bs. 143.445.981,oo; Gastos de Capital Bs. 72.245.834,oo. Ob

.../...

cérvese la diferencia con el Instituto Agrario Nacional. Presupuesto de 1962: Gastos de Funcionamiento B. 41, millones, Gastos de Capital B. 124, 6 millones. Presupuesto de 1963: Gastos de Funcionamiento B. - 59, 2 millones, Gastos de Capital B. 121, 3 millones (*9). Con esa - enorme cantidad de empleados el Ministerio no ha logrado hacer realizaciones de relieve, nos permitimos sugerir nuevamente la conveniencia de que sea designada una comisión que estudie las Memorias y Cuentas del MAC bajo dos aspectos: uno presupuestario para dilucidar cómo y en qué forma se han invertido los dineros y otro administrativo para conocer cuál ha sido en realidad la labor ejecutada por el MAC.

En lo que sí se ha destacado el Ministerio de Agricultura y Cría - es en el ramo de las relaciones públicas, hasta tal punto de que para la opinión pública en general la Reforma Agraria ha sido realizada en ese Ministerio, obsérvese que la gran mayoría de las declaraciones del Ministro, que las hace semanalmente, de lo que habla es del número de - Asentamientos realizados, del número de hectáreas entregadas, de los créditos otorgados o en fin de la marcha de la Reforma Agraria. Aparte de lo anterior en las Memorias y Cuentas del MAC se aprovecha este - Despacho en forma muy habilidosa de la labor que realiza por ejemplo el MOP en cuanto a obras de riego o el SAS en cuanto a vivienda rural o los Ejecutivos Regionales en la construcción de pozos, lagunas, pequeñas represas, caminos, en los cuales la participación del Ministerio ha sido la de prestar uno de sus tantos técnicos, o una de sus tantas maquinarias o en todo caso dando un aporte monetario mínimo, luego en una forma un tanto insincera aparecen declarando que la labor ha sido del MAC.

En general tanto el Ministerio de Agricultura y Cría como Cordiplán, así como el CBR, el Fondo Nacional del Café y Cacao, el Consejo de Investigaciones Agrícolas, los diversos Clubes Rurales fundados, no han actuado sino en función eminentemente política sin dejar saldo - positivo de envergadura en lo que toca a la administración o a las realizaciones.

Merece especial atención la discriminación observada en las Escuelas de Peritos Agropecuarios y en las de las Demostradoras del Hogar Campesino, en donde dominan en una forma sorprendentemente mayoritaria los graduados copeyanos. Se da el caso de que muchos jóvenes adecos han tenido que esconder su militancia y disimular que son - copeyanos para lograr graduarse en las Escuelas citadas.

.../...

4

CONCLUSIONES:

A través de lo dicho en la segunda parte de este Informe se desprende que a los funcionarios y empleados acción democratista les ha faltado fundamentalmente una rígida disciplina partidista que convierta al militante pasivo en activo y que responda de su actuación ante un determinado organismo que lo oriente y le imparta instrucciones. En este sentido me permito insinuar que es conveniente que el Partido estudie la creación de una especie de sub-Buró Político que se encargue exclusivamente de trazar el plan de acción a seguir por los miembros que ocupen cualquier cargo de importancia política (desde el máximo hasta el mínimo que sea útil). Que no haya un sólo miembro en la administración pública que no responda a lo que llama el Profesor Xifra Heras miembro activo, copiando a Duverger: " miembros activos, son los que participan en la actividad y decisiones de los partidos, ya sea como meros aclamantes, o bien realizando funciones de control, de repulsa, de discusión, de propaganda, de organización, electorales, etc. El afiliado activo al partido suele conocerse con el nombre de militante; los militantes son los verdaderos ejecutores de las funciones del partido".

Debemos también reconocer que el partido Copey se ha manejado políticamente envidiable, pues ha logrado aprovecharse de la labor de Gobierno. No obstante, en ese provecho va implícito una buena ración de deslealtad hacia el socio de coalición y hacia los intereses generales del País. Indudablemente que el Copey se ha seguido por lo que apunta Friedrich: "los partidos antiguos viven por la fuerza de la organización, y por tanto la organización es lo principal y el programa cuestión secundaria. Modernamente los partidos se guían fundamentalmente por razones tácticas más que por razones de principio. En el siglo pasado se exigía a los miembros del partido una fidelidad ideológica que hoy día se ha visto desplazada por la técnica de la conquista del poder".

Luis Gómez Germeño

LGG/hmh. -
16 - 1 - 64.

FUENTES

INFORME ADMINISTRATIVO:

Llamada 1) Exposición de motivos al Proyecto de Ley de Reforma Agraria.

Llamada 2) Dr. Víctor Giménez Landínez. Leyenda de la Exposición de Motivos a la Ley de Reforma Agraria ante la Cámara de Diputados (agosto de 1959).

Llamada 3) Dr. Giménez Landínez. Informe sobre Política Agraria de la República de Venezuela para la V Conferencia Interamericana de Agricultura y VI de la FAO, celebrada en México en agosto de 1960. (Estudios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Cría. Cuaderno Nº 5).

Llamada 4) Ley de Reforma Agraria. Artículos 166 al 171 y 52 al 56. Además Charla del Dr. Giménez Landínez en el Programa de la Asociación Venezolana de Ejecutivos el día 11-2-60.

Llamada 5) Memoria y Cuenta del Instituto Agrario Nacional.

Llamada 6) Informe de la Consultoría Jurídica del IAN.

Llamada 7) Informe de la Consultoría Jurídica del IAN.

Llamada 8) Se refiere a títulos entregados hasta octubre de 1963. A esta fecha pasan de 6,300 los entregados y los elaborados y listos para ser otorgados más de 1,000.

Llamada 9) Memoria y Cuenta del Instituto Agrario Nacional (Folleto Resúmen por el IAN en 1963).

Llamada 10) Memoria y Cuenta del Instituto Agrario Nacional (Folleto Resúmen por el IAN en 1963).

.../...

Llamada 11) Memoria y Cuenta del Instituto Agrario Nacional. Años 1959, 1960 y 1961.

Llamada 12) Memoria y Cuenta del Instituto Agrario Nacional.

Llamada 13) Informe del Departamento de Reubicación y Dotación.

Llamada 14) Artículos 2°, 69 y 70; 17 y 27 de la Ley de Reforma Agraria.

Llamada 15) Artículo 171 de la Ley de Reforma Agraria.

Llamada 16) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963. Página 167).

Llamada 17) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963).

Llamada 18) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963).

Llamada 20) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963).

Llamada 21) Plan Nacional del Maíz. Comisión Coordinadora de Reforma Agraria.

Llamada 22) Plan Nacional del Maíz. Comisión Coordinadora de Reforma Agraria.

Llamada 23) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963).

Llamada 24) Informe de la Oficina de Programación y Presupuesto del Instituto Agrario Nacional.

.../...

Llamada 25) Plan de Regularización de la Tenencia (Departamento de Reubicación y Dotación).

Llamadas 26 y 27) Informe del Banco Agrícola y Pecuario.

INFORME POLITICO:

Llamada 1) Artículo 163 de la Ley de Reforma Agraria.

Llamada 2) Memorándum dirigido a la Presidencia del IAN.

Llamadas 3 y 4) Viaje del Director copevano a Guayabita y otros Asentamientos. Gestiones de un comisionado copevano a la zona de reubicación de Calabozo y otros Asentamientos.

Llamada 5) Diarios de la capital en diciembre del pasado año.

Llamada 6) Casos de Moroturo, Estado Lara, y otros.

Llamada 7) Informe presentado por el Delegado Agrario del Estado Zulia en oficio número 483 de fecha 6-11-63, anexando informe del Perito Forestal Pradelio Zambrano.

Llamada 8) Informe verbal del Dr. Gonzalo Vivas.

Llamada 9) Informe del Ministerio de Agricultura y Cría ante la VII Convención de Gobernadores (Desarrollo Agrícola y Reforma Agraria. Mayo de 1963.) Páginas 204 y 206.

(*) En la página 5° del "Informe Político" hablamos del caso Cascarí. Estos títulos fueron entregados por la Gobernación del Estado Táchira, de acuerdo con la Seccional de la Federación Campesina en esa Entidad, pasando por encima del Instituto Agrario Nacional.

LGC/hmh.

Estado y Banco. AHC.
Presidente

REPUBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

DIRECCION CONSULTORIA JURIDICA

3 MAYO 1965

No. CJ.-03304

5

NUMERO DE CUENTA DEL CIUDADANO MINISTRO DE AGRICULTURA Y CRIA, PARA EL CONSEJO DE MINISTROS.-

Asunto: Créditos del Plan de Fomento Pecuario en tierras baldías afectadas por el Decreto Nº- 192 del 3 de noviembre de -- 1.964.-

EL DECRETO Nº 192.-

Según el Decreto Nº 192 de fecha 3 de noviembre de 1.964, el Presidente de la República, dispuso la transferencia al Instituto Agrario Nacional de todas las tierras baldías ubicadas en los siguientes Distritos: Urdaneta del Estado Aragua; Barinas y Pedraza del Estado Barinas; Pao, Tinaco y San Carlos del Estado Cojedes; Mellado del Estado Guárico; Justo Briceño del Estado Mérida; Turén, Páez, Guanare y Guanarito del - Estado Portuguesa; Rivero del Estado Sucre; Uribante, San Cristóbal y - Jáuregui del Estado Táchira; Betijoque del Estado Trujillo; Páez, Mara, Urdaneta, Perijá, Colón y Sucre del Estado Zulia. Dichas tierras se encuentran afectadas a la Reforma Agraria, de conformidad con los Artículos 10 y 11 de la Ley respectiva. A los efectos del Decreto en cuestión se ordena en su articulado que se proceda a efectuar, por intermedio de la Procuraduría General de la República, la tramitación legal - necesaria para el otorgamiento de los instrumentos, que acrediten la - transferencia de las tierras señaladas. Asimismo, se establece que nadie podrá reclamar el pago de bienhechurías efectuadas en las referidas tierras con posterioridad al 5 de marzo de 1.959, cuando las extensiones ocupadas excedan los límites establecidos por el Artículo - 29 de la Ley de Reforma Agraria (150 a 5.000 hectáreas segun la calidad de la tierra).-

./.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicado en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

El objeto del presente Decreto es el de incorporar al fomento económico de la Nación, mediante la utilización por parte del Instituto Agrario, las tierras rurales baldías beneficiadas por obras de infra-estructura, tales como las de riego y en general de desarrollo, realizadas por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Estadales, y los Institutos Oficiales Autónomos.-

PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS.-

El Decreto anteriormente citado adolece de fallas numerosas. En este sentido es necesario observar, en primer término, la improcedencia del Artículo 3°, que ilegalmente prohibe la indemnización de bienhechurías efectuadas en baldíos, después del 5 de marzo de 1.959. En efecto, la Ley Agraria pauta en su articulado, a los fines de permitir las disponibilidades de tierras, tres cuestiones fundamentales:

1°.- La afectación, a los fines de la Reforma Agraria, de todas las tierras baldías existentes en la República (Artículo 10, letra a) de la Ley de Reforma Agraria).-

2°.- La suspensión de los arrendamientos de baldíos (Artículo 16 de ejusdem).-

3°.- La extensión de baldíos que puede ser ocupada. (Artículos 16 y 29 ejusdem).-

Ninguna de las previsiones anteriores incidió sobre la actividad fundacional o constructiva de bienhechurías, porque el Legislador, sabiamente, armonizó las exigencias de la Reforma Agraria con las necesidades inherentes al desenvolvimiento de la producción.-

La afectación no es mas que una especial vinculación de los inmuebles rurales de las entidades públicas a un destino específico: la

./.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde proceda, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

realización de la Reforma Agraria. Como categoría jurídica tiene el evidente sentido de una "carga", de ahí que sus limitaciones no puedan interpretarse de modo extensivo. Según este criterio, expuesto por los más ilustrados tratadistas, el alcance de la afectación de las tierras públicas viene determinado por el Artículo 15 de la Ley de Reforma Agraria en los siguientes términos:

"No podrán enajenarse, gravarse, ni arrendarse las tierras afectadas a la Reforma Agraria a que se contrae este Capítulo, a menos que el Ejecutivo Nacional lo autorice por ser necesarias para otros fines de utilidad pública o social".-

Como es obvio la afectación en sí, no puede involucrar una especie de inhabilitación del bien afectado para la actividad agraria en general. Conclusión semejante sería absurda, pues colidiría con uno de los principios de nuestro Derecho Agrario: el de la incorporación de la población rural al desarrollo económico.- Tampoco tiene esa orientación la suspensión de los arrendamientos: el precepto solo indica que la autoridad competente no dará curso a nuevas solicitudes, por lo que los anteriores se mantienen en vigor.-

Si analizamos más profundamente el problema encontraremos que la Ley regula la ocupación pacífica de baldíos por mas de un año. No elimina la institución de la ocupación, antes por el contrario, determina que podría lograrse la adjudicación en propiedad siempre que se llenaran los requisitos siguientes:

a) Ocupación pacífica por más de un (1) año.-

b) Que la ocupación se haya efectuado con anterioridad a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.-

c) Que exista una explotación o empresa de carácter efectivo -- conforme al principio de la función social.-

d) Que se acredite debidamente ante la autoridad competente los

./.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

extremos anteriores.-

Bien es cierto que se reduce la superficie que puede ser ocupada, pero de ninguna manera se prohibe la ocupación. En efecto, la Ley solo dice:

"Asimismo, no surtirá los efectos que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos atribuye al ocupante de tierras baldías para el arrendamiento y compra de esta clase de terrenos, la ocupación sobre extensiones que excedan de los límites que esta misma Ley señala". (Artículo 16 de la Ley de Reforma Agraria).-

De los textos legales transcritos no se deduce, ni expresa, ni tácitamente, que la intención del Legislador haya sido la de prohibir el fomento de las tierras baldías, con el consiguiente desconocimiento de las bienchechurías efectuadas con posterioridad a la promulgación a la Ley de Reforma Agraria. Incluso, regula expresamente el problema en las dos normas siguientes:

Artículo 39.- Cuando sea necesario afectar para los fines de la Reforma Agraria tierras baldías ocupadas por terceros que mantengan en ellas explotaciones agrícolas o pecuarias y el Instituto Agrario Nacional haya logrado un acuerdo con el ocupante, se solicitará la expropiación de las obras y mejoras reconociéndose al ocupante del derecho de conservar una parte de sus explotaciones, la cual se fijará de acuerdo con los planes del establecimiento en proyecto, a menos que prefiera ubicarse en otra parcela que le asigne el Instituto Agrario Nacional."

Artículo 40.- Si el ocupante de tierras baldías no ha realizado una explotación agropecuaria útil, el Instituto Agrario Nacional, solicitará del Juez ordinario en materia de expropiación, la autorización judicial para ocupar dichas tierras, pagandoajusta regulación de expertos, las obras y mejoras que allí tuviere el ocupante..."

./.

REPUBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

DIRECCION .....

No. .....

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde proceda, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

Con textos tan claros y precisos es inexplicable el Artículo 3º del Decreto Nº 192, que prohibe el pago de las bienhechurías, porque conlleva efectos de tipo confiscatorio, prohibidos por la Constitución Nacional.-

Por otra parte, es de anotar que el referido Decreto es inconstitucional al transferir todas las tierras baldías, ubicadas en los Distritos señalados, al Instituto Agrario Nacional, ya que pretende incluir aquellas que, por la Carta Fundamental, son definitivamente inalienables, como los baldíos en islas marítimas, fluviales, o lacustres y las minas y salinas (Ord. 10 Artículo 136 Constitución Nacional).-

Además de ello, consideramos que la transferencia en cuestión tampoco abarcaría las tierras que conforme al Artículo 28 de la Ley Agraria, no son afectables a los fines de la Reforma Agraria, tales, como los parques y bosques nacionales, las reservas forestales, las zonas protectoras, los monumentos naturales y artísticos, y los santuarios de la fauna.-

EL PROBLEMA PLANTEADO AL PLAN DE FOMENTO PECUARIO.-

La Oficina de Estudios Jurídicos y Recuperación de Créditos del Plan de Fomento Pecuario y la Consultoría Jurídica de este Ministerio, consideraron que dicho Decreto incidía de manera directa sobre los planes crediticios de este Despacho, porque gran cantidad de fundos pecuarios que solicitaban financiamiento para el fomento de su ganadería, se encontraban asentados sobre tierras baldías, sujetas a las disposiciones del Decreto Nº 192.- Asimismo, se entendía que si las mejoras y bienhechurías incorporadas a los fundos, con posterioridad al 5 de marzo de 1.959, fecha a la cual remite el mencionado Decreto, no eran reconocidas por la Nación, por ende no existía garantía que respondiera por los préstamos a concederse y en el menor de los casos había inseguridad en relación con la suficiencia de los bienes ofrecidos como respaldo.-

./.

REPUBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

DIRECCION .....

No. .....

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

Por tal situación de precariedad para la recuperación de los créditos, se resolvió paralizar la tramitación de las solicitudes que habían sido formuladas por los propietarios de mejoras y bienhechurías -- construídas en fundos ubicados en tierras baldías, en los Distritos afectados por el Decreto Nº 192.-

PROBLEMAS ECONOMICOS.-

Por todo lo expuesto el titular del Despacho sostuvo, en fecha 21 de los corrientes, una reunión con el Director General, el Director de Sanidad e Industria Animal, el Jefe de la División de Créditos Pecuarios, el Consultor Jurídico y los demás Abogados al servicio de este Ministerio, con el objeto de discutir específicamente la situación de las solicitudes de créditos pecuarios, para ser invertidos en fundos desarrollados en tierras baldías, en los Distritos afectados por el Decreto Nº 192.- Se discutieron en dicha reunión todos los problemas precedentes, y se hicieron las objeciones que jurídicamente se consideraban procedentes. Por otra parte, se centró el intercambio de opiniones en la gran importancia económica que tenía para la Nación el fomento de la ganadería en los referidos Distritos, y cómo la mayoría de los fundos pecuarios existentes en esas zonas, se encontraban afectados a la Reforma Agraria, y en consecuencia, como dijimos antes, carentes de una garantía firme que asegurara nuestros intereses. De igual manera se hizo hincapié en que si se detenía la concesión de créditos en estas importantes regiones, el progreso industrial del país se vería seriamente golpeado y el Plan de Fomento Pecuario estaría limitado en sus alcances.-

CONCLUSIONES.-

Por todo ello, se consideró conveniente continuar la tramitación

./.

REPUBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

DIRECCION .....

No. .....

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

de los créditos solicitados en las zonas afectadas, por las razones siguientes:

1º.- El Decreto en cuestión no debe entrabar el desarrollo económico de la Nación, en lo que se refiere a la industria ganadera.

2º.- Que a tenor de lo dispuesto por el Artículo 3º del Reglamento sobre créditos para el Plan de Fomento Pecuario, los mismos no se basarán estrictamente en la garantía material que ofrezcan los solicitantes, sino en su capacidad de trabajo y en las posibilidades de pago de la explotación.-

De igual manera se resolvió que en los nuevos contratos de crédito, con el objeto de afianzar la garantía prestada, se establecería una cláusula en la cual se conviniera que si los bienes sobre los cuales se constituye garantía a favor del Banco Agrícola y Pecuario, no fueren -- propiedad del deudor sino de otras personas, éste responderá de su deuda con todo otro bien que fuere de su propiedad, pudiendo el referido - Instituto exigir la constitutción de una nueva garantía suficiente o dar por vencido el plazo y proceder judicialmente. Además se establecería - que la admisión por parte del Banco Agrícola y Pecuario de las garan- - tías constituídas, así como el otorgamiento del crédito, por parte del Ministerio de Agricultura y Cría, no significaría, directa ni indirectamente, reconocimiento por parte de la República, de los derechos que - puedan corresponder al deudor; ni la admisión por parte de ella de que, a favor del prestatario, corra o se haya consolidado prescripción adquisitiva de derechos o extintiva de obligaciones con respecto a la Nación; ni tampoco el reconocimiento de ocupaciones o tenencias que llegaren a ser declaradas contrarias a derecho.-

Tales medidas tendrán un valor temporal hasta que el Consejo de Ministros resuelva lo conducente, en relación con este gran problema - que enfrenta el Ministerio de Agricultura y Cría, en el desarrollo de

./.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

sus planes crediticios y de política económica, en virtud de la transferencia al Instituto Agrario Nacional de las tierras baldías ubicadas en los Distrito señalados por el Decreto Nº 192, y afectadas a la Reforma Agraria por la respectiva Ley.-

RESUMEN.-

Según el Decreto Nº 192, de fecha 3 de noviembre de 1.964, se dispuso la transferencia al Instituto Agrario Nacional de todas las tierras baldías, ubicadas en 23 Distritos de 10 de los Estados de la Nación Venezolana.-

Objeto del Decreto: Incorporar al desarrollo económico del país las tierras baldías beneficiadas por obras de infraestructura, de la Administración pública, mediante su utilización por parte del Instituto Agrario Nacional.-

Reparos jurídicos: El Decreto Nº 192:

1º.- Prohibe ilegalmente la indemnización de las bienhechurías efectuadas en los citados baldíos después del 5 de marzo de 1.959, contrariando claras disposiciones de la Ley Agraria (Artículos 39 y 40).-

2º.- Inhabilita las tierras afectadas para los fines de la actividad agraria en general.-

3º.- Es inconstitucional por :

a) conlleva efectos confiscatorios por el desconocimiento de las mejoras y bienhechurías antes señaladas.-

b) Incluye baldíos inalienables por la Carta Fundamental.-

4º.- Es ilegal porque abarca tierras que, por el Artículo 28 de la Ley Agraria, no son afectables a la Reforma Agraria.-

Problemas planteados al Ban de Fomento Pecuario: El Ministerio de Agricultura y Cría resolvió paralizar los créditos solicitados, para

./.

Al contestar este documento, sírvase mencionar la Dirección de donde procede, indicada en el membrete. Procúrese no tratar más de un asunto en cada comunicación.

ser invertidos en tierras baldías afectadas por el Decreto Nº 192, considerando que la garantía o no existía o era insuficiente, en razón al desconocimiento de las mejoras y bienhechurías realizadas por los ocupantes.-

Aspecto económico y conclusiones: Posteriormente, se revocó la medida de paralización acordada, en virtud de que si se la mantenía en vigor se frenaba el desarrollo económico del país. Dicha resolución -- tendría un carácter temporal, es decir hasta que la superioridad decidiera lo conducente.-

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
CONSULTORIA JURIDICA

REF

6

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

INFORME ACERCA DE PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS EN EL NUMERO DE CUENTA DEL CIUDADANO MINISTRO DE AGRICULTURA Y CRIA, PARA EL CONSEJO DE MINISTROS, ACERCA DEL DECRETO 192 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1964.-

En el Número de Cuenta del Ciudadano Ministro de Agricultura y Cría, para el Consejo de Ministros, de fecha 3 de Mayo de este año se plantean problemas jurídicos acerca del Decreto No. 192 de la Presidencia de la República. En el informe contenido en ese Número de Cuenta se expresa que el Decreto en cuestión adolece de fallas numerosas, siendo ellas, a juicio de los autores del mismo, las siguientes:

1.- Que la Ley no elimina la Institución de la ocupación;

2.- Que de la Ley de Reforma Agraria no se deduce, ni expresa ni tacitamente, que la intención del Legislador haya sido la de prohibir el fomento de las tierras baldías;

3.- Que es inexplicable el Artículo 3º del mencionado Decreto que prohibe el pago de las bienhechurías, porque conlleva efectos de tipo confiscatorio, prohibidos por la Constitución Nacional;

4.- Que el Decreto 192 es inconstitucional al transferir todas las tierras baldías, ubicadas en los Distritos señalados, al Instituto Agrario Nacional, ya que pretende incluir aquellos que, por la carta fundamental, son definitivamente inalienables, como los baldíos en Islas Marítimas, Fluviales o Lacustres y las minas y salinas (Ordinal 10 Artículo 136 Constitución Nacional).

5.- Que la transferencia en cuestión tampoco abarcaría las tierras que conforme al Artículo 28 de la Ley Agraria, no son afectables a los fines de la Reforma Agraria, tales, como los parques y los bosques Nacionales, -

../..

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

las reservas forestales, las zonas protectoras, los monumentos naturales y artísticos y los santuarios de la Fauna.

Visto lo anterior haremos las siguientes observaciones:

La Ley no elimina la Institución de la ocupación.- Podemos decir que la Institución de la ocupación es definida por el Artículo 144 de la Ley de Tierras y Baldías y Ejidos, como la detentación en nombre propio de tierras baldías sin título de venta, de adjudicación gratuita o de arrendamiento. La mencionada Ley, en su Artículo 145 establece el régimen de la libre ocupación al disponer que "Es lícita la ocupación de terrenos baldíos cuando no sean de los inalienables que se enumeran en el Artículo 13°". En el Artículo 146 se establece que la ocupación produce en favor del ocupante los efectos que en la misma se indican y los que establezcan las otras leyes especiales. Según el Artículo 147 "El ocupante tiene las acciones que sean procedentes conforme a derecho para la defensa de sus obras y plantaciones; y puede enajenar estas y en tal caso, el adquiriente lo sucede en todos los beneficios de la ocupación". Finalmente, para que la ocupación surta los efectos que le atribuye la Ley, dispone el Artículo 148 que "es necesario que se haya ejercido durante el lapso de dos años y medio por lo menos". Esos efectos de la ocupación, a que se refiere el texto transcrito, consisten fundamentalmente en los siguientes:

a) Concesión extraordinaria de terrenos baldíos, regulada por el Numeral Segundo del Artículo 29 de la mencionada Ley, referente a extensiones que excedan de los límites fijados, "Cuando el proponente tuviere, como ocupante, ya cultivando el terreno, si fuera de agricultura o cercado y ocupado con suficiente cantidad de ganado, si fuere pecuario".

../..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA AL TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

b) Preferencia para adjudicación gratuita, regulada por el Artículo 149, de la siguiente forma: "Tienen preferencia para que se les adjudiquen gratuitamente, se les arrienden o se les vendan, en sus casos, las respectivas tierras baldías:

1.- Los ocupantes que estén en condiciones de solicitar su adjudicación gratuita, conforme a los Artículos 78, 79 y 81 de la presente Ley, cuando un Tercero las solicite en adjudicación gratuita o arrendamiento y ellos quieran hacer uso de su derecho de preferencia.

2.- Las demás personas que no estando en condiciones de poder obtener la adjudicación gratuita, tengan ocupado un terreno con establecimientos agrícolas o pecuarios, cuando dichos terrenos fueren solicitados por terceros, en adjudicación gratuita o arrendamiento y ellos estuvieren dispuestos a arrendarlos en las mismas condiciones que el tercero o comprarlo de acuerdo con las respectivas disposiciones del Capítulo IV de la presente Ley".

En resúmen, la Ley de Tierras Baldías y Ejidos permite la libre ocupación de los terrenos baldíos, con las excepciones que en ella misma se establecen.

Ahora bien, el 5 de Marzo de 1960 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, cuyo Artículo 10 dispone que las tierras baldías quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria. Para ser consecuente con esa afectación, que es una destinación, una vinculación de esas tierras a tal proceso, el Legislador ordena en el Artículo 15 del mismo instrumento, que ellas no podrán enajenarse, gravarse ni arrendarse a menos que el Ejecutivo Nacional lo autorice por ser necesarias para otros fines de utilidad pública o social, esto es, el Legislador quiere sustraer esos terrenos baldíos del comercio jurídico, quiere que se dediquen integramente a la realización de la Reforma A-

../..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

graria, no pudiendo dedicarse a otros fines sino de manera excepcional, mediante la autorización del Ejecutivo y en el caso de que sean necesarios para otros fines de utilidad pública o social. Por esos mismos motivos en el Artículo 16 se ordena que no se de curso a nuevas solicitudes de arrendamiento de baldíos, y en el único aparte de ese Artículo 16 se dispone que "Asimismo no surtirá los efectos que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos atribuye en favor del ocupante de tierras baldías para el arrendamiento y compra de esta clase de terrenos, la ocupación sobre extensiones que excedan de los límites que esta misma Ley señala".

Visto lo anterior Puede afirmarse que la vigente Ley de Reforma Agraria permite la libre ocupación de terrenos baldíos? El autor del Informe en cuestión está por la respuesta afirmativa, pues él considera que:

1.- La Ley establece la extensión de baldíos que puede ser ocupados (Artículos 16 y 22)

2.- Porque "Como es obvio la afectación en sí, no puede involucrar una especie de inhabilitación del bien afectado para la actividad agraria en general. Conclusión semejante sería absurda pues colidiría con uno de los principios de nuestro Derecho Agrario: El de la incorporación de la población rural al desarrollo económico"

3.- Porque "La Ley regula la ocupación pacífica de baldíos por más de un año. No elimina la Institución de la ocupación, antes por el contrario, determina que podría lograrse la adjudicación en propiedad siempre que se llenaren los requisitos siguientes:

a) Ocupación pacífica por más de un (1) año.

b) Que la ocupación se haya efectuado con anterioridad a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

../..

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

c) Que exista una explotación o empresa de carácter efectivo conforme al principio de la función social.

d) Qué se acredite debidamente ante la autoridad competente los extremos anteriores.

4.- Que no se prohibe la ocupación.

Vamos a analizar esos argumentos:

1.-"La Ley establece la extensión de baldíos que puede ser ocupada (Artículos 16 y 29)"

El Artículo 16 de la Ley de Reforma Agraria dispone "quien acredite debidamente ante el Instituto Agrario Nacional haber ocupado pacíficamente tierras baldías por más de un año, antes de la promulgación de esta Ley, tendrá derecho a que se le adjudiquen en propiedad dichas tierras, en la extensión y límites que se señalan en el Artículo 29, en la parte que efectivamente tenga en explotación conforme al principio de la función social y en las condiciones que esta misma Ley establece". La lectura atenta de este Artículo nos indica que no es cierto que en este caso "La Ley establece la extensión de baldíos que puede ser ocupada", pues sólo se está refiriendo a la extensión de baldíos ocupados que pueden ser adjudicados en propiedad. La Ley en este sentido es de una claridad meridiana, no está regulando la ocupación de terrenos baldíos, pues está refiriéndose y dando determinados efectos a la ocupación ya consumada, y este indudablemente es un acto de justicia de nuestro sabio Legislador Agrario, pues viene a ser el reconocimiento de disposiciones que anteriormente regulaban la ocupación de terrenos baldíos, que ya hemos transcrito. Queremos repetir: El Artículo 16 de la Ley de Reforma Agraria no regula la ocupación de terrenos baldíos sino la adjudicación de terrenos baldíos ocupados con anterioridad a la promulgación de la Ley de

.../..

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA AL TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

Reforma Agraria, no se refiere en ningun caso ni permite, ni siquiera sugiere que los terrenos baldíos puedan ser ocupados. Por ello consideramos que ese primer argumento utilizado por el autor del informe no tiene ningun asidero legal.

2.- Porque como es obvio la afectación en sí, no puede involucrar una especie de inhabilitación del bien afectado para la actividad agraria en general. Conclusión semejante sería absurda, pues colidiría con uno de los principios de nuestro Derecho Agrario: el de la incorporación de la población rural al desarrollo económico".

Se quiere dar a entender con este argumento, aunque no se expresa en forma muy clara, que el régimen de prohibición de la ocupación de terrenos baldíos involucraría una inhabilitación de esos terrenos para la actividad agraria y que ello se opone a la incorporación de la población rural al desarrollo económico. Nada más absurdo que esto. Al afectarse las tierras baldías a los fines de la realización de la Reforma Agraria y al no permitirse la libre ocupación, lo que busca el Legislador es imponer un orden determinado con el objeto de que la distribución de la tierra sea más justa y no quede sometida a la merced de la capacidad económica y a la voracidad de los conocidos cercadores de terrenos baldíos. Este régimen de ninguna manera inhabilita las tierras baldías para los fines de la Reforma Agraria, por el contrario, es la forma más correcta y acorde con un estado de derecho, pues como hemos dicho impone un orden, unos procedimientos , que llevan a la adquisición de la propiedad, como lo establece la Ley de manera expresa, y los beneficiarios no son otros que los productores, ya campesinos, ya empresarios, que carecen de tierras. Por ello, este argumento que analizamos no tiene ninguna razón de ser.

3.- Porque la Ley regula la ocupación pacífica de terrenos baldíos por más de un año. No elimina la Institución de la ocupación, antes por el contra-

../..

REF

CABLE: AGRONAC

NO.

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

rio, determina que podría lograrse la adjudicación en propiedad siempre que se llenaren los requisitos siguientes:

a) Ocupación pacífica por más de un año

b) Que la ocupación se haya efectuado con anterioridad a la promulgación a la Ley de Reforma Agraria

c) Que exista una explotación o empresa de carácter efectivo conforme al principio de la función social

d) Que se acredite debidamente ante la autoridad competente los extremos anteriores.- Este argumento ya lo hemos analizado y hemos demostrado, por las razones expuestas, que no tiene ningun asidero legal, pues la Ley (Artículo 16) no regula la ocupación de terrenos baldíos sino que regula la adjudicación de terrenos baldíos ocupados, que es una cosa completamente distinta. El mismo informe transcribe (letra b) el extremo exigido por el Artículo citado: Que la ocupación se haya efectuado con anterioridad a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

4.- Que no se prohibe la ocupación.- Esto es cierto, la Ley de Reforma Agraria no prohibe expresamente la ocupación de terrenos baldíos, pero consideramos que ello no es en realidad necesario.- El régimen a que estaban sometidas las tierras baldías antes de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, era el de la libre ocupación; esto obedecía a que no se habían destinado a un fin determinado. Existía un procedimiento primitivo verdaderamente injusto que permitía que las personas con capitales suficientes fueran las que se apoderaran de las mejores tierras, haciendo que las masas campesinas, por sus paupérrimas condiciones se retiraran a regiones marginales. Al promulgarse la Ley de Reforma Agraria la situación cambió radicalmente, ya que las tierras

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

baldías no estan a la libre disposición de cualquiera persona sino que se afectan, se destinan única y exclusivamente a los fines de la realización de la Reforma Agraria, y por ello mismo (Artículo 15) no pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse. Así pues, repito, esas tierras, por voluntad de la Ley tienen un destino determinado: la realización de la Reforma Agraria. Ahora bien, esa Reforma Agraria, ese proceso, no es un proceso anárquico, sujeto a múltiples voluntades, es un proceso regido por determinadas normas, que son las normas contenidas en la Ley de Reforma Agraria, y que tiene un órgano rector y ejecutor que es el Instituto Agrario Nacional, y es por esas razones que en nuestra Ley ya no se permite la libre ocupación de terrenos baldíos, pues sería desnaturalizar tal proceso, sería continuar en el caos anteriormente existente, cosa que ya no se permite, pues para la adquisición de esos terrenos hay procedimientos claros y precisos en la Ley. Las tierras baldías estan afectadas a la realización de la Reforma Agraria y el Organo Ejecutor de esa Reforma es el Instituto Agrario Nacional, quien no puede permitir, pues de desnaturalizaría el proceso de la reforma, que las tierras destinadas a la misma, aunque sea con fines agrícolas, sean ocupadas y la propia Ley es muy clara al respecto, al establecer, entre las atribuciones del Directorio (Artículo 161, Numeral 10ª): "Solicitar del Ejecutivo Nacional la reinvidicación de las tierras de la Nación ocupadas por terceros". Así pues, es cierto que la Ley de Reforma Agraria no prohibe de manera expresa la ocupación de terrenos baldíos pero tambien lo es que tampoco lo permite, lo cual desnaturalizaría el proceso de la realización de la Reforma Agraria.

../..

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

2.- Que de la Ley de Reforma Agraria no se deduce, ni expresa ni tacitamente, que la intención del Legislador haya sido de prohibir el fomento de las tierras baldías.

Esto es completamente cierto, de la Ley de Reforma Agraria no se deducen, ni expresa ni tacitamente tal cosa y lo contrario sería absurdo. Ahora bien, lo que sí se deduce de la Ley en referencia y es la intención del Legislador y así lo establece es que el fomento de las tierras baldías debe hacerse de conformidad a ciertas normas, no debe hacerse de manera arbitraria, ocupando los terrenos baldíos donde a cualquiera se le antoje, pues como hemos dicho, esos terrenos estan afectados a la realización de la Reforma Agraria y esa Reforma tiene un Organo Ejecutor que es el Instituto Agrario Nacional, Organismo que es el único autorizado por la Ley para llevar a cabo tal Reforma, no pudiendo permitirse que esta se realice de manera anárquica, como ya se ha anotado. Caben aquí igualmente los argumentos que hemos expuesto al tratar acerca de la libertad de ocupación de terrenos baldíos.

3.- Que es inexplicable el Artículo 3º del mencionado Decreto, que prohibe el pago de las bienhechurías, porque conlleva efectos de tipo confiscatorio, prohibidos por la Constitución Nacional.- El Artículo 3º del Decreto Número 192 dispone que "Afectadas como estan todas las tierras baldías por la Ley de Reforma Agraria, nadie podrá reclamar el pago de bienhechurías efectuadas en esas tierras con posterioridad al 5 de Marzo de 1959, cuando las extensiones ocupadas excedan de los límites establecidos por el Artículo 29 de dicha Ley". Como lo dice el Decreto, los terrenos baldíos estan afectados a los fines de la realización de la Reforma Agraria y no pueden ser enajenados, gravados ni arrendados,

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

por expresa disposición de la Ley (Artículo 15), ni tampoco ocupados por terceros, por las razones que ya se han expuesto. De conformidad con el Artículo 2º de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, "Los terrenos baldíos de los Estados son del dominio privado de ellos, y los existentes en el Distrito Federal, en los Territorios Federales y las Islas del Mar de las Antillas, son del dominio privado de la Nación; pero como a esta le está constitucionalmente encomendada la administración de los terrenos baldíos de los Estados, las disposiciones de la presente Ley regirán todos los que estan situados dentro de los límites de la República". La administración de los terrenos baldíos a que se refiere el texto transcrito está contemplado en el Numeral 10º del Artículo 136 de la Constitución Nacional y en el Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Hacienda Nacional. Esta Ley, en su Artículo 23 dispone que "Los bienes inmuebles pertenecientes a la Nación no pueden ser enajenados sin previa y expresa autorización del Congreso Nacional, dada sin conocimiento de causa". Estas disposiciones nos estan indicando que el Gobierno Nacional tiene amplias facultades sobre los terrenos baldíos, pudiendo enajenarlos y arrendarlos y en general administrarlos, pudiéndose decir que tiene las facultades de un propietario, pues puede usar, gozar y disponer de esas tierras, siendo esos los atributos del derecho de propiedad clasicamente conocidos. En virtud de esas facultades, se dictó el Decreto Número 192 a que nos estamos refiriendo. Ahora bien, es cierto que el Artículo 3º de ese Decreto es inconstitucional, por ser de tipo confiscatorio? Veamos:

Hemos demostrado que el Gobierno Nacional se comporta y tiene las facultades de un propietario en relación con los terrenos baldíos.

../..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

Ahora bien, como propietario que es tiene el derecho de usar, gozar y disponer esos terrenos de manera exclusiva, con las limitaciones, claro está, y obligaciones establecidas por la Ley. De conformidad con ello la Ley de Reforma Agraria en su Artículo 10, tantas veces citado, dispone que las tierras baldías quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria y el Decreto 192 de la Presidencia de la República en su Artículo 1º transfiere al Instituto Agrario Nacional todas las tierras baldías ubicadas en jurisdicción de los Distritos en él señalados. Ahora bien, el Estado venezolano, como propietario que es de los terrenos baldíos está amparado por el Artículo 557 del Código Civil, que dispone que "El propietario del fundo donde se edificare, sembre o plantare por otra persona, hace suya la obra; pero debe pagar, a su elección, o el valor de los materiales, el precio de la obra de mano y demás gastos inherentes a la obra, o el aumento de valor adquirido por el fundo. Sin embargo, en caso de mala fé, el propietario puede optar por pedir la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus condiciones primitivas y le repare los daños y perjuicios". En este Artículo queda claro que en el caso de que una persona haya construído una obra con mala fé, es decir, a sabiendas de que no es suyo el terreno sobre el cual construye, el propietario del suelo tiene como opción adicional la de ordenar la destrucción total de la obra y que se restituya el fundo a la situación en que se encontraban antes de que comenzara la construcción, obra o siembra. Tambien tiene opción a reclamar la reparación por daños y perjuicios.

Quada demostrado con las disposiciones transcritas que el Gobierno venezolano, en nombre del Estado, que es propietario de los terrenos bal -

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

dios que estan en su territorio, no ha actuado de manera inconstitucional, pues la Ley de Reforma Agraria como el Decreto 192 se ajustan a sus preceptos y son consecuencia de los mismos. Podemos afirmar, por el contrario, que es benevolo el Artículo 3º del mencionado Decreto por las siguientes razones:

a) No se hace uso del recurso de ordenar la destrucción total de las bienhechurías realizadas, que es completamente legal en este caso, como hemos señalado.

b) La no reclamación de pago que se establece, por parte de los que hayan efectuado las bienhechurías, es limitada, no obstante haber podido ser total, de conformidad con el texto transcrito del Código Civil. Se establecen los límites contemplados en el Artículo 29 de la Ley de Reforma Agraria. Afirmar que el Artículo 3º del Decreto 192 es inconstitucional es afirmar lo mismo del Artículo 557 del Código Civil, lo cual es absurdo pues el mismo está basado en el Artículo 99 de la Constitución Nacional en virtud del cual se garantiza el derecho de propiedad. No podemos pensar que el autor del informe haya querido hacer una distinción entre el derecho de propiedad ejercido por el Estado y el derecho de propiedad ejercido por particulares, pues no existe texto legal ni constitucional que haga posible esa distinción. Tampoco se puede argumentar que en nuestro país existe el régimen de la libre ocupación de terrenos baldíos, pues ello es contrario a las normas establecidas en la Ley de Reforma Agraria vigente, como lo hemos demostrado ya en este informe.

../..

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

4.- Que el Decreto 192 es inconstitucional al tranferir todas las tierras baldías, ubicadas en los Distritos señalados, al Instituto Agrario Nacional, ya que pretende incluir aquellas que, por la carta fundamental, son definitivamente inalienables, como son los baldíos en Islas Marítimas, Fluviales o Lacustres y las minas y salinas (Ordinal 10º Artículo 136 Constitución Nacional).- Este argumento es falso e inconsistente por las siguientes razones: El Decreto 192 fue dictado de conformidad en el Numeral 10 del Artículo 136 de la Constitución Nacional, y es absurdo que siendo dictado de conformidad con el precepto indicado vaya a ser violatorio del mismo, pues deben interpretarse y consecuencialmente aplicarse el Artículo 1º del Decreto 192, de conformidad con su base constitucional.En el mencionado Artículo 1º del Decreto, se transfieren al Instituto Agrario Nacional, para fines de Reforma Agraria, todas las tierras baldías ubicadas en jurisdicción de los Distritos en él indicados. Debe interpretarse, desde luego, que las tierras baldías que se traspasan son las que constitucionalmente pueden traspasarse. El tercer Considerando del Decreto es muy esclarecedor a este respecto, pues en él se expresa que "las tierras rurales beneficiadas por dichas obras (obras de infraestructuras económicas) deben ser incorporadas al desarrollo económico de la Nación, mediante su utilización por parte del Instituto Agrario Nacional para fines de Reforma Agraria", lo que nos está indicando que las tierras baldías a que se refiere el Decreto no son todas tierras baldías, indistintamente, sino las beneficiadas con obras de infraestructura económica. Y aún mas esclarecedor

../..

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

es el Artículo Primero del mencionado Decreto al determinar los lotes de tierras baldías que se traspasan, disponiendo que éstas son las que están y serán beneficiadas por las obras que indican. Por ello consideramos que no es valedero ese alegato de inconstitucionalidad. Esa interpretación tan absurda, de aceptarse, tendría que aplicarse igualmente al Artículo Diez de la Ley de Reforma Agraria, pues en este se dispone que las tierras baldías estan afectadas a los fines de la realización de la Reforma Agraria, sin hacerse ninguna discriminación, lo cual tendría como resultado que la Reforma Agraria se paralizaría, pues las tierras baldías ocupan un lugar de suma importancia en la realización de aquella.

5.- Que la transferencia en cuestión tampoco abarcaría las tierras que conforme al Artículo 23 de la Ley Agraria, no son afectables a los fines de la Reforma Agraria, tales como, las reservas forestales, las zonas protectoras, los monumentos naturales y artísticos y los santuarios de la Fauna.- A este argumento se le puede aplicar las mismas consideraciones expuestas en el Numeral anterior.

Por todas las razones indicadas consideramos que el Decreto 192 de la Presidencia de la República, no adolece de las fallas que se le han achacado, siendo conforme con los preceptos de la Constitución y de la Ley.-

Caracas, 10 de mayo de 1965.-

edh.-
10-5-65.-

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

R E S U M E N

Los argumentos expuestos en el informe que nos ocupa no son valederos por las siguientes razones:

I) La Ley de Reforma Agraria elimina la institución de la ocupación, al destinar los terrenos baldios a la realización de la Reforma Agraria no pudiendose enajenar, gravar ni arrendar esos terrenos. La Ley de Reforma Agraria no regula la ocupación de baldios, lo cual permitiría su ocupación sino que regula unicamente la adjudicación de terrenos baldios ocupados por mas de un año antes de la promulgación de la misma.

II) Por medio del Decreto N° 192 no se inhabilitan las tierras baldias para la actividad agraria. Por el contrario, el Decreto establece las formas mas correctas y acordes con un estado de derecho, que impone un orden, unos procedimientos, que llevan a la adquisición de la propiedad eliminandose el sistema primitivo de la libre ocupación, que era verdaderamente injusto.

III) El Artículo Tercero del mencionado decreto no conlleva efectos de tipo confiscatorio ni es incostitucional en razón de que esta basado en el artículo 10 de la Ley de Reforma Agraria, en el artículo 57 del Codigo Civil y el Numeral 10° del Artículo 136 de la Constitución Nacional. Por todas las razones indicadas consideramos que el Decreto 192 de la Presidencia de la República, no adolece de las fallas que se -

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

le han imputado, siendo conforme con los preceptos de la Constitución y de la Ley.

Caracas, 10 de mayo de 1965.

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

(5) 7

CONSIDERACIONES SOBRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Desde el inicio del régimen democrático, el partidos Social Cristiano estructuró el M.A.C. con una planificación filosófica de gran alcance; uno de los pilares más fuertes de esta estructura - son los Centros de Formación de Profesionales del Agro empezando, por las Escuelas de Demostradoras del Hogar Campesino, Prácticos - Cacaoteros, Cafeteros, etc. y finalmente por las Escuelas de Peritos de Agropecuarios.

Todos estos Centros, financiados y dirigidos por el MAC, tienen un personal docente de formación Social Cristiana con direc trices específicas para que la enseñanza técnica sea acompañada con el adoctrinamiento filosófico del partido.

Expresando en números lo expuesto, ténemos que han egresado de los diferentes Centros de formación desde el año 1960 hasta el año 1963 inclusive, 97 Prácticos Cafeteros, 144 Prácticos Cacaoteros, 136 Tractoristas, 685 Demostradora del Hogar Campesino y 742 Peritos Agropecuarios, estimándose que a partir del año 64 se triplique la cantidad de egresados; todos estos profesionales están desarrollando sus actividades en el campo por servicios que prestan en el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA, INSTITUTO AGRARIO NACIONAL, BANCO AGRICOLA Y PECUARIO Y CONSEJO DE BIENESTAR RURAL, en trabajos de extensión Agrícola, Créditos Supervisados, Dotación de tierras, etc., interviniendo activamente en la solución de los problemas socio-económicos de las comunidades donde desarrollan sus actividades y todo esto en función de la doctrina a la que pertenecen, que en un alto prcentaje es Social Cristiana, de donde se concluye que en los próximos diez años, el partido Social Cristiano tendrá en la población rural una base militante superior a la nuestra.

Esta es una de las razones por las que el Despacho de Agricultura y Cría eje principal en la transformación de nuestro medio rural no debe estar bajo el control del partido Social Cristiano.

Gonzalo Gómez Cermeño

DOCUMENTO DE TRABAJO -CONFIDENCIAL

A S P E C T O S L E G A L E S

FUNDAMENTOS DEL DECRETO.

Art. 136, Numeral 10°

Entre las facultades de que hace uso el Sr. Presidente de la República, para fundamentar el Decreto N° 192 de 3 de noviembre de 1964, publicado en la Gaceta Oficial N° 27.585 del 5 del mismo mes y año y corregido y publicado nuevamente en la Gaceta Oficial N° 27.591 del 12 de los corrientes, se menciona en primer término, el Art. 136 Numeral 10 de la Constitución Nacional vigente promulgada el 23 de enero de 1961.

El mencionado dispositivo dice textualmente:

"Artículo 136.- Es de la competencia del Poder Nacional:

10°.- El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, salinas, tierras baldías y ostrales de perlas; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas naturales del país.

El Ejecutivo Nacional podrá, en conformidad con la Ley, vender, arrendar o dar en adjudicación gratuita los terrenos baldíos; pero no podrá enajenar las salinas, ni otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido.

La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este ordinal, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados. En todo caso, dichas asignaciones estarán sujetas a las normas de coordinación previstas en el artículo 229 de esta Constitución.

Los baldíos existentes en las islas marítimas, fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no envuelva, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra."

Como claramente aparece en el texto transcrito, el Ejecutivo Nacional podrá en conformidad con la Ley, vender, arrendar o dar en adjudicación gratuita los terrenos baldíos . . .

Está claro que la Ley a la cual ha de conformarse el Ejecutivo para llevar a efecto la venta, arrendamiento o adjudicación gratuita, es la ley de Tierras Baldías y Ejidos que es la que señala la pauta a seguir en estos casos.

Por su parte la Ley de Reforma Agraria, promulgada el 5 de marzo de 1960 en el Campo de Carabobo, establece lo siguiente:

"Artículo 10.- Las tierras de las Entidades Públicas quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria; a estos efectos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales, se consideran como tales:

a) Las tierras baldías;
b) Los fundos rústicos del dominio privado de la Nación;
c) Los fundos rústicos pertenecientes a los Institutos Autónomos Nacionales;
d) Los inmuebles rurales que pasen al patrimonio nacional, en razón y como consecuencia de enriquecimientos ilícitos contra la cosa pública".

"Artículo 15.- No podrán enajenarse, gravarse ni arrendarse las tierras afectadas a la Reforma Agraria a que se contrae este Capítulo, a menos que el Ejecutivo Nacional lo autorice por ser necesarias para otros fines de utilidad pública o social".

"Artículo 16.- En relación con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, la autoridad competente no dará curso a nuevas solicitudes de arrendamiento de baldíos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80 y siempre que no interfiera un proceso de dotación, quien acredite debidamente ante el Instituto Agrario Nacional haber ocupado pacíficamente tierras baldías por más de un año antes de la promulgación de esta Ley, tendrá derecho a que se le adjudiquen en propiedad dichas tierras, en la extensión y límites que se señalan en el artículo 29, en la parte que efectivamente tenga en explotación conforme al principio de la función social y de las condiciones que esta misma Ley establece.

Asimismo, no surtirá los efectos que la Ley de Tierras Baldías y Ejidos atribuye en favor del ocupante de tierras baldías para el arrendamiento y compra de esta clase de terrenos, la ocupación sobre extensiones que exceda de los límites que esta misma Ley señala".

De la lectura de la disposición constitucional y de la de la Ley de Reforma Agraria anteriormente transcritas, aparece evidentemente su falta de correspondencia, porque la Carta Fundamental, que es posterior a la Ley, concede la facultad de venta, arrendamiento y adjudicación gratuita de baldíos y la Ley de Reforma Agraria, por el contrario, las afecta totalmente para sus fines y propósitos (Art.16) prohibiendo la enajenación, gravamen y arrendamiento de las tierras afectadas, salvo para otros fines de utilidad pública o social (Art. 15) y expresamente manda no dar curso a nuevas solicitudes de arrendamiento de baldíos (Art. 16).

En tal virtud este artículo 136 Nº 10, lejos de servir de apoyo al Decreto no está advirtiendo de una seria colisión existente entre el texto constitucional y el articulado de la Ley de

Reforma Agraria que hemos transcrito, pues no estipulándose en la Constitución que las tierras baldías quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria, sino que se puede disponer de ellas mediante venta, arrendamiento o adjudicación gratuita y ante este conflicto debe ceder necesariamente la Ley.

El Artículo 18 de la Ley de Reforma Agraria.

Se fundamenta el Decreto 192, en segundo término, en el Art. 18 de la Ley de Reforma Agraria, que dice así:

"Art. 18.- Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo pertenecientes o administrados por la Nación, serán transferidos gratuitamente al Instituto Agrario Nacional por el Ejecutivo Nacional, quién queda especialmente autorizado al efecto, no siendo necesaria la autorización del Congreso Nacional u otro órgano del Poder Público para realizar dicha transferencia.

Previos los correspondientes convenios, se dará igual destinación a los bienes rurales económicamente explotables de las demás Entidades y establecimientos públicos."

Como bien acabamos de ver, la Suprema Ley de la República no establece la afectación de los inmuebles administrados por la Nación, como son los baldíos, para fines de la Reforma Agraria y por tanto este artículo aparece también en desarmonía con la Constitución, al disponer su transferencia al Instituto Agrario Nacional y más aún, gratuitamente.

La adjudicación gratuita de baldíos a que se refiere el ordinal 10 del Art. 136 de la Constitución Nacional, es como ya se ha visto, una de las tres formas de aplicación de estos bienes, consagradas en el Art. 16 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, que prevé en su Art. 78 y siguientes, el derecho de todo venezolano, sin distinción de sexo, mayor de 18 años, a que se le adjudique, gratuitamente, un lote de terrenos baldíos, para constituir en él, un fundo rural, agrícola o pecuario. Sería una interpretación acomodaticia asimilar la adjudicación gratuita de baldíos prevista en la Constitución, y que está sujeta al cumplimiento por cada interesado de determinados requisitos para su concesión, con la "transferencia gratuita" de dichos bienes a un Ente de Derecho Público, de que trata el Art. 18 de la Ley de Reforma Agraria. Por lo tanto, estimamos que este artículo

Reforma Agraria que hemos transcrito, pues no estipulándose en la Constitución que las tierras baldías quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria, sino que se puede disponer de ellas mediante venta, arrendamiento o adjudicación gratuita y ante este conflicto debe ceder necesariamente la Ley.

El Artículo 18 de la Ley de Reforma Agraria.

Se fundamenta el Decreto 192, en segundo término, en el Art. 18 de la Ley de Reforma Agraria, que dice así:

"Art. 18.- Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo pertenecientes o administrados por la Nación, serán transferidos gratuitamente al Instituto Agrario Nacional por el Ejecutivo Nacional, quién queda especialmente autorizado al efecto, no siendo necesaria la autorización del Congreso Nacional u otro órgano del Poder Público para realizar dicha transferencia.

Previos los correspondientes convenios, se dará igual destinación a los bienes rurales económicamente explotables de las demás Entidades y establecimientos públicos."

Como bien acabamos de ver, la Suprema Ley de la República no establece la afectación de los inmuebles administrados por la Nación, como son los baldíos, para fines de la Reforma Agraria y por tanto este artículo aparece también en desarmonía con la Constitución, al disponer su transferencia al Instituto Agrario Nacional y más aún, gratuitamente.

La adjudicación gratuita de baldíos a que se refiere el ordinal 10 del Art. 136 de la Constitución Nacional, es como ya se ha visto, una de las tres formas de aplicación de estos bienes, consagradas en el Art. 16 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, que prevé en su Art. 78 y siguientes, el derecho de todo venezolano, sin distinción de sexo, mayor de 18 años, a que se le adjudique, gratuitamente, un lote de terrenos baldíos, para constituir en él, un fundo rural, agrícola o pecuario. Sería una interpretación acomodaticia asimilar la adjudicación gratuita de baldíos prevista en la Constitución, y que está sujeta al cumplimiento por cada interesado de determinados requisitos para su concesión, con la "transferencia gratuita" de dichos bienes a un Ente de Derecho Público, de que trata el Art. 18 de la Ley de Reforma Agraria. Por lo tanto, estimamos que este artículo

por enfrentarse a la Constitución, dando un destino diferente a los baldíos -el Patrimonio del IAN- lo que es contrario a la Ley de Tierras Baldías que pauta las modalidades de aplicación de dichos bienes, carece de validez y, por ende, está sirviendo de falso apoyo al Decreto N° 192.

El Artículo 181 de la Ley de Reforma Agraria.

Dice esta disposición a la letra:

"Artículo 181.- Las tierras beneficiadas por las obras de riego que construya el Estado u otras entidades públicas, se destinarán a los fines de la Reforma Agraria y del desarrollo agrícola. Y dentro de un criterio profesional de la parcela familiar y la cooperativa agrícola se armonizará adecuadamente la distribución de las parcelas, a fin de lograr un eficiente aprovechamiento de los recursos habilitados por ellas, conforme al interés de la producción nacional.

Se harán todas las reservas necesarias para la instalación de campos experimentales, plantas industriales, almacenes, escuelas, oficinas, poblados y demás obras de beneficio común".

Una simple lectura del Art. 1 del Decreto 192, nos revela que allí están comprendidas no solo "tierras beneficiadas por obras de riego" sino por vías de comunicación, por lo cual más aún tiende su armonía con la Constitución, solo serviría de parcial soporte al precipitado Decreto N° 192.

El apresuramiento o un descuido injustificable en la discusión de la Constitución, no permitió a los Congresantes armonizar ambos estatutos y se les pasó por alto, haber consignado en la Carta Fundamental el que las propiedades públicas y concretamente las baldías, se afectaban a los fines de la Reforma Agraria adecuando el Art. 136, N° 10, en el sentido de facultar al Ejecutivo Nacional para que en conformidad con la Ley de Reforma Agraria tranfiriera gratuitamente los baldíos requeridos por el IAN para sus fines y propósitos.

Son tan resaltantes las razones que demuestran la inconstitucionalidad denunciada que no valdría la pena insistir en ello; pero en aras de un mejor esclarecimiento de la cuestión, veamos rapidamente cual fué la situación que rigió bajo el imperio de las leyes agrarias anteriores y lo que en su caso dispu-

sieron las Constituciones para esa época vigente:

La Ley Agraria de 1945 y el Estatuto Agrario de 1949 estipularon en sus Artículos 22, N° 5 y 23 N° 5, respectivamente, que el patrimonio del Instituto Agrario estará constituído por los terrenos baldíos que le fueren atribuidos por el Ejecutivo Federal de acuerdo con la Ley respectiva y por los inmuebles de propiedad de la Nación, de los Estados o de las Municipalidades que le sean transmitidos en virtud de disposiciones legales nacionales, estadales o municipales; la Ley Agraria de 1948 estipulaba por su parte, en el Art. 58, N° 4, que el patrimonio del Instituto podría acrecerse con los terrenos baldíos y bienes nacionales que le sean transferidos por el Ejecutivo Nacional a solicitud del Instituto y por los inmuebles de propiedad de los Estados o de las Municipalidades, que le sean transferidos en virtud de disposiciones legales estatales o municipales.

Las Constituciones de 1945, 1947 y 1953 regularon la materia en la siguiente forma:

1945 - Art. 15, N° 18

1947 - Art. 138, N° 12

1953 - Art. 60, N° 17.

Como bien se advierte, en las tres se acoge la facultad del Ejecutivo de arrendar y vender tierras baldías y además en las de 1945 y 1947 se consagra la adjudicación gratuita de tierras baldías, otorgándose siempre un derecho de preferencia en favor del ocupante.

Si en las Leyes de Reforma Agraria de 1945, 1948 y 1949 no se congelaban a priori los baldíos, no había necesidad de prever tal situación en la Constitución; en cambio, en la de 1961, si era preciso establecer claramente el destino de dichos terrenos, limitando la facultad del Ejecutivo en la materia, extremo que no se cumple con lo estatuído en el Art. 138, N° 10, en esencia igual a los que ya hemos transcrito de las Consti-

tuciones anteriores, que sí permiten el arrendamiento, venta y adjudicación gratuita de tierras baldías

En conclusión estimamos:

1° - Que el Decreto N° 192 carece de sustentación legal válida, porque el Art. 136 Numeral 10 de la Constitución, ni ninguna otra disposición de nuestra Carta Fundamental, en manera alguna consagra la afectación de tierras baldías a los fines de la Reforma Agraria, ni consiente ni dispone que el sujeto de la adjudicación gratuita de la totalidad de las mismas sea el Instituto Agrario Nacional, sino que muy al contrario, prevé la venta y arrendamiento y además su adjudicación gratuita a los venezolanos que cumplan determinados requisitos establecidos en la Ley de Tierras Baldías y Ejidos.

2° - Que los Artículos 10, 15, 16 y 18 colidan francamente con lo dispuesto en el Art. 136, ordinal 10 de la Constitución, por lo cual están afectados de inconstitucionalidad.

3° - Que el Art. 181 de la Ley de Reforma Agraria, aún admitiendo su constitucionalidad, ampara solo parcialmente el Decreto, pues en el mismo se comprenden baldíos beneficiados con obras de vialidad, que no están comprendidas en la disposición señalada.

APLICABILIDAD DEL DECRETO

Juzgamos que el referido Decreto no tendrá aplicación inmediata, pues los bienes inmuebles objeto de la transferencia no aparecen suficientemente identificados en el cuerpo del mismo, circunstancia que impedirá al Señor Procurador de la República dar cumplimiento a lo que se estatuye en su Art. 2.

En el numeroso grupo de Decretos de igual índole que hemos tenido a la vista se puede observar que el inmueble transferido aparece demarcado en el cuerpo del mismo por ser éste un imprescindible requisito para extender la documentación y protocolizar el instrumento respectivo; tanto es así que un error en un lindero ha determinado una nueva publicación en la Gaceta Oficial, como sucedió con los Decretos 1100 de 3 de septiembre de 1963 y 1103 de la misma fecha, anulados por Decretos N° 27 y N° 28 de 28 de abril del año en curso, mediante los cuales se hacían transferencias al IAN.

Estimamos que la falta de identificación de los bienes debe atribuirse a carencia de los datos necesarios para verificarla, con lo cual el Decreto falla por la falta de precisión en el objeto transferido.

A lo anteriormente se agrega que las operaciones catastrales, en su aspecto económico, no se han llevado a cabo, por lo menos en su mayor parte, lo que dificultará en los casos concretos fijar las extensiones a que se refiere el Art. 29 de la Ley y las equivalencias a que seguramente dará lugar.

El Art. 3° del Decreto.

El Artículo 3° del Decreto dice:

"Artículo 3°.- Afectadas como están todas las tierras baldías por la Ley de Reforma Agraria, nadie podrá reclamar el pago de bienhechurías efectuadas en esas tierras con posterioridad al 5 de marzo de 1959, cuando las extensiones ocupadas excedan de los límites establecidos por el artículo 29 de dicha ley.

Concept amos que esa disposición consigna un caso típico de enriquecimiento sin causa y es a los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde considerar y resolver el caso.

INFORME QUE PRESENTA EL MINISTRO OSORIO DEL RESULTADO DE LAS CONVERSACIONES SOSTENIDAS CON EL GOBIERNO COLOMBIANO, CON MOTIVO DE SU VISITA A COLOMBIA, PARA ASISTIR A LA TOMA DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA CITADA REPUBLICA.

Con motivo de mi visita a la hermana República de Colombia, para asistir a la toma de posesión del Presidente electo de ese país, Dr. Lleras Restrepo, aproveché la oportunidad de tratar con el Ministro de Agricultura de esa nación, Dr. Armando Samper, así como con otras personalidades, diversos aspectos y problemas de interés común, cuyos resultados me permito informar, suscintamente, a continuación:

A.- Acción Conjunta de Colombia y Venezuela en Organismos y Conferencias Agrícolas Internacionales.

I.-Organización Bolivariana de Sanidad Agropecuaria. (O.B.S.A.)

En relación a la creación de la O.B.S.A., se ratificó el reconocimiento de los Ministros de Agricultura de ambos países, acerca de la necesidad de disponer de un organismo regional de la naturaleza de la mencionada Organización, como medio de coordinación de la acción conjunta de los países bolivarianos, en beneficio de una estructuración más eficaz de los servicios de Sanidad Animal y Vegetal, lo -

cual es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de nuestras economías agropecuarias.

En consecuencia, el Ministro Samper se comprometió a solicitar la ratificación respectiva del Congreso de su país, aprovechando la circunstancia de que se encuentra reunido en los actuales momentos.

Venezuela, por su parte, prometió tomar todas las medidas del caso, a fin de lograr la ratificación de nuestro Congreso Nacional en sus próximas sesiones ordinarias a iniciarse en el mes de octubre.

En esta forma se espera materializar la iniciativa de la creación de la referida Organización, durante el presente año.

A pesar de que el punto referente a la sede de dicha Organización no fué tratado formalmente, se considera aconsejable de que sea en Bogotá, debido a su conveniente ubicación en relación a los países bolivarianos.

II. - Instituto Latinoamericano de Mercadeo Agrícola (ILMA).

En este aspecto, Venezuela puso de manifiesto ante el Ministro Samper y el Director del ILMA, la limitada acción y alcance que desde su creación hasta el presente ha tenido el referido Instituto, has-

ta el punto de convertirse en la práctica en un instituto más bien colombiano que latinoamericano.

En vista de ello, y, previo el reconocimiento de esta realidad por parte de las autoridades colombianas, se llegaron a las conclusiones y recomendaciones siguientes:

1) que Venezuela, que es el único país, con excepción de Colombia, que contribuye al sostenimiento de dicho - Instituto con una asignación anual de $ 10.000, esté debidamente representada en la dirección y orientación - general de la política de acción del ILMA, a través de un representante del Gobierno venezolano en el Consejo Consultivo, que es el órgano de máxima autoridad del Instituto.

2) que Venezuela perciba un mayor beneficio del ILMA, bajo la forma de capacitación de su personal y asesoramiento en investigación de los problemas de mercadeo agrícola, a fin de utilizar los servicios de esa institución en proporción a nuestro aporte financiero para su mantenimiento.

3) que Venezuela asuma el liderato en la acción a tomar para interesar a los demás países latinoamericanos en la utilización de los servicios del ILMA, en atención a la necesi-

dad de darle un verdadero significado y alcance regional a ese organismo, así como, a la conveniencia de - poner a la disposición de los señalados países un instrumento de capacitación e investigación en el campo del mercadeo agrícola, con lo cual se logrará su contribución financiera para el sostenimiento del mismo. Es decir, la acción de Venezuela estará conducida a rehabilitar y rescatar el ILMA, en función de los objetivos originales que dieron lugar a su creación y - aprobación previa por la Conferencia Regional de la FAO. de Río de Janeiro en 1962.

4) que un Experto del ILMA se traslade a Caracas, con miras a organizar un Curso en Mercadeo Agrícola a dictarse en esta ciudad, para funcionarios del MAC, I.A.N. y B.A.P.

A este respecto, será privilegio del MAC, orientar la realización de dicho Curso en función de las necesidades más urgentes de capacitación profesional de nuestro país en el citado campo, así como, garantizar el nivel técnico satisfactorio de los Profesores a cuyo cargo estará el mencionado curso.

5) que Venezuela colabore activamente para el mayor éxito de la Conferencia sobre Mercadeo, a realizarse en Bogotá en el mes de octubre próximo, en la cual se tratará, entre otros asuntos, el problema relacionado con el ILMA.

III. Oficina de la FAO para la Zona del Caribe.

En la actualidad, los países del Caribe son atendidos por la FAO a través de sus Oficinas en Méjico, Río de Janeiro y Santiago de Chile, lo cual presenta inconvenientes desde el punto de vista de la distancia, de las condiciones tropicales características de esta Zona, etc. En consecuencia, se ha desarrollado la iniciativa de crear una Oficina de la FAO en esta sub-región, la cual comprendería los países siguientes: Colombia, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad, Tobago y Venezuela, con sede en este último. En lo que respecta a Cuba, se acordó que dicho país pudiera continuar anexado a la Oficina Regional de la FAO en Méjico.

A este respecto el Gobierno colombiano se comprometió a desarrollar la iniciativa del caso para que Venezuela sea escogida como país sede de dicha Oficina, a cuyo efecto, hará los contactos de to-

da naturaleza con los demás países de la Zona que son presuntos miembros integrantes de la citada Oficina.

Esta iniciativa preliminar tan valiosa por parte de Colombia, persigue el propósito de preparar el ambiente para una solución afirmativa del problema en cuestión, en la IX Conferencia Regional de la FAO a celebrarse en Punta del Este del 5 al 17 de diciembre del corriente año.

IV. - Secretaría Permanente de los Seminarios Panamericanos de Semilla.

Durante la celebración del V Seminario Panamericano de Semillas que tuvo lugar en Maracay en el mes de Junio último, se acordó en Asamblea Plenaria la creación de una Secretaría General Permanente, la cual deberá estar adscrita y financiada por los Estados Americanos a través de un organismo internacional ligado a la agricultura, que en principio podría ser la FAO o el IICA.

A este respecto, convinieron los Ministros de Agricultura de ambos países, poner a funcionar la mencionada Secretaría en Maracay, con recursos monetarios venezolanos, en lo que resta del presente año, los cuales serán de poca cuantía.

Por otra parte, se dispuso someter a la consideración de la IX Conferencia Regional de la FAO, el proyecto de creación de la se-

ñalada Secretaría bajo los auspicios de la FAO y con el concurso de su aporte financiero. En caso de que el citado Organismo emita su voto negativo a esa proposición, se hará la solicitud correspondiente ante la Junta Directiva del IICA, a fin de que incluya dentro de su presupuesto regular la mencionada Secretaría.

Ambos Ministros estuvimos de acuerdo en considerar que el apoyo de IICA es definitivo y por lo tanto de lo que se trataría es de darle la primera opción a la FAO. Por lo que respecta a la sede, Venezuela acreditaría su ventaja si ya la tiene funcionando en lo que falta del presente año.

V.- Problema de la Aftosa de acuerdo a la información suministrada por el Ministro de Agricultura de El Salvador al Dr. Osorio.

El Dr. René David Escalante, Ministro de Agricultura de El Salvador, en reciente visita efectuada a Caracas, comunicó al Ministro de Agricultura venezolano que en la XIV reunión que acaba de celebrarse en la ciudad de San Salvador en la última semana de Julio del corriente año, con la asistencia de los señores Ministros de Agricultura de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, faltando solamente el Ministro de Agricultura de Panamá quien se hizo representar debidamente, causó gran preocupación entre todos ellos la repoblación del Chocó en la República de Colombia que hasta ahora el Gobierno de ese pais había considerado conveniente mantener sin población pecuaria de acuerdo a múltiples convenios y acuerdos especiales. Es el caso, que actualmente por razones internas, Colombia desarrollará un Programa Agrario y contempla poblar esa zona, por

lo que se teme que la aftosa existente en ese país se extienda a Centro América, una zona libre de esa enfermedad. En consecuencia, numerosos sectores vinculados con la actividad pecuaria en los países indicados, ofrecieron su disposición de cooperar activamente con Colombia, en la forma que se decidiera en el futuro, en el sentido de estudiar los medios de erradicación de dicha enfermedad.-

Sobre este punto, acordaron los dos Ministros de Agricultura, que será de mayor eficacia una acción coordinada entre OBSA (Organización Bolivariana de Sanidad Agropecuaria) y OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, con jurisdicción sobre México, Centro América y Panamá), en base a un programa conjunto que sobre el particular desarrollarán y en el cual el Ministro René David Escalante, como Presidente de OIRSA, podría interesar a E.E.U.U.

B.- Integración Agropecuaria de Colombia y Venezuela

1.- Regularización del Comercio de Ganado Colombo-Venezolano y Utilización de Mataderos Industriales en Venezuela

Se puso en evidencia la entrada de ganado colombiano a Venezuela, cuyo volúmen fué estimado por ese país en 300.000 cabezas al año. Este tráfico representa ingresos de divisas para la hermana República de Colombia, de no menos 30 millones de doláres, pero a su mercado de divisas no controladas, como, desde luego quiere evitarlo el Gobierno del vecino país.-

En lo que respecta a Venezuela, este comercio cubre la tercera parte de nuestro abastecimiento de carne. En consecuencia determina precios estables y bajos para este producto como los que rigen en el país.-

De regularizarse este comercio podrían establecerse controles por el Gobierno de Venezuela en materia sanitaria, que nos protejan de la aftosa y además podrían producirse ingresos fiscales, que no serían menores de 15 millones, a las tarifas aduaneras vigentes.-

Conozco la resistencia a la regularización de este comercio por parte de los ganaderos de este país y por eso las medidas en tal sentido no pueden ser tomadas sin antes crear un ambiente favorable de opinión pública. Por ello sin embargo es necesario disponer de informaciones fidedignas sobre la magnitud de este comercio y su incidencia en los precios de la carne en Colombia y en Venezuela. En razón de todo esto se ha decidido constituir un equipo de trabajo integrado por funcionarios de las dos Naciones.-

Por otra parte debe hacerse un estudio de las obligaciones que comporta para Venezuela el Tratado de Montevideo y su ingreso a la ALALC. La regularización de este tráfico es muy importante tratarlo de una vez, ya que las concesiones aduaneras que tal Tratado implica se aplicarán más prontamente entre los países fronterizos.-

El referido equipo hará el estudio del problema en su aspecto integral y presentará los resultados de dicho estudio, con sus recomendaciones concretas a la consideración de los dos Ministros, a fin de que dispongan de elementos de juicio suficientes y amplios, que les sirvan de base para orientar su política de acción, tendiente a la solución del señalado problema.-

2.- Cuencas Hidrográficas Comunes

El Gobierno de Venezuela ha invertido aproximadamente 100 mi-

llones de bolívares en la construcción del Dique Orope - Valderrama de 75 kilómetros de longitud, para controlar las inundaciones causadas por el río Zulia. Con esta obra, primera etapa del Desarrollo del área Sur del Lago de Maracaibo, se rescatan de las inundaciones de este río, unas 100.000. Has. para ser aprovechadas en su totalidad para la agricultura.-

En una segunda etapa se construirán diques para contener inundaciones similares de los ríos Catatumbo, Escalante y Chama y poner en uso total en la región cerca de 500.000 hectáreas, ideales en su mayoría para el cultivo de pastos y forrajes y como consecuencia un desarrollo fuerte de la ganadería de leche y carne.-

Como los ríos Zulia y Catatumbo tienen su nacimiento en territorio Colombiano, por donde recorren un largo trayecto, es imprescindible la adecuada conservación de los recursos naturales que influyen en las cuencas de esos ríos para la conservación de los mismos.-

Como consecuencia se convino en constituir un equipo de trabajo integrado por sendos funcionarios representantes de Venezuela y Colombia para que estudien proyectos concretos orientados a un desarrollo integral de las cuencas respectivas.-

3. Investigación Agrícola.

Los dos países, están haciendo esfuerzos en Investigaciones Agrícolas, sin coordinación efectiva. En dicho programa están aportando considerables recursos financieros cada uno de ellos, dedicando a ello un considerable e importante sector de sus técnicos agrícolas. La falta de coordinación en esta materia entre Colombia y Venezuela seguramente implicará duplicaciones, experiencias repetidas y falta de asistencia recíproca. Para evitar todos estos problemas se convino entre los dos Ministros crear un vínculo estrecho entre el Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA) representado en la persona de su Presidente Fernando Peñaranda, y la Dirección de Investigaciones del M.A.C., representada por su Director George Casas Briceño.

A tal efecto, se dispuso un amplio intercambio de informaciones acerca de los trabajos que se están realizando en materia de Investigación Agrícola en ambos países y los que se proyectan efectuar en el futuro.

A tal finalidad, el Dr. Peñaranda visitará Venezuela y el Dr. Casas Briceño irá para Colombia, después de lo cual estarán dichos funcionarios en capacidad de estructurar un programa conjunto de integración de la investigación agrícola en los dos países.

4. Importación de Caña de Azúcar de Colombia con destino al Central Ureña.

En vista de la existencia de un contrato celebrado en Cúcuta en 1964 entre la Compañía de Cañicultores del Norte de San -

tander y el Central Ureña, en virtud del cual la caña de azúcar colombiana es procesada en el nombrado Central, existe el temor y el peligro de que Venezuela no considere conveniente renovar dicho contrato a su terminación en 1.967.

En consecuencia, se resolvió constituir un equipo integrado por el Dr. José Mejías en representación del Gobierno colombiano y otro funcionario venezolano, que tentativamente puede ser el Dr. Felipe Gómez Alvarez, a fin de que estudien con la debida antelación y premura el problema de la importación de esta materia prima para el Central Ureña, con el objeto de orientar la acción a tomar por Venezuela al término del vencimiento del referido contrato en 1.967, para evitar decisiones insensatas.

5. - Importación de Caraotas Negras.

Tomando en consideración que Venezuela importa caraotas negras, importación que ascendió en 1.965 a 18.000 toneladas métricas, de las cuales una parte procede de Colombia, se expresó la firme disposición de ese país de desarrollar un programa de siembras que comprenda la producción de 5.000 toneladas con destino a nuestro país, siempre que se garantice la compra de la referida cantidad.

En vista de que las únicas limitaciones establecidas por el Gobierno venezolano para la importación del referido grano, son el cumplimiento del contingentamiento en la proporción de 1 a 6 y el sometimiento al régimen de licencia previa, se dispuso lo siguiente:

a) Otorgar licencias para la importación de 5.000 toneladas de caraotas negras de Colombia, en las mismas condiciones en cuanto a calidad y precios que se obtienen en el mercado internacional.

b) Auspiciar la celebración del contrato correspondiente entre los importadores venezolanos, y la Compañía Nacional Exportadora Colombiana, representada por el Dr. Ortiz.

c) Arreglar el viaje del nombrado Dr. Ortiz a Venezuela, a fin de formalizar los contratos correspondientes.

6. Exportación de Cacao con destino a Colombia.

Tomando en cuenta el hecho de que Colombia es un gran importador de cacao y que Venezuela es exportador de este producto y dado que la importación que hace Colombia iguala a la producción venezolana, se reconoció la conveniencia de hacer un estudio sobre el comercio exterior de este fruto en ambos países, a los fines de determinar precios y cantidades que pudieran negociarse en el futuro entre Colombia y Venezuela y se convino en que el MAC, en Venezuela, integre un equipo formado por sendos funcionarios de las Direcciones de Planificación Sectorial y Extensión, el cual establecería las bases que podrían servir para tomar decisiones.

7. Viaje del Dr. José Mejías a Venezuela

El Dr. José Mejías, ex- Ministro de Agricultura de Colombia, será designado en breve por el Gobierno de Colombia, Jefe Colombiano del Sector Agropecuario de Integración, y como tal, ejercerá la representación del Ministro Samper, de acuerdo a los lineamientos estructurados para el modus operandi de la integración aludida en el presente Informe.

Se ha proyectado un viaje del Dr. Mejías a Venezuela, donde permanecerá dos semanas aproximadamente, con el objeto de conocer personalmente la situación de la agricultura venezolana .

Se acordó que Venezuela, igualmente, designaría el Jefe Venezolano del Sector Agropecuario de Integración, quien representaría al Gobierno de nuestro país, a fin de que, junto con el de Colombia, constituyan una Comisión de Integración Agrícola, conforme al esquema de organización administrativa que se acompaña y el cual servirá de marco institucional para la realización de los viejos anhelos bolivarianos de integración de los dos países, como prueba elocuente de la sinceridad de los Presidentes en sus afanes de complementación económica colombo - venezolana.-

Caracas, 11 de agosto de 1966

Alejandro M. Osorio
Ministro de Agricultura y Cría

BARCO
HURTADO

SAMPER ⟶ MEJIA
OSORIO ⟶ MENDOZA



BARCO
HURTADO



SAMPER ⟶ MEJIA
OSORIO ⟶ MENDOZA

BARCO
HURTADO



INFORME PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ASUNTO: Análisis de un informe sobre personal del M.A.C.

El informe en cuestión fue solicitado por mí al poco tiempo de estar en el M.A.C. y de acuerdo con el Ministro Osorio. Fue entregado sinembargo a algunos dirigentes del Partido, el mismo día en que me fue entregado a mí y sin haber sido revisado por éllo, los datos que contiene no son todos exactos.-

No obstante, el asunto de fondo planteado sigue siendo correcto y aún cuando la situación ha variado desde entonces, cuando la participación de A.D. en el personal del Ministerio en Caracas era de 54 en 662 empleados, hasta ahora cuando esa participación se ha elevado a 70, la proporción sigue siendo mínima.

En un análisis Dirección por Dirección, tal como fue presentado el informe, trato de enfocar en forma objetiva la situación real y correspondiendo a los deseos del Señor Presidente hago algunas observaciones y recomendaciones.-

1) DESPACHO DEL MINISTRO Y SERVICIOS CENTRALES

Trabajan aquí, 22 personas incluyendo al Ministro.

Del total solo son miembros de A.D., el enlace con la FCV, J.J. López y el asesor a medio tiempo Gonzálo Vivas.

Como asesores actúan tambien los economistas César Salazar Cuervo y Rodolfo Rivero sin militancia partidista y el veterinario Diego Heredia de URD.-

Los Ingº Agrº Antonio José Villegas y Alonso Calatrava y la economista Pola de Ortiz, todos posiblemente de tendencias copeyanas, pero muy eficientes y capaces profesionales, que a mi juicio desempeñan correcta y honestamente las funciones de sus cargos.

Desempeñando cargo de importancia está tambien el Ingº.Agrº. Carlos Solorzano , quien maneja la Oficina de Desarrollo de los Sistemas de Riego y que siendo de tendencias copeyanas o inscrito en Copey, a mi juicio cumple labor proselitista en sus frecuentes viajes al interior.-Este cargo podría estar desempeñado por un Ingº Agrº. de AD, que podría ser Jorge Hack o Emiro Gómez o por un independiente amigo.-

Para desempeñar el cargo de Director de Secretaría (secretario privado), actualmente acefalo, el Ministro ha pedido un hombre a AD y posiblemente será nombrado el Dr. Ciro Mujica.-

Debo decir por último, que para el momento de recibir el Ministerio el Dr. Osorio figuraban 19 profesionales con categoría de asesores, comisionados. comisionados especiales, etc. con un gasto mensual en sueldos de más de Bs 100.000.00.-

2) DIRECCION GENERAL

Esta Dirección tiene un total de 70 empleados incluyendo al Director.Del total, solo 11 son de A.D...-

Los cargos de importancia aquí son: a)El Jefe de la División de Servicios Generales, actualmente desempeñado por Miguel Betancourt y Galíndez (no es de URD), quien podría cambiarse a otra posición para nombrar allí un hombre de A.D., b) El Jefe de los Servicios de Radiocomunicaciones que es de A.D., c) El Jefe de la Oficina de Relaciones Publicas, Antonio Ermini Imeri, hombre de confianza del Ministro y cuyo adjunto es Pablo Carreño de A.D. y c) El Adjunto a la División de Servicios Generales, Rafael Cisneros,que es una especie de "toero" a la orden del Ministro.-

En esta Dirección deben haber no menos de 30 personas de AB.-

3) DIRECCION DE PERSONAL

33 cargos en total, de los cuales 10 son de A.D. y 2 pro AD., todos en muy buena posición . El Director es sinembargo el Dr. A-

nastacio Cárdenas Zurita, hombre aparentemente del F.N.D. y aparentemente tambien con compromisos con dirigentes de A.D.-

No puedo decir realmente que actúa en forma desleal, pero existen reservas para con él por parte de la gente de A.D. que origina situaciones incómodas.-

En todo caso, quien administra personal es prácticamente el Ministro y aún cuando el objetivo de lograr reducciones y economías en esta materia es bueno (el año 66 se redujeron los gastos por este concepto en más de 5 millones y este año tambien se registra una reducción importante), no se cubren en momento oportuno los cargos justificados, lo que a mi juicio retarda los programas y limita la acción del M.A.C., creando situaciones de inseguridad y de frustración en muchos casos.-Hemos discutido esta situación varias veces con el Ministro, haciendo observaciones claras sobre el procedimiento aún cuando conviniendo en las premisas,pero no logramos convencerlo.-

4) DIRECCION DE PLANIFICACION SECTORIAL

Un total de 74 personas trabajan en esta Dirección en la cual existen las Divisiones de Economía Agrícola,de Presupuesto y Organización, de Política Agrícola y de Estadística.-Entre su personal hay 25 Economistas, 8 Ingº.Agrº,algunos Sociólogos y Perítos Agropecuarios . Del total solo 2 (Economistas) son de AD y el Director, que por sus ejecutorias,creo que hemos logrado canalizarlo hacia nosotros.-Del resto de personal en posición de importancia, el único que descuella como militante de Copei es el Dr. Arnaldo Rón Pedrique, buen técnico por lo demás: pero es indudable que entre los que quedan hay buen número de gente no amiga.Siendo esta una Dirección tan importante, estimo que debía seleccionarse un grupo de Economistas capaces para cubrir siquiera el 50 % de los cargos.

5) OFICINA DE SUPERVISION Y ANALISIS FISCAL

Tiene un total de 38 empleados, de los cuales 2 solo son de A.D..-Su Director Julio Quintero Medina es militante activo del F.N.D.-

6) CONSULTORIA JURIDICA

16 empleados en total, entre los cuales hay 8 abogados.No hay nadie de AD y solo uno de URD.Hay no obstante muy buenos colaboradores aquí.-

Su Director Orlando Tovar (hermano de Alirio Ugarte) ha renunciado.Será nombrado un militante de URD en su reemplazo y como adjunto el Ministro ha prometido al Partido nombrar al Dr. Asdrubal Hernández.

7) DIRECCION DE ADMINISTRACION

En esta Dirección hay un total de 91 empleados, de los cuales 10 son de AD incluyendo al Director: su adjunto es simpatizante y colaborador efectivo.-

Aquí es necesario a mi juicio sustituír por militantes e independientes honestos y amigos del gobierno, por lo menos unos 20 funcionarios.-

8) DIRECCION DE EXTENSION

48 empleados en total, de los cuales 15 son Ingenieros Agrónomos.-Solo hay 11 militantes de AD incluyendo al Director, pero en el resto del personal, la mayoría con bastante tiempo en el Ministerio, hay muchos amigos.-

El problema de esta Dirección a mi juicio es que no se le dá la importancia que realmente tiene, cuando es a través de élla que debe hacerse sentir con mayor intensidad la acción del M.A.C.,

al proporcionar mayor y mejor asistencia técnica al campesino y al productor medio.-Sostengo que es urgente una orientación de este Servicio a las necesidades actuales de Venezuela, pués su acción es fundamental en el desarrollo agrícola del país.-

En la actualidad existen unas 194 agencias de extensión que atendieron según informe alrrededor de 90.000 familias en 1.966, de las cuales solo 34.000 corresponden a asentamientos campesinos, lo que indica que el Servicio no dedica sus mayores esfuerzos a los fines de Reforma Agraria.-

Hay en la actualidad más de 80 cargos vacantes en esta Dirección. Existe una comisión presidida por el Ministro que estudia la reorganización del Servicio, pero nuestro juicio es que no trabaja con suficiente agilidad.-

9) DIRECCION DE SANIDAD E INDUSTRIA ANIMAL

La integran 65 empleados, entre los cuales hay 20 Médicos Veterinarios, 4 Ingenieros Agrónomos y varios Peritos Agropecuarios.

De AD hay solo cuatro personas en esta Dirección.

El titular de esta Dirección, aunque aparentemente separado, realmente ejerce sus funciones y sinembargo, parece que estuviera al frente de la misma su adjunto.-Realmente, creémos que esta situación debe definirse.-

Estimamos que el Director Larralde, es una persona honesta y amiga del gobierno a quien debería designarse de una vez Asesor del Ministro y designar como Director a un hombre de A.D., que podría ser José A. Serrano o Rafael Bracamonte y quien debería iniciar una vez nombrado, la reorganización de esta Dirección.-El adjunto, Claudio Carrasquero, aunque posiblemente de ideas conservadoras, nos parece un hombre correcto y leal: como él, hay allí otros profesionales idóneos, pero hay otros de quienes hay que prescindir para colocar hombres leales y capaces.-

10) DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

97 cargos hay en esta Dirección que incluyen 14 Ingenieros Forestales, algunos Ingenieros Agrónomos, Economistas, etc.-El Partido tiene aquí 4 militantes y 5 simpatizantes (Ingenieros Forestales) en buenas posiciones.-El Director Sixto Perichi, nos parece un profesional capaz y correcto y aún cuando algunos sectores lo califican de pro-copeyano, estimo que no es así, pués en sus actuaciones ha demostrado lo contrario.-

Estoy convencido no obstante, que esta Dirección debe reorganizarse, pues por pugnas de carácter profesional y por la interpretación errónea y cerrada de aspectos legales y administrativos por parte de algunos funcionarios, no marchan las cosas con la necesaria agilidad.-

Hay rumores insistentes de manejos indebidos en esta Dirección y por éllo hemos solicitado personalmente y por oficio a la P.T.J., una investigación exhaustiva, que recientemente el Ministro ha pedido directamente a Olivares Bosque, se agilice.-

Como adjunto al Director podría pensarse en el Ingeniero Forestal Luis E. Castillo Estrella. Para otros cargos directivos, podría pensarse en los Ingenieros Forestales Honorio Ariza de Portuguesa, Hernán Buitrago de San Cristobal y Victor Ruis García, tambien de San Cristobal.Este último es simpatizante pero hermano o primo hermano de Leonardo.-

11) DIRECCION DE INVESTIGACION

Hay solo 9 cargos en esta Dirección y no hay nadie de A.D.-

El Partido ha pedido el adjunto y para el cargo podría designarse a

12) OFICINA DE INGENIERIA AGRICOLA

63 personas trabajan en esta Direcci:on y de éllas solo 5 son de A.D..El Director es de U.R.D.-

De continuar estos servicios en el M.A.C., por lo menos el adjunto y dos divisiones deben estar en manos del Partido, pués no hay que olvidar que fué a través de esta Dirección que Coney hizo una extraordinaria labor proselitista.-

De pasar al M.O.P. como está planteado, creo que de todas maneras el M.A.C. y el I.A.N. deben tener participación en la determinación de las prioridades para la construción de vías de penetración agrícola y de pozos profundos.

13) OFICINA DE PESCA

Esta es una Oficina nueva con 13 empleados, la mayoría transferidos de la Dirección de R.N.R.; de éllos, solo dos son de A.D.

Como Jefe de la Oficina ha sido designado el Dr. José R. Heredia, postulado por A.D.-

14) FOMENTO PECUARIO

Tiene un total de 24 empleados, de los cuales 3 son de A.D.-

Debe ser reorganizado con urgencia y realmente para hacerlo, solo se espera que la P.T.J. nos indique el momento oportuno para no interferir las averiguaciones que conduce.-El candidato para Jefe estimamos que debe ser el Veterinario Francisco Diamond, quien actualmente trabaja en estos servicios.-

---

En el interior, la situación es más o menos como sigue: Existen 9 Regiones con Directores, Jefes de Personal, Administradores y Consultores Jurídicos, cuya distribución es así:

Directores: 4 de A.D.; 2 de U.R.D. y 1 del F.N.D. (Bolívar).

Administradores: 6 de A.D.; 2 de U.R.D. y 1 de militancia descocida.

Jefes de Personal: 4 de A.D.; 2 de U.R.D. y 3 Independientes.
Consultores Jurídicos: 6 de A.D. y 2 Independientes (Angel Biaggini y Sánchez Negrón).-

Existen además 10 zonas con Jefes, Administradores y Jefes de Personal. distribuídos así:

Jefes de Zona: 2 de A.D.; 2 ofrecidas a A.D., cuyos titulares no se han nombrado· 2 pro A.D. ; 2 U.R.D. y 2 Independientes o de militancia desconocida.
Administradores: 5 de A.D.; 2 de U.R.D. y 3 Independientes.
Jefes de Personal: 8 de A.D. y 2 de U.R.D.-
En las zonas se está haciendo un chequeo de esta distribución.-
Debo observar que en el total de 64 empleados en la Regiones y Zonas, solo haían 15 personas de A.D. y ahora hay 38.-

Los otros cargos de importancia en las Regiones, son los Jefes de Programa, cuya situación puede resumirse así:
Extensión: 6 ;Ingeniería Agrícola: 5 ; Planificación: 2 ;Ganadería:4; Recursos Naturales: 5.- (Son 45 en total: 5 en c/u. de las 9 regiones).

Señor Presidente:

En este informe, que es estrictamente confidencial como Ud. me lo indicó; digo algunas cosas que aunque las he discutido con Osorio en oportunidades anteriores y por tanto el conoce mis puntos de vista, presentadas así, pudieran aparecer como un acto desleal para con él y esta situación me preocupa.Sinembargo, he considerado un deber tambien de lealtad y una obligación de consecuencia para con Ud., presentarle las cosas en la forma más objetiva que he podido correspondiendo así a su requerimiento.-
Caracas, 26 de junio de 1.967.

REF

NO.

REG. INT. No.

CABLE: AGRONAC

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

MEMORANDUM

PARA: DR. RAUL LEONI - Presidente Constitucional de la República.

DE: WENCESLAO MANTILLA - Presidente del I. A. N.

ASUNTO: Reajuste de personal del Instituto para - 1. 968

FECHA: 8 de enero de 1968.

Señor Presidente:

Ante una serie de informaciones deformadas que han venido - siendo difundidas por la prensa hablada y escrita de manera sistemática, con la deliberada intención de hacer aparecer algunas medidas de carácter eminentemente administrativas tomadas por el suscrito, en su condición de Presidente de este Organismo, como prueba de que dentro del - IAN se ha desatado una feroz persecusión política contra partidarios de - determinada corriente electoral, cuyos líderes aupan tal campaña, me - veo en la obligación de hacer de su conocimiento que las destituciones objeto del despliegue publicitario aludido, se deben, unas al reajuste operado en el Presupuesto vigente para este ejercicio de 1. 968 y otros, a hechos de manifiesta incompetencia de algunos empleados en el desempeño de sus funciones, tal como caso por caso, le expongo de seguidas:

1. - .Reorganización de la Oficina de Auditoría y Sistemas:

Durante el ejercicio 1. 967, por recomendación de una Comisión de Reorganización Administrativo-contable, se subdividió la función de -

./..

REF

CABLE: AGRONAC

No. _____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

Auditoría, en tres actividades: Auditoría Central, Auditoría Regional y Verificación de Obras, creando para cada una de estas actividades un Departamento.

Al final del ejercicio se ha considerado que los resultados obtenidos con esta organización, no han sido enteramente satisfactorios y por consiguiente no justifican sus costos.

Estos resultados nos han obligado a modificar la estructura de la Oficina, reagrupando en un solo Departamento de Auditoría, los tres Departamentos mencionados.

Esta modificación representa, además de una más efectiva supervisión de la función de Auditoría, la reducción de los siguientes gastos:

Sueldos básicos	Bs	90.060,oo
Caja de Ahorros	"	3.752,50
Prestaciones Sociales ...	"	7.505,oo
Seguro Social	"	6.304,20
Aguinaldos	"	3.752,50
Total	Bs	111.374,20

Por tal medida, han sido eliminados los siguientes cargos:

Jefe del Departamento de Auditoría Central (Dr. Luis Guillermo Martínez)

Secretaria (Judith Michelena)

Perito (Pedro Briceño)

Jefe del Departamento de Verificación de Obras (Ing. José Rafael Baduy)

2. - Otros Egresos de Personal:

a) Perito Agropecuario Miguel Angel Millán Patiño, Jefe del Departamento de Tramitación y Control de la División de Dotación. Destituido por su incapacidad en el desempeño -

./..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No.

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

de las funciones inherentes al cargo, reflejada en mala organización de la dependencia, con el consiguiente bajo rendimiento, por tales razones las metas trazadas para dicho Departamento no han sido satisfechas.

b) Ciudadano Nelson Gómez, quien figuraba en la nómina del Departamento de Servicios Generales, División de Administración, como Auxiliar de Oficina, por eliminación del cargo, ya que no venía cumpliendo ninguna función específica y por lo tanto no se justificaba su existencia. Por otra parte, el expresado ciudadano venía desarrollando notoria campaña política a favor del MEP, a tiempo completo, agitando dentro de la sede del Instituto y formando grupos en los jardines y corredores en horas laborables.

c) Ciudadano Rigoberto Oliveros, Auxiliar de Asuntos Legales en el Departamento Legal, como supernumerario, por reducción de personal en la Partida Variable, y en vista de que sus servicios no resultaban indispensables, a juicio del Jefe de la respectiva dependencia.

d) Dr. Julio Manuel Montoya, Coordinador MAC-BAP-IAN. - Destituido a petición suya, ya que previamente había presentado renuncia al cargo y con el propósito de favorecerlo se optó por su eliminación, para proceder al pago completo de sus prestaciones sociales, dejando satisfechos así sus propios deseos.

e) Peritos Forestales, Pradelio Zambrano y Manuel Eduardo Mirabal, adscritos al Departamento de Selección de Tierras y Avalúos, por eliminación de los cargos, toda vez que su especialidad no encuadra en las actividades específicas de dicha dependencia y ante la imposibilidad de reubicación.

f) Perito Agropecuario, Joaquín Pons Romero, adscrito a la dependencia anteriormente citada, por bajo rendimiento y -

./..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No._____

REG. INT. No.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

marcada deficiencia en las labores encomendadas, ya que en diversas ocasiones hubo la necesidad de designar a otros técnicos con la finalidad de que ejecutaran labores anteriormente encomendadas al referido Perito. Fue trasladado internamente a la Delegación del IAN en el Estado Portuguesa en el año 1966, donde causó problemas de orden técnico, siendo por dicha razón transferido nuevamente a la Delegación del Zulia, con el encargo de realizar varios trabajos de planificación física, de los cuales sólo entregó uno en condiciones incompletas.

g) Ciudadano Luis Camacho Salazar, Oficinista en el Departamento de Catastro de la División de Dotación, con sueldo mensual de Bs 1.500.oo. Destituido por reorganización administrativa, ya que el cargo fue reajustado a Bs 900.oo mensuales, toda vez que las funciones que venía desempeñando eran propias de una secretaria corriente, y además el referido ciudadano incurría frecuentemente en inasistencias injustificadas al trabajo.

h) Ciudadano José Antonio García Alvarez, quien figuraba como Auxiliar de Oficina, adscrito a la Oficina de Personal, por eliminación del cargo, ya que no venía cumpliendo función específica alguna y en forma muy eventual se le encomendaban labores de poca importancia, en el desempeño de las cuales manifestaba poca capacidad.

i) Peritos Agropecuarios, Filogonio Pérez y Oscar Escobar, y ciudadana Johelina de Valdez, destituidos los dos primeros por marcada incapacidad en el cumplimiento de las labores, reiteradas inasistencias a la zona de trabajo y descuido absoluto de la misma; la segunda por difamar públicamente de las Autoridades del Instituto y concretamente del Delegado, haciendole graves imputaciones de orden administrativo en su cargo de Jefe del Departamento de Tesorería. Los expresados funcionarios estaban todos adscritos a la Delegación del IAN en el Estado Apure.

./..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

NO.

REG. INT. NO.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

j) Ciudadanos Lázaro Guareguan, Auxiliar de Campo, e Inocencio Flores Marcano, Promotor de Desarrollo Comunal, en la Delegación del IAN en el Estado Anzóategui, por su incompetencia en el desempeño de sus labores, ya que a juicio de la respectiva dependencia, no cumplían a cabalidad con las instrucciones de trabajo que recibían.

k) Perito Agropecuario, Máximo Escalante Sánchez, y Práctico Agrícola, Luis González Zuleta, de la Comisionaduría Agraria del Territorio Federal Amazonas, destituido por su incompetencia en el cumplimiento de las funciones, de acuerdo a los informes relativos a evaluación de su trabajo.

l) Ciudadano Miguel Méndez Pérez, Representante del IAN - en el Proyecto Las Majaguas, con sueldo mensual de Bs - 3.400.oo, más Bs 1.000.oo de viáticos fijos. Destituido - por reorganizaciones presupuestarias, ya que no se justificaba el sueldo arriba expresado, por encima del nivel de los demás jefes de dependencias de la misma categoría. - Para el nuevo ejercicio dicho sueldo es de Bs 2.700.oo mensuales.

m) Ciudadano Nelson Ricci Rojas, Valerio Tineo y Prieto Lizier Nassuti, adscritos a la Zona de Mecanización de Oriente, Barcelona, con los cargos de Tornero, Ayudante de Electro-mecánica y Ayudante de Tornero, respectivamente. Cargos eliminados por cuanto los servicios de dichas especialidades no se requerían en esa dependencia, por cuyo motivo se contempló para el nuevo Presupuesto, cargos de absoluta necesidad para el servicio en dicha dependencia, en reemplazo de aquellos, tales como Operadores de Maquinaria Pesada y Ayudantes.

Los egresos a título de eliminación de cargos, permiten una economía global para el Instituto del orden de los 367.152 bolívares anuales, so

./..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

NO.

REG. INT. NO.

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

lamente por concepto de sueldos, sin incluir viáticos, asignaciones de vehículos, acumulación del pasivo de prestaciones sociales, aportes por concepto de Caja de Ahorros, cotizaciones de la Empresa al Seguro Social Obligatorio y otros conceptos de menor importancia derivados de las obligaciones contractuales.

3. - Intervención de la Delegación Agraria del Estado Zulia. -

Al practicar los cortes de cuentas del ejercicio 1.967 en la Delegación Agraria del Estado Zulia, se ha podido comprobar la existencia de las siguientes irregularidades administrativas:

a) Sobregiro en los bancos por un total de Bs 362.524,63, ocultado a la Oficina Central mediante la presentación de insinceras informaciones administrativas.

b) Obligaciones contraídas con el comercio local que sobrepasan la cantidad de Bs 600.000.oo.

c) Mantenimiento de cargos no justificados al márgen del presupuesto.

d) Pago de viáticos y pasajes a personas que no son empleados del Instituto.

En vista de la gravedad de estas irregularidades, la Oficina de Auditoría y Sistemas procedió a la intervención administrativa de la mencionada dependencia, y destacó una comisión de auditores para que establezca la verdadera situación administrativa y el destino de los fondos remesados a esa dependencia para cubrir sus gastos de funcionamiento y las programaciones que ejecuta.

Como podrá usted observar Señor Presidente, las medidas administrativas acordadas por la Presidencia del Instituto que me honro en ejercer por su expreso mandato, sólo obedecen a la reiterada política de su Gobierno de manejar los recursos del Estado con probidad, en beneficio direc-

./..

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REF

CABLE: AGRONAC

No._____

REG. INT. No

REPUBLICA DE VENEZUELA
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL

to del desarrollo económico y social del País y en ningún caso a procedimientos de persecusión política.

Atentamente,

WENCESLAO MANTILLA

SIRVASE MENCIONAR LA REFERENCIA. NO TRATAR MAS DE UN ASUNTO EN CADA COMUNICACION

REVERSION 6 Abr

- -59	Comunicación al Congreso en relación a Art. Constitucionales y legales pertinentes .
1-12-60	Comunicado de Prensa sobre Terminal de Embarque de Punto Fijo.
26- 1-61	Notas sobre Relación.
15- 8-61	Donación Terreno Mene Grande a Amaco
16- 2-62	Donación Campamento Jusepín de Creole a UDO
19- 5-62	Nota sobre Reversión A.S.C.
9- 7-62	Desmantelación de Estaciones de Recolección por Mene Grande. Objeciones de Consultoría: J.C.A.A.
12- 9-62	Comunicación al M. de Justicia sobre Registradores JCAA.
15-10-62	Comunicación a Shell sobre Centro de Entrenamiento de Cabimas y Venta a Médicos.
17-10-62	Comunicación a Shell sobre el mismo asunto y carta de la Shell 15-10-62
12-12-62	Carta Shell sobre el mismo asunto.
22- 1-63	Notas sobre Registro de Ventas.
9- 3-63	Comunicación al Min. de Justicia sobre el mismo asunto.
22- 3-63	Carta a Shell sobre Edif. San Bernardino y posible arrendamiento.
27- 3-63	Carta de la Shell sobre el mismo asunto.
15-11-63	Carta de la Shell sobre el mismo asunto.
27- 5-63	Carta a la Creole sobre reversión en general.Circular a otras Empresas.
6- 6-63	Carta a la Iron sobre reversión en forma Circular.
5- 6-63	Carta de la Shell contestando Circular de Mayo.
28-10-63	Dictamen de M.J. sobre Circular a Registradores.
12- 6-64	Comunicación de M.J. acogiendo Dictámen de Consultoría
63	Proyecto de contrato sobre reversión de Pto. de Hierro entre Ministerios DN,OP,C y MRH.
9-63	Nota explicativa sobre el mismo asunto.
9- 7-65	Dictamen de Consultoría sobre Reversión de bienes inmateriales: posesión y servidumbres.

	Exposición de Motivos al Proy. Reg. L. Hidro. y Reg.
15- 5-64	Control Sobre Actos de disposición de concesionarios: Dictámen de Consultoría .
15--5-64	Dictámen sobre Art.En L. Reg. Pub.
6- 9-65	Acta de recepción Escuela Shell en Cabimas.
22- 9-65	Carta IVSS sobre recepción bienes Creole y Mene Grande.
22- 9-65	Carta a las Compañías sobre el mismo asunto.
21-10-65	Sobre Derecho de Reversión JPPA.
11-65	Proyecto de Ley sobre Reversión. Pérez Guevara
18-11-65	Memorandum sobre el mismo asunto
21- 7-65	Síntesis de opiniones Consultoría
68	Proyecto contestación Sanidad sobre Hospital Caripito

D

2

3935

Caracas, 18 DIC 1959

150° y 101°

Ciudadanos
Presidente y Vice-Presidente del
Congreso Nacional,
Ciudad.

Recibí sus comunicaciones de fechas 20 de noviembre y 3 de diciembre del presente año, que se refieren ambas a la opinión de este Ministerio sobre dos artículos elaborados por la Comisión Bicameral de Reforma Constitucional.

En respuesta, los signatario lo siguiente:

El primer artículo fue incorporado, con ligeras variantes en su redacción, en la Constitución de 1947, y acogido asimismo en la Constitución vigente. Con esta materia guardan relación los artículos 80 y 61 de las Leyes de Hidrocarburos y de Minas, respectivamente, aunque en estas últimas disposiciones no está claramente establecido que la reversión se refiera a las tierras que se encuentren dentro del perímetro de las concesiones. Para despejar toda duda conviene mantener la citada disposición en el texto de constitucional.

En lo que atañe al segundo artículo, cabe anotar que lo relacionado con los oleoductos está contemplado en la Ley de Hidrocarburos. Según el artículo 6° de ella la concesión de transporte constituye una concesión de servicio público. De acuerdo con su artículo 37, el uso de los oleoductos por concesionarios o personas distintas del titular de la concesión de transporte, está limitado al excedente de capacidad de los mismos, una vez llenadas las propias necesidades de transporte del titular.

La Ley de Ferrocarriles considera la materia de ferrocarriles como de utilidad pública y dispone en su artículo 15, que todas las empresas están obligadas a permitir que otro ferrocarril empalme con el suyo. Sobre los caminos y vías de comunicación el Código Civil los considera como del dominio público (Libro Segundo, Título I, Capítulo II), y la Ley del Trabajo obliga especialmente a las empresas petroleras y mineras a no impedir el libre tránsito por las carreteras y caminos que conduzcan a los centros de trabajo, aún cuando dichas vías sean construídas por compañías o particulares (artículo 14).

Como se ve la materia está ya regulada por disposiciones legales y la disposición constitucional vendría a llenar algunos vacíos, especial

mente el del transporte por ferrovías cuando no haya empalme, y el que existe en la Ley del Trabajo por referirse solamente a empresas petroleras y mineras, aunque éste puede considerarse cubierto por las disposiciones más generales del Código Civil. Por otra parte, establecida dicha disposición en la Constitución Nacional, escaparía al alcance del legislador ordinario la posibilidad de establecer normas que la contrarían. Estimo que la proposición Pérez Guevara logra los propósitos de esclarecer la función pública que deben cumplir obras de la índole tratada.

Las anteriores consideraciones constituyen la opinión del Ministerio sobre la materia consultada.

Juan P. Pérez,
Ministro de Minas e Hidrocarburos.

JCA/cra/co.

1-12-60 3

TERMINAL DE EMBARQUE EN PUNTO FIJO

Reversión de bienes al Estado.-

A comienzos de año la Mene Grande informó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos lo siguiente : 1°.-) que una vez dragada la Barra de Maracaibo y establecidas las facilidades de exportación dentro de los límites del propio Lago, resultaba innecesaria la existencia del Terminal de Embarque de Las Piedras en el estado Falcón, el cual se había venido utilizando exclusivamente como puerto de aguas profundas para la exportación de crudos provenientes del Lago de Maracaibo; y 2°.-), que , como consecuencia de lo anterior, estaba gestionando la venta del terreno e instalaciones del Terminal a las empresas Talleres Puerto Cabello y Grasas y Lubricantes Venoco.

El Ministerio fué categórico al comunicarle a la compañía que consideraba ilegal la operación proyectada, por lo que se oponía a que se llevara a efecto. También se lo informó al representante de las empresas interesadas en la adquisición.

Al informar la Mene Grande que el Terminal de Las Piedras quedaba desafectado del uso que había tenido por la industria petrolera que se beneficiaba de él,los bienes que lo constituían pasaron a poder del Estado. Las tierras donde se construyó la mencionada obra habían sido adquiridas en razón del fin de utilidad pública que rige la materia regulada por la Ley de Hidrocarburos. En el caso concreto se hizo uso del procedimiento de expropiación que contempla la misma Ley y aun cuando se hubiesen adquirido por compra, el destino que se les daba en la industria petrolera habría permitido hacer uso de la expropiación. Una vez que cesó el fin de utilidad pública que cumplían los bienes afectados, las tierras y todas las instalaciones y obras permanentes que formaban parte del Terminal de Las Piedras, cuyo valor ha sido recuperado por las empresas ,

pasaron como se dijo antes a poder del Estado.

La reversión de bienes de concesiones al Estado no es nada extraordinario o desusado. Existen numerosos precedentes al respecto. En Caracas se tuvo el caso de la empresa de tranvías, cuando pretendió disponer de algunos bienes afectados al servicio. Igual sucedió con el Ferrocarril La Guaira-Caracas. En la actualidad la reversión es más usual y frecuente. Al renunciarse la concesión de Placa y otras concesiones mineras, o al cesar en su uso algunos bienes destinados a la explotación de concesiones, la Nación ha entrado en posesión de ellos. Además en virtud de disposiciones de la Constitución Nacional y de la Ley de Hidrocarburos las tierras y las instalaciones permanentes adquiridas para ser destinadas a explotacion de concesiones de hidrocarburos, una vez extinguidas las concesiones, pasan a propiedad de la Nación sin indemnización alguna. En el presente caso aun cuando no se hubiesen extinguido las concesiones, cesó para su uso por la industria petrolera el Terminal de Las Piedras y por tanto revierte al Estado.

Cuando se prescindió, por las razones anotadas, de la venta de las tierras e instalaciones a las empresas citadas, el Ejecutivo Nacional con vista del proyecto de remodelación de las poblaciones petroleras y mineras, estimó conveniente destinar la mayor parte del terreno para que el Banco Obrero lo utilizara en la remodelación de Punto Fijo. La Marina está usando el muelle como escala para la represión del contrabando y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias recibió los tanques y tuberías para almacenar agua en los pueblos de la península y otros usos adecuados. En reuniones celebradas entre representantes de los organismos citados y la Mene Grande Oil Company se trató de los particulares anteriores y como fórmula práctica para la transferencia al Banco Obrero se estimó conveniente la de donación por la Compañía a dicho Instituto de las tierras e instalaciones, lo que evitó una doble operación.

1-12-60

La Ley de Hidrocarburos en su artículo 1° declara de utilidad pública todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de hidrocarburos, a la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento de las sustancias explotadas, y a las obras que su manejo requiera.

En su artículo 3° expresa que el derecho de explorar con carácter exclusivo y el de explotar los hidrocarburos y realizar las fases posteriores que integran la industria, podrán ejercerse directamente por el Ejecutivo Nacional u obtenerse por medio de concesiones para que éste otorgue conforme a la ley.

La misma Ley, en su artículo 52, confiere a los concesionarios, para la cabal realización de los derechos y obligaciones en ella previstos, los derechos de constitución de servidumbres, de ocupación temporal y de expropiación de los terrenos que necesitaren según las disposiciones de aquella.

Se observa como el Estado, en los casos en que no realiza directamente el trabajo de la riqueza natural y nacional no renovable que constituyen los hidrocarburos, otorga concesiones a terceros para que lo efectúen, participando de las ganancias obtenidas, inspeccionando y controlando la industria y dotando a los concesionarios de derechos que le son inherentes, para que se cumpla en la mejor forma un servicio público tan fundamental.

De la esencia misma de la concesión se desprenden prerrogativas para el Estado, entre las que se encuentran la reversión y las medidas precautelativas. En virtud de la reversión, de los elementos permanentes, tierras o instalaciones, afectados directamente al ejercicio de la industria, pasarán a integrar el patrimonio del Estado, sin compensación alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva. La reversión, normal de orden público, se explica "por la índole misma de la actividad de servicio

público. Separados del conjunto de la empresa los elementos indispensables para la prestación del servicio, es obvio que vendría la paralización con todas sus consecuencias de orden económico y social". Además cuando la reversión se produce, generalmente el concesionario ha amortizado con creces los bienes sobre los que recae.

Las medidas precautelativas "tienden a garantizar los derechos que para el Estado emanan de la reversión. Se trata de impedir el deterioro o la sustracción de elementos vinculados al servicio. Sin ellas -dice un tratadista - la Administración quedaría inerme frente a la gestión dolosa o simplemente irregular del concesionario.

Los bienes a los cuales se aplica la reversión son aquellos cuyo destino hubiera permitido ejercer la expropiación.

En los casos en que, sin extinguirse la concesión, sean desafectados definitivamente del uso que se les había venido dando a la industria petrolera, el Estado deberá tomar medidas tendientes a la conservación de dichos bienes y a impedir que ellos sean enajenados. Como no van a ser utilizados más en la industria para la cual fueron adquiridos y como el término de la concesión ha de pasar indefectiblemente a la propiedad de la Nación, se justifica el adelanto del resultado final de la reversión y su pase a la propiedad de la Nación, para dedicarlos a fines de interés público.

Los artículos 80 de la Ley de Hidrocarburos y 103 de la Constitución Nacional vigente consagran los principios antes expuestos.

Cada vez que una empresa petrolera efectúe lleve a cabo la desafectación a que se ha hecho referencia deberá abstenerse de cualquier operación sin terceros sobre el bien o bienes desafectados. En tales casos deberá la correspondiente participación a este Ministerio a objeto de poder adoptar las medidas pertinentes.

15-8-61 / 5

DONACION TERRENO COMPAÑIA MENE GRANDE OIL COMPANY PARA REMODELACION DE LA POBLACION DE ANACO, ESTADO ANZOATEGUI

El Presidente del Banco Obrero en oficio N° 83, Oficina Legal, de 20 de junio de este año, dirigido al titular del Despacho, informa que cumpliendo instrucciones del Ejecutivo Nacional ha venido sosteniendo conversaciones con la Directiva de la Mobil Oil Company, a fin de lograr que dicha empresa efectúe el financiamiento para la construcción de CIENTO SETENTA Y SEIS viviendas en Anaco; que se ha logrado un acuerdo al respecto y se redactó un Proyecto de Contrato contentivo de las condiciones, entre las que se encuentra la de que el Banco obtenga la propiedad del terreno donde han de construirse las viviendas, el cual pertenece a la Mene Grande Oil Company, y que esta última empresa ha ofrecido donar para la remodelación de Anaco el terreno en cuestión, a condición de que dicha liberalidad sea aceptada como aporte suyo a la remodelación de las ciudades petroleras, a razón de Bs. 50.000.oo la hectárea, precio que la Junta Administradora del Banco considera elevado. En virtud del alto precio dicho Instituto sugiere al Ministerio la conveniencia de que trate con la Mene Grande lo relativo a tal materia.

Anexos al citado oficio se recibieron sendas copias del N° 62, de 10 de mayo de 1961, dirigido por el Consultor Jurídico del Banco a la Directiva de la Mene Grande, contestando el ofrecimiento de ésta, y del 214-A, de 12 de junio de 1961, contentivo de la respuesta de dicha compañía.

En el oficio del Banco para la Mene Grande se expresa que no se considera conveniente el precio de Bs. 50.000,oo por hectárea y se sugiere dejar para otra oportunidad y cuando así se convenga entre la Empresa Mobil, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y dicho Instituto, la fijación del precio más aceptable, llevando de todos modos adelante dicha operación y la de financiamiento; que el Banco vería con agrado que los gastos de reubicación de las instalaciones fuera del área en cuestión los efectuara la Mene Grande con la supervisión del Ministerio, considerándose ellos como aporte de esa compañía a la remodelación de los campos petroleros; que el Banco está dispuesto a cargar con los gastos que ocasione la donación, y que la negociación a llevar a cabo no constituye una donación en sí misma, sino una cesión en concepto de aporte a la remodelación de los campos petroleros, de acuerdo a compromisos contraídos por la compañía con el Ejecutivo Nacional.

En la respuesta de la Mene Grande al Banco, la compañía manifiesta

que no comparte la opinión de dejar que la Mobil, el Ministerio y el Instituto, fijen la oportunidad en la cual deba decidirse un asunto que concierne principalmente a la Mene Grande, estando sí dispuesta a discutir con dicho Instituto cual puede ser considerado como el valor justo de la referida donación; que no se puede comprometer a efectuar los gastos que ocasionaría la reubicación de las instalaciones fuera del área en cuestión, pues no ha concluído el estudio que le indicará si la colaboración de la empresa para la remodelación de ciudades petroleras habrá de limitarse, por razones económicas, a algunas donaciones de terrenos y ciertos servicios técnicos; que no ha podido captar la aclaratoria del Banco de que la donación que promete hacer en Anaco no sea una "donación", sino una cesión en los términos expresados por el Banco, por lo que supone debe haber un mal entendido, ya que no existe, propiamente hablando, ningún compromiso formal y explícito con el Ejecutivo Nacional sobre la materia, pero que desde luego sí está dispuesta a colaborar para los fines indicados por medio de donaciones que cuadren exactamente dentro de la figura legal descrita en el Título IV del Libro Tercero del Código Civil.

// En cuanto a la sugerencia hecha por el Banco Obrero al Ministerio de que éste trate con la Mene Grande lo relativo al precio del terreno referido, consideramos conveniente, en caso de que se lleven a efecto conversaciones, tener presente el artículo 103 de la Constitución cuyo texto es el siguiente:

"Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva.

De tal artículo se desprende que sobre los terrenos adquiridos por personas jurídicas o naturales a los fines indicados, tiene la Nación una especie de "nuda propiedad", derecho real inmueble; por consiguiente, para la enajenación de aquellos debe requerirse la autorización previa del Senado de la República, en virtud de lo dispuesto por los artículos 150, ordinal 2°, de la Constitución, y 23 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

En el caso que nos ocupa nos parece, además, que tratándose del Banco Obrero, el precio del terreno a donar no debe ser el actual, real, ya que de ese precio debe deducirse la participación que tiene la Nación, la cual es de cierta consideración, por haber transcurrido ya parte importante del lapso legal de la concesión o concesiones a las que está afectado el terreno, el que normalmente debe pasar a la propiedad de la Nación, sin indemnización alguna, al término de la concesión respectiva.

Estima tambien esta Consultoría que en el documento que al efecto se elabore, sería lo más correcto hablar de "donación del derecho que la compañía tiene sobre el mencionado terreno" (propiedad temporal, sin derecho a disposición, a menos que medie autorización oficial) y no de "donación" simplemente. //

JCAA/tdo.-
15-8-51

16-2-62 6

Oficina Técnica de Hidrocarburos

229 H-P.F.

Caracas, 16 de febrero de 1962

152 y 103

Señores
Dr. Luis Manuel Peñalver y W. S. Glendening,
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Oriente
y Apoderado de la Creole Petroleum Corporation, respectivamente
Presentes.-

En este Ministerio se recibió la representación de ustedes fechada el 8 de mayo de 1961, en la cual manifiestan que la Creole tiene el propósito de donar a la Universidad de Oriente el campamento de Juseplín, Estado Monagas, y que a propósito de ello solicitan la exoneración de derechos de importación sobre los efectos que se encuentran en el campamento que puedan haber sido importados con el beneficio de la exoneración.

Al efecto declaran que los materiales y equipos utilizados en el campamento fueron importados entre los años 1936 y 1943 y que los derechos de importación correspondientes a los mismos fueron materia de transacción entre los causantes de la Creole y el Ejecutivo Nacional el 7 de abril de 1943, por la cual éste declaró cancelados dichos derechos mediante determinados pagos que recibió de aquella; pero que, a pesar de ello, la compañía no puede precisar si fueron utilizados en los edificios e instalaciones algunos materiales introducidos con tal beneficio.

En respuesta cúmpleme informarles que este Ministerio acuerda la mencionada exoneración de conformidad con el artículo 58, parágrafo 2º de la Ley de Hidrocarburos. Dicho parágrafo establece que los concesionarios podrán enajenar los efectos que hayan introducido exonerados de derechos, y da al Ejecutivo la facultad de otorgar el beneficio de exoneración al adquiriente, a solicitud de éste, de conformidad con las leyes. Como de acuerdo con lo establecido en el artículo 124, letra b), de la Ley de Aduanas la enajenación de efectos podrá hacerse sin el pago de los impuestos de importación a personas que también podrían obtener la exoneración, y la Universidad de Oriente está en ese caso, se justifica la exoneración acordada.

En cuanto a la donación del campamento, el Ministerio no tiene que objetar, no obstante que se trata de bienes que deben revertir al Estado en virtud de disposiciones legales, por cuanto la Universidad de Oriente es un instituto del Estado.

Por Delegación del Ministro,

Arturo Hernández Grisanti
Director General

JCAA/PJB/dl.-

Es copia exacta del original.

Reversión de Bienes.

El Estado venezolano en los casos en que no realiza directamente los trabajos de explotación de la riqueza natural, nacional, no renovable que constituyen los hidrocarburos depositados en sus yacimientos, otorga concesiones a particulares para que lo efectúen y, además de una participación en los beneficios que tal actividad produce, da a los concesionarios de otros derechos (constitución de servidumbre, ocupación temporal y expropiación de tierras necesarias al desarrollo de la industria) para que se cumpla en la mejor forma una actividad tan fundamental que tiene las características del servicio público.

El Estado a su vez tiene una participación en los beneficios que la industria produce, conserva el derecho de inspeccionarla y controlarla y goza de otras ventajas nacidas de tales actos, como son la reversión de tierras e instalaciones permanentes y como consecuencia el de ejercer medidas de conservación o precautelativas.

En virtud de la reversión, norma de orden público, los elementos permanentes, tierras e instalaciones, afectados al ejercicio de la industria, pasan a integrar el patrimonio del Estado, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa las concesiones respectivas.

Reversión de Tierras.

Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones de hidrocarburos, cualquiera que sea su ubicación, pasan a la propiedad de la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse las concesiones respectivas (artículos 103 de la Constitución y 30 de la Ley de Hidrocarburos).

Por tales tierras debe entenderse no solo aquellas sobre las cuales vayan a hacerse exploraciones o extracciones de hidrocarburos, sino todas las destinadas a trabajos relacionados con la industria petrolera tales como: construcciones, vías de comunicación y transporte, muelles, almacenes, oficinas, depósitos, apertura de galerías, acueductos, campamentos, plantas, terminales, etc., (artículos 53, 55 y 56 de la Ley de Hidrocarburos).

Como las obras de la naturaleza de las enumeradas, construídas sobre las tierras adquiridas con destino a la industria petrolera, son inmuebles y accesorios de dichas tierras, al producirse la reversión de éstas, pasan igualmente al patrimonio de la Nación.

Reversión de Instalaciones.

Las instalaciones permanentes afectadas a la industria petrolera, pasan también a la propiedad de la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa las concesiones respectivas (artículos 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos).

No debe entenderse que las instalaciones que revierten al Estado son las circunscritas al área de las parcelas concedidas. La interpretación restrictiva de las disposiciones de la ley daría margen a que los concesionarios construyeran la mayor parte de las instalaciones fuera del área de dichas parcelas con el objeto de eludir el efecto de la reversión. Además, la complejidad de la industria petrolera obliga a los concesionarios a construir obras en dilatadas extensiones territoriales con el fin de transportar, refinar, almacenar y efectuar otras operaciones, atendiendo a lo

cual la ley confiere a los concesionarios de explotación, concesiones anejas de refinación y transporte, y a los concesionarios de refinación, concesiones anejas de transporte, corriendo estas concesiones anejas la misma suerte de las principales, lo que también sucede con las respectivas obras.

Cabe observar que las obras pueden ser construídas sobre tierras adquiridas o no en propiedad por los concesionarios y tanto en uno como en otro caso revierten al Estado por su doble carácter de accesorias de las tierras y de instalaciones permanentes.

Medidas de Conservación.

Las medidas precautelativas tienen por objeto asegurar al Estado el derecho de reversión antes mencionado, impidiendo "el deterioro o sustracción de elementos vinculados al servicio". Sin ellas -dice un tratadista- la Administración quedaría inerme frente a la gestión dolosa o simplemente irregular del concesionario.

Debe tomarlas el concesionario cuando está usando las obras y en tales casos tienden al mantenimiento de ellas en buen estado. Entre las que el Estado debe tomar se encuentra la de evitar su enajenación o el uso: a) para una finalidad distinta de la petrolera que llevó a su construcción, b) en un complejo de instalaciones diferentes a las del que formó parte originalmente y c) por un concesionario diferente.

Desafectación.

A la extinción de las concesiones, en lo que respecta a la rever-

ción, debe asimilarse la desafectación de las obras o tierras del destino que se les había venido dando en la industria petrolera, cuando tal desafectación es definitiva. En efecto el vínculo entre la concesión y las tierras u obras queda roto y es esto lo que sucede cuando se extinguen las concesiones dando lugar a la reversión.

Una concesión puede estar vinculada con varias obras y una obra puede estar vinculada con varias concesiones. En el primer caso al dejarse de usar definitivamente una de las obras se produce la ruptura del vínculo de que hemos hablado y la obra debe revertir al Estado. En el segundo caso mientras esté vigente una de las concesiones y la obra se use en su provecho se mantiene el vínculo que retarda la reversión; pero éste se rompe con la desafectación definitiva del uso de la obra y ello sucede tanto en el caso en que el concesionario gestiona la venta de la obra como en el caso en que pretende darle un uso diferente.

Consideración final.

Dadas las características de servicios públicos que tienen las concesiones de hidrocarburos y en virtud de las razones antes expuestas, la reversión constituye una contraprestación o ventaja especial a favor de la Nación y cuando ella se produce generalmente el concesionario ha amortizado con creces los bienes sobre los cuales recae.

A.S.C.
C. J. - 19-6-62

9-762 8

99 C. J.

PARA LA OFICINA TECNICA DE HIDROCARBUROS:

ASUNTO: Desmantelamiento por la Mene Grande Oil Company de dos estaciones de recolección sin haber sido autorizada previamente.

Esta Consultoría opina que, como de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos al extinguirse las concesiones deben ingresar al patrimonio nacional todas las obras permanentes que con motivo de ellas se hayan construido, la Nación tiene derecho a que tales obras no sean desmanteladas ni dispuestas por los concesionarios sin la autorización del Ejecutivo Nacional, ya que de lo contrario podría hacerse nugatoria la adquisición de ellas por el Estado, mediante su desmantelamiento y enajenación por las empresas petroleras, antes del vencimiento de las concesiones.

El derecho referido autoriza a la Nación para vigilar por la conservación y destino de las instalaciones permanentes y ninguna de estas puede ser modificada, dispuesta y menos destruida sin autorización del Estado.

Por otra parte, el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos obliga a los concesionarios a someter a la aprobación del Ejecutivo Nacional los proyectos de obras que piensen realizar y sus modificaciones y con mayor razón deberán hacerlo para desmantelarlas, que es la máxima modificación a que puede estar sujeta una instalación, y según el artículo 26 del mismo el Ministerio debe comprobar si las obras ejecutadas están de acuerdo con los planos y proyectos aprobados. Además, los proyectos de esas instalaciones y sus memorias descriptivas se hallan en los archivos del Gobierno, el cual tiene derecho, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos a obtener todos los datos requeridos para el cabal conocimiento del desarrollo de la industria petrolera del país y debe saber cuando una de estas obras sufrirá cambios.

Por lo expuesto consideramos que la Mene Grande Oil Company, al haber desmantelado la Estación Tetea No. 1, sin recibir autorización para ello, está sujeta a las sanciones establecidas en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos, con los atenuantes de haber solicitado la autorización y de que ésta hubiera sido otorgada, si la compañía hubiese esperado la respuesta del Gobierno.

En vista del peligro de eliminación de obras por parte de las compañías petroleras que operan en el país, manifestado por el Inspector Técnico de Hidrocarburos de Maracaibo, sugerimos que el criterio arriba men-

ciones en relación a las obras permanentes, se haga saber a las referidas empresas. Asimismo deben informar si esas obras o sus elementos son de utilidad para el Estado.

Transcribimos proyectos de Resoluciones:

a) Para el caso Peten No. 1.

"Por cuanto la Compañía Mene Grande Oil Company desmanteló la estación de recolección Peten No. 1, ubicada en jurisdicción del Municipio Laguillas, Distrito Bolívar del Estado Zulia, antes de haber obtenido de la Inspección Técnica correspondiente la autorización solicitada para ello; por cuanto la obra desmantelada era una instalación permanente sobre la cual la Nación tenía derecho a ejercer especial vigilancia y control, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, lo cual fué imposible por su precipitada demolición; por cuanto la referida estación de recolección había sido aprobada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y su existencia y descripción constaba en los archivos de este Despacho, siendo indispensable autorización para modificarla o demolerla a tenor del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; por tanto, violados como han sido las disposiciones legales citadas, se impone a la Mene Grande Oil Company, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos, multa por la cantidad de Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000,00), ya que la violación mencionada está atenuada por haber solicitado la concesionaria la autorización correspondiente y por cuanto ésta hubiera sido resuelta favorablemente.

Comuníquese".

b) Para el caso Isabel No. 1.

"Por cuanto la Compañía Mene Grande Oil Company desmanteló la estación de recolección Isabel No. 1, ubicada en jurisdicción del Municipio Laguillas, Distrito Bolívar del Estado Zulia, antes de haber obtenido de la Inspección Técnica correspondiente la autorización solicitada para ello; por cuanto la obra desmantelada era una instalación permanente sobre la cual la Nación tenía derecho a ejercer especial vigilancia y control, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, lo cual fué imposible por su precipitada demolición; por cuanto la referida estación de recolección había sido aprobada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y su existencia y descripción constaba en los archivos de este Despacho, siendo indispensable que se solicitara autorización para modificarla o demolerla

a tenor de los artículos 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, máxime cuando parte de dicha estación iba a ser instalada en la estación "Miraflores No. 2"; por tanto, violados como han sido las disposiciones legales citadas, se impone a la Mene Grande Oil Company, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos, multa por la cantidad de Cuatro Mil Bolívares (Bs. 4.000,00), ya que la violación mencionada está atenuada por haber solicitado la concesionaria la autorización correspondiente y por cuanto ésta hubiera sido resuelta favorablemente.

Comuníquese".

Caracas, 9 de julio de 1962

Julio César Arreaza A.
Consultor Jurídico

JCAA/JEG/crs

12-962 9

Dirección General 1126

Caracas, 19 DIC 1962
153° y 104°

Ciudadano
Ministro de Justicia
Su Despacho.-

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la concesión minera o petrolera, diversas disposiciones del ordenamiento legal venezolano destacan el derecho de la reversión al Estado de los bienes adquiridos por los concesionarios con destino a la industria minera o petrolera.

La Constitución en su artículo 103 ordena que "las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva". La Ley de Hidrocarburos en su artículo 80 establece que "la Nación readquirirá, sin pagar indemnización alguna, las parcelas concedidas y se hará propietaria del mismo modo, de todas las obras permanentes que en ellas se hayan construído". Mientras que la Ley de Minas en su artículo 61 dispone que la concesión vuelva a poder del Estado "con todas las obras y demás mejoras permanentes que en ella hubiere".

El derecho de reversión a la Nación se haría nugatorio, con detrimento no sólo de su patrimonio sino también de los fines de utilidad pública y de interés general que la ley atribuye a la industria minera y de hidrocarburos, si se permite la enajenación o gravamen de bienes de concesionarios sin intervención del Ministerio a quien compete todo lo relativo a minas e hidrocarburos.

Por esos motivos y como es imperativo del Poder Nacional "la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República" C.N. 136 2 - es deber del Ejecutivo Nacional tomar las medidas tendientes a asegurar los derechos y acciones provenientes de la reversión de los bienes de los concesionarios. Con tal fin este Ministerio estima oportuno que el de su cargo imparta instrucciones a los Registradores para que se abstengan de protocolizar documentos contentivos de actos de enajenación o gravamen de bienes de concesionarios, si no consta expresamente la autorización del Ejecutivo Nacional. Los Registradores también deberán enviar a este Ministerio copias certificadas de los documentos que les sean presentados, por los cuales los concesionarios adquieran inmuebles, así como informaciones pe

.//.

nódicas sobre las operaciones realizadas por los concesionarios partiendo de la fecha en que se reciban las instrucciones hacia atrás.

Se anexan dos listas de personas o empresas que desde el año 1943 hasta la fecha han sido o son concesionarios de minas y de hidrocarburos.

Atentamente,

Juan P. Pérez,
Ministro de Minas e Hidrocarburos

Anexo: Lo indicado.-

JCAA/ myu.-

10

1962 C. J.

Caracas, 15 de octubre de 1962
152° y 104°

Señor
Representante de la
Compañía Shell de Venezuela
Ciudad.-

Cúmpleme informarle lo siguiente:

Por conversaciones sostenidas con representantes de esa empresa tuve conocimiento de que el Edificio donde funcionaba el Centro de Entrenamiento Artesanal de Cabimas, actualmente desocupado, estaba siendo negociado en venta para ser destinado a una clínica.

Inmediatamente hice saber a los informantes el criterio oficial respecto a la imposibilidad legal de efectuar tal venta, por ser el mencionado edificio un bien sujeto a revertir a la Nación, y ubicado, además, dentro del perímetro de concesiones en áreas del Distrito Bolívar del Estado Zulia. Les manifesté igualmente que deseaba exponer personalmente dicho criterio a los interesados en la adquisición del edificio en referencia.

Con ese motivo recibí el 21 del mes próximo pasado al abogado Carlos González Fuenmayor, apoderado general del médico Alfonso María Bolívar Escalona, principal interesado en la citada negociación, y le expuse el criterio oficial sobre ella, expresándole además que el Ejecutivo Nacional no autorizaría ni reconocería ninguna clase de transacción al respecto.

Atentamente,

Juan P. Pérez A.
Ministro de Minas e Hidrocarburos

JCAA/cra

11

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA
LTD

APARTADO 808 CARACAS

4875.

Caracas: 15 de octubre 1962

Ciudadano
Ministro de Minas e Hidrocarburos
Su Despacho

Nos dirigimos a usted en relación con el asunto, que ya usted conoce, de la opción que tenemos dada al Doctor Alfonso María Reinoso para la venta del Edificio de nuestra propiedad situado en la ciudad de Cabimas, Distrito Bolívar del Estado Zulia, y donde funcionaba el Centro de Educación Artesanal, para informarle que con fecha 8 de los corrientes, se trasladó a nuestras Oficinas el Juzgado 1° del Distrito Maracaibo de la Jurisdicción Judicial del Estado Zulia, para notificarnos del requerimiento que nos hace el Doctor Reinoso en el sentido de dar cumplimiento por nuestra parte al compromiso que tenemos adquirido en virtud de la opción que le otorgamos para la adquisición de ese Edificio con fecha 20 de agosto de 1962. En dicho requerimiento se nos concede un plazo perentorio de 15 días, a partir de la fecha expresada, para que hagamos la tradición y entrega material del edificio en cuestión, pues de lo contrario intentará acción judicial contra esta Empresa.

En vista de dicho requerimiento, no nos queda otro camino que proceder al otorgamiento del documento de traspaso respectivo, a fin de evitar la acción judicial correspondiente contra la Compañía, lo que hacemos de su conocimiento en razón de las conversaciones que al respecto hemos sostenido con usted.

Sin ningún otro particular a que referirnos, nos suscribimos de usted,

Muy atentamente,

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA Ltd.

G. A. Wagner

Anexo:
Copia del Requerimiento Judicial

12

1277 C. J.

Caracas, 17 de octubre de 1962
153° y 104°

Señor
Representante de la
Compañía Shell de Venezuela
Ciudad.-

Después de haberse preparado la comunicación No. 1.267 C. J. de 15 de este mes para esa empresa, el Ministerio recibió en el día de ayer su nota No. 4875 también del día 15. Expresan que en vista del requerimiento judicial que les ha hecho el doctor Alfonso María Reinoso, para dar cumplimiento al compromiso contraído por la opción para adquirir el edificio donde funcionaba el Centro de Educación Artesanal, en Cabimas, no les queda otro camino que proceder al otorgamiento del documento respectivo a fin de evitar la acción judicial correspondiente.

Tratándose de que el edificio está sujeto a revertir al patrimonio nacional por mandato de la ley, esa empresa no puede venderlo válidamente ni un tercero adquirirlo. Es preferible hacer frente al juicio con que se les amenaza antes que incumplir obligaciones legales frente al Estado.

Por otra parte, esa empresa no corre el riesgo de indemnizar al posible demandante, ya que la opción firmada es nula por ser la obligación principal de imposible cumplimiento al referirse a un objeto no permitido por la ley. Aun cuando fuere por error este no sería excusable porque la Ley se supone conocida y ninguna de las partes puede valerse de su ignorancia.

Atentamente,

Juan P. Pérez A.
Ministro de Minas e Hidrocarburos

JCAA/crs

Comunicación de la Shell Nº 4951 de 17-12-62 archivada en la carpeta Nº 2-20 (Cía. Shell)

13

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA
LTD

APARTADO 809 CARACAS

Caracas, 12 de diciembre de 1962

Ciudadano
Ministro de Minas e Hidrocarburos
Su Despacho

Tenemos el honor de referirnos a su Oficio N° 1277 C.J. de fecha 17 de octubre de 1962 el cual se refiere a nuestra Nota N° 4.675 de 15 del mismo mes por la cual informamos a Ud. del requerimiento que judicialmente hizo a esta Compañía el Dr. Alfonzo María Reinoso para que como beneficiario de la opción que le fué otorgada, le sea hecha dentro del plazo de quince (15) días, la tradición legal y la entrega material del edificio propiedad de esta Compañía, donde funcionaba por cuenta de la misma, el Centro de Educación Artesanal en Cabimas.

Lamentamos muy de veras la divergencia de criterio que existe en cuanto a la interpretación jurídica de las disposiciones que regulan la reversión de bienes propiedad de los concesionarios de hidrocarburos, la cual divergencia se ha puesto de manifiesto en las conversaciones que hemos celebrado, como en el caso a que se refieren los Oficio y Nota antes mencionados.

A la vez, podemos informarle que en este caso concreto el Dr. Alfonzo María Reinoso nos ha participado que no ejercerá la opción que esta Compañía le concedió el 20 de agosto de este año.

Con sentimientos de alta consideración y respeto nos suscribimos,

Muy atentamente,

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA Ltd.

C. A. Wagner

Fecha 13-12-62
Hora 9:11

22-1-63 14

PROCEDENCIA DE INSTRUCCIONES A LOS REGISTRADORES PARA QUE SE ABSTENGAN DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS DE ENAJENACION O GRAVAMEN DE BIENES DE LOS CONCESIONARIOS CUANDO NO CONSTE LA AUTORIZACION DEL EJECUTIVO NACIONAL.

La Consultoría Jurídica del Ministerio de Justicia opina que la medida mencionada en el encabezamiento es improcedente. Discrepamos de esa opinión por lo siguiente:

Los bienes inmuebles adquiridos por los concesionarios de minas e hidrocarburos, destinados a las concesiones, de acuerdo con los artículos 103 de la Constitución Nacional, 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos y 61 de la Ley de Minas, pasarán a propiedad de la Nación, al extinguirse las concesiones respectivas. Entendemos los artículos citados en el sentido de que todos los bienes a que ellos se refieren deberán pasar, necesariamente, al patrimonio nacional al extinguirse las concesiones, y no en el sentido de que, del conjunto de bienes inmuebles adquiridos por los concesionarios, sólo pasará a poder del Estado la parte que se encuentre en el patrimonio de los concesionarios al momento de la extinción de las concesiones, porque como lo comprenderá el menos avisado, si se aceptase la última posibilidad, los concesionarios, al aproximarse la extinción de las concesiones, dispondrían de los bienes en cuestión y nada pasaría al Estado, haciéndose nugatorias las disposiciones legales citadas. Los concesionarios, no pueden, pues, enajenar o gravar libremente esos bienes.

El ingreso al patrimonio de la Nación de los bienes afectados a las con-

cesiones, de minas o hidrocarburos, una vez extinguido el objeto para el cual fueron adquiridos, es un derecho del Estado consagrado en las leyes. Ese derecho no es obtenido gratuitamente, sino impuesto a los concesionarios, junto con otras cargas, por los beneficios que reciben del encargo de explotar los yacimientos nacionales, y las inversiones que tales bienes implican están sujetas a recuperación y amortización con las cantidades que obtienen los concesionarios de la explotación de los mismos yacimientos.

Los concesionarios tienen derecho de usar los bienes que adquiren para la explotación de las concesiones, sin que ello signifique que tienen la plena propiedad de los mismos, la cual comparten con el Estado, cuyo derecho se va incrementando día a día hasta la extinción de la finalidad para la cual fueron adquiridos, oportunidad en que el derecho de propiedad se consolida totalmente en el patrimonio estatal. Y es bien conocido un principio jurídico general según el cual "nadie puede transferir a otro más derechos que los que tiene", en virtud del cual, en el presente caso, los concesionarios no pueden transferir a terceros el derecho de plena propiedad que no tienen.

Por otra parte la estructura de la concesión de servicio público se reputa como un todo, que, al extinguirse el ejercicio del derecho que el Estado concede a los particulares, debe volver al patrimonio de aquél para que se pueda garantizar el funcionamiento del servicio. Si se tolerara que los concesionarios dispusieran de los bienes con que los prestan, al volver el

ejercicio del referido derecho a manos del Estado, tendría este que comenzar por la organización material de una estructura para poder prestarlos, lo cual en muchos casos, como el de la explotación de los hidrocarburos, significaría inversiones de enormes magnitudes que difícilmente podría afrontar la Nación sin que se paralizase la extracción de dichas substancias.

El ordinal b) del artículo 40 de la Ley de Registro Público, establece que los Registradores se abstendrán de protocolizar cualquier documento contentivo de actos jurídicos por los cuales se adjudique o grave la propiedad, cuando por cualquier título les conste que el Fisco Nacional tiene un haber sobre los bienes objeto de la operación, a menos que se presente comprobante legal de haberse satisfecho lo que al Fisco corresponda. Por lo tanto, en el presente caso, cuando textos legales como la Constitución Nacional, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, señalan derechos del Estado sobre los bienes en poder de los concesionarios, afectos a las concesiones, los registradores no deben protocolizar operaciones sobre dichos bienes sin el consentimiento de la Nación.

Por todo lo expuesto, no parece cierta la afirmación de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Justicia, de que, "impartir instrucciones a los registradores para que se abstengan de protocolizar documentos de actos de enajenación o gravamen de bienes de concesionarios, si no consta expresamente la autorización del Ejecutivo Nacional, significaría violar

la Ley de Registro Público". Todo lo contrario, se resguardaría la aplicación de la referida Ley y altos intereses públicos que están envueltos en las operaciones señaladas.

Caracas, 22 de enero de 1963

ASC/crs

9-8-63 15

xxxxxxxx General

992

Caracas, 9 - AGO 1963

154° y 105°

Ciudadano
Ministro de Justicia,
Su Despacho.-

Con fecha 12 de septiembre de 1962, este Ministerio remitió a usted el oficio No. 1126 donde se fija la posición doctrinal del Despacho en lo que se refiere al derecho de reversión del Estado Venezolano en materia minera y petrolera de conformidad con los artículos 103 de la Constitución, 61 de la Ley de Minas y 80 de la Ley de Hidrocarburos.

Circulares de la misma índole fueron dirigidas a las compañías mineras y petroleras que operan en el país, expresándoles que no podían efectuar ninguna operación sobre instalaciones y obras permanentes, sin el permiso de este Despacho.

En cuanto al Ministerio a su digno cargo, el mío consideró oportuno que se pusieran en vigor ciertas medidas tales como la abstención de los Registradores de protocolizar documentos contentivos de actos de enajenación o gravamen si no consta expresamente la autorización del Ejecutivo Nacional, la orden a los Registradores de remitir copias certificadas de los documentos que les sean presentados por los cuales los concesionarios adquieran inmuebles e informaciones periódicas sobre las operaciones realizadas por los concesionarios partiendo de la fecha en que se reciban las instrucciones hacia atrás.

Por cuanto hasta la fecha, este Despacho no ha recibido respuesta al expresado oficio relativo a materia tan importante y delicada como es la reversión donde están en juego los elevados y supremos intereses del Estado Venezolano, se le agradecería una información respecto a los particulares que informan el contenido de nuestra mencionada comunicación, esperando este Ministerio que el de Justicia aporte la mayor colaboración posible a fin de dar la mayor eficacia a las medidas tomadas.

Atentamente,

Arturo Hernández Grisanti,
Encargado del Ministerio.

RR/att.

22-3-63 16

General.-

325

Caracas, 22 MAR 1963

Señor
Presidente de la Compañía Shell de Venezuela
Ciudad.-

En conversación sostenida con usted por el titular del Ministerio, el jueves 6 de septiembre del pasado año, en relación con la reversión del Edificio Shell, construido para sede de las oficinas de esa empresa, en la Urbanización San Bernardino, y en ese entonces desocupado, se le ratificó el criterio del Gobierno respecto a la reversión.

En vista de la opinión divergente sustentada por la empresa que usted representa y dada la urgencia que había en utilizar el mencionado edificio para la Comandancia General de la Marina y otras dependencias del Ministerio de la Defensa, se le manifestó que dicho Ministerio contrataría el arrendamiento con la Compañía Shell, cuidándose de no anticipar en el documento opinión respecto al derecho de propiedad del edificio. Al mismo tiempo el Ministerio de Minas e Hidrocarburos le enviaría esta comunicación reafirmando la posición del Gobierno sobre la reversión de todos los bienes inmuebles adquiridos por los concesionarios con destino a la industria petrolera.

Se llegó a esta solución provisional atendiendo a que en el caso concreto del edificio de San Bernardino podría sostenerse por esa compañía que su derecho de uso, dada las condiciones del edificio, no debe considerarse extinguido sino al término de las concesiones, por tratarse de un inmueble de uso múltiple y no específico de la industria.

Además, dado el criterio divergente y las muchas consecuencias que derivan de él, se pensó que sería conveniente dar un plazo razonable a la empresa para adoptar una posición definitiva que quizás pueda llevar a evitar que las diferencias tengan que zanjarse ante los Tribunales o por el Congreso de la República.

El hecho de que en el contrato de arrendamiento celebrado el día 6 de febrero próximo pasado se haya expresado que el Edificio Shell for-

.//.

ma parte del patrimonio de esa empresa, contrariándose en parte lo convenido, no resta valor a la posición expuesta por el titular del Ministerio en la conversación arriba mencionada sobre la materia de reversión, la cual queda ratificada por medio de este oficio.

Atentamente,

Arturo Hernández Grisanti,
Encargado del Ministerio

JCAA/ myu.-

27-3-63 17

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA
LTD.

APARTADO 809 CARACAS

Caracas, 27 de marzo de 1963.

Dr. Arturo Hernández Grisanti
Encargado del Ministerio de Minas e
Hidrocarburos
Presente.-

Muy estimado Doctor,

Tengo el honor de avisarle recibo del Oficio N° 335 (Dirección General) de fecha 22 de los corrientes, en el cual se hace una reserva en cuanto a la posición del Ministerio sobre la materia de la reversión, en conexión con el edificio situado en la urbanización San Bernardino, que ahora hemos contratado en arrendamiento a la Comandancia General de la Marina.

La Empresa por mi representada ha venido sustentando, muy respetuosamente, una opinión divergente de la expuesta por el titular del Ministerio, tal como lo asienta también el referido Oficio. Considera la Compañía, basándose para ello en las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, que la reversión no es aplicable al edificio mencionado y su terreno, pero no obstante esto, manifesté al ciudadano Ministro que ella estaba dispuesta a arrendar el edificio a la Comandancia General de la Marina, quedando convenido que no se afectaría por ello el problema de la reversión que quedaría en suspenso.

Por lo tanto, considera la Compañía tambien que efectivamente, la mención en el referido contrato de arrendamiento de que dichos edificio y terreno forman parte de su patrimonio, no resta ni atribuye valor a la posición tanto del Ministerio a su digno cargo como de mi representada en cuanto al problema de la reversión, lo cual me es grato confirmar por medio de la presente.

Con sentimientos de alta consideración, me suscribo,

Atentamente,

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA Ltd.

G. A. Wagner

14-11-63 10

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA
LTD

APARTADO POSTAL CARACAS

Caracas, 15 de Noviembre 1963

2028

Ciudadano
Ministro de la Defensa
Su Despacho.

Con relación al contrato de 6 de Febrero de 1963, por el cual dimos en arrendamiento a ese Ministerio a su digno cargo, el edificio situado en Caracas al final de la Avenida Vollmer, Urbanización San Bernardino, jurisdicción de la Parroquia Candelaria, cumplimos con llevar a su conocimiento a los fines consiguientes, que según consta de documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador, Distrito Federal, el 6 de Noviembre de 1963, hemos vendido dicho edificio a la C.A. Inversiones Shell de Venezuela, la cual está en cuenta del susodicho contrato de arrendamiento.

De acuerdo con lo expuesto, agradeceremos a ese Despacho tenga a bien efectuar los pagos correspondientes a las pensiones mensuales de arrendamiento a partir del presente mes de Noviembre, inclusive, a la mencionada Compañía, propietaria del inmueble arrendado.

De usted muy atentamente,

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA, Ltd.

G.A. Wagner
Presidente

19

Oficina Técnica de Hidrocarburos

Circular N.

Caracas, 27 MAY 1963

154° y 105°

Señor
Representante de la
Creole Petroleum Corporation
Ciudad.

De conformidad con las disposiciones de la Constitución (artículo 105) y de la Ley de Hidrocarburos (artículos 80 y 81) relativas al derecho de reversión que tiene la Nación sobre las tierras, campamentos, instalaciones y demás obras permanentes destinadas a la industria de hidrocarburos, este Ministerio hace del conocimiento de esa Empresa que sobre esos bienes no pueden realizarse enajenaciones, gravámenes, desmantelamientos o abandonos, sin que medie en cada caso la correspondiente solicitud de permiso a este Ministerio y se haya otorgado la respectiva autorización.

Las infracciones a lo dispuesto en esta Circular no sólo darán lugar a la imposición de multas sino a que se tomen otras medidas que los casos particulares aconsejen.

Sírvase avisar recibo.

Atentamente,

Arturo Hernández Grisanti
Encargado del Ministerio de Minas
e Hidrocarburos

JCAA/dl.-
23-5-63.-

6 junio - 1963 20

CIRCULAR.

720 -M.

Caracas, 6 JUN 1963
154° y 105°.

Señor
Representante de la Compañía
Iron Mines Company of Venezuela,
Ciudad.

De conformidad con las disposiciones de la Constitución (artículo 103) y de la Ley de Minas (artículo 61), relativas al derecho de reversión que tiene la Nación sobre las tierras, campamentos, instalaciones, obras y demás mejoras permanentes destinadas al beneficio de las concesiones mineras, este Ministerio hace del conocimiento de esa Empresa que sobre esos bienes no pueden realizarse enajenaciones, gravámenes, desmantelamientos o abandonos, sin que medie en cada caso la correspondiente solicitud de permiso a este Ministerio y se haya otorgado la respectiva autorización.

Las infracciones a lo dispuesto en esta Circular no sólo darán lugar a la imposición de multas sino a que se tomen otras medidas que los casos particulares aconsejen.

Sírvase avisar recibo.

Atentamente,

Arturo Hernández Grisanti,
Encargado del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

JCAA.rogo.

5 junio 1963 21

COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA
LTD.

APARTADO 600 CARACAS

Caracas,
5 de junio de 1.963

5181

Ciudadano
Encargado del Ministerio de Minas
e Hidrocarburos
Su Despacho

Al acusar recibo de su Oficio circular N°656 M. de fecha 27 de mayo de 1963, referente al derecho de reversión que la Nación tiene de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución y de los artículos 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos, esta Compañía tiene el gusto de manifestarle que ella ha venido y continuará actuando de acuerdo con las disposiciones de dichos artículos en cuanto a aquellos bienes sujetos a reversión, en las oportunidades en que ésta sea procedente. Sinembargo, nos permitimos dejar constancia de que ese Despacho ya tiene conocimiento de la divergencia de criterio que al respecto existe entre ese Ministerio y la Compañía sobre la interpretación y consiguiente aplicabilidad de los citados artículos.

De Ud. atentamente,

por: COMPAÑIA SHELL DE VENEZUELA Ltd.

G. A. Wagner
Presidente

28-oct-1963 22

COPIA

DICTAMEN

ASUNTO: Solicitud del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

PROCEDENCIA: Dirección de Justicia y Registro Público.

El ciudadano Encargado del Ministerio de Minas e Hidrocarburos se ha dirigido al titular de este Despacho para solicitar ponga en vigencia "ciertas medidas tales como la abstención de los Registradores de protocolizar documentos contentivos de actos de enajenación o gravamen si no consta expresamente la autorización del Ejecutivo Nacional, la orden a los Registradores de remitir copias certificadas de los documentos que les sean presentadas por los cuales los concesionarios adquiren inmuebles o informaciones periódicas sobre las operaciones realizadas por los concesionarios partiendo de la fecha en que se reciban las instrucciones hacia atras".

En relación a las medidas propuestas, esta Consultoría considera:

Primero: No le ha sido remitido el Oficio No. 1126 de fecha 12 de septiembre de 1962, en el cual el Ministerio de Minas e Hidrocarburos "fija la posición doctrinal del Despacho en lo que se refiere al derecho de reversión del Estado Venezolano en materia minera y petrolera", no obstante haberlo reclamado en Memorándum anterior.

Segundo: De acuerdo con la Ley de Registro Público, al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Justicia, le corresponde "velar por el buen orden y funcionamiento de todas las Oficinas de Registro" (Ar. 4° de

la Ley) y por el cumplimiento de la Ley de Registro Público y de las disposiciones pertinentes del Código Civil y de Leyes especiales". Para dar cumplimiento a estas funciones, el artículo 5° de la Ley autoriza al Ejecutivo Nacional a nombrar Inspectores Nacionales para fiscalizar el funcionamiento del Registro. Fuera de esta función y la de conocer en apelación de las solicitudes de cobro excesivo o indebido de derechos o impuestos de registro (art. 125 de la Ley), la Ley de Registro Público deja en manos del Registrador la interpretación de Ley. Sólo en los casos de duda, en cuanto a la inteligencia y aplicación de la Ley, en los casos concretos que puedan presentarse, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, hacer la correspondiente interpretación. En razón de lo expuesto, este Despacho no puede ordenar a los Registradores que se abstengan de registrar los documentos a que se refiere el Oficio del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Tercero: En el artículo 40 de la Ley de Registro Público se determinan los casos en los cuales los Registradores deben abstenerse de protocolizar documentos. Entre esos casos no se halla el exigido por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Tampoco esa prohibición existe en ninguna ley especial. A su vez, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional impone a los Registradores la obligación de enviar al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República, "copia certifi-

cada de los documentos que los presenten los particulares y de cuyo texto se desprende algún derecho en favor del Fisco Nacional".

En consecuencia, en criterio de esta Consultoría, el Ministerio de Justicia no puede acceder a lo solicitado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Caracas, 28 de octubre de 1963

JOSE ALBERTO ZAMBRANO V.
Consultor Jurídico

JGA/si.-

12-6-64 23

REPÚBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección de Justicia y Registro Público

Caracas, de de 19 64.

155° y 106°

No. 0230-

Ciudadano
Ministro de Minas e Hidrocarburos
SU DESPACHO

Tengo a honra referirme a su oficio N°983 de fecha 9-8-63, referente a la cuestión planteada en el oficio N° 1.126 de fecha 12-9-62; y,en relación con el contenido de ambos, informo a usted que este Despacho ha acogido el criterio de la Consultoría Jurídica del mismo en el sentido siguiente:

"De acuerdo con la Ley de Registro Público, al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Justicia,le corresponde "velar por el buen orden y funcionamiento de todas las Oficinas de Registro" (Art. 4° de la Ley) y por el cumplimiento de la Ley de Registro Público y de las disposiciones pertinentes del Código Civil y de Leyes especiales ". Para dar cumplimiento a estas funciones, el artículo 5° de la Ley autoriza al Ejecutivo Nacional a nombrar Inspectores Nacionales para fiscalizar el funcionamiento del Registro. Fuera de esta función y la de conocer en apelación de las solicitudes de cobro excesivo o indebido de derechos o impuestos de registro (art° 125 de la Ley), la Ley de Registro Público deja en manos del Registrador la interpretación de Ley. Sólo en los casos de duda, en cuanto a la inteligencia y aplicación de la Ley, en los casos concretos que puedan presentarse, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, hacer la correspondiente interpretación. En razón de lo expuesto, este Despacho no puede ordenar a los Registradores que se abstengan de registrar los documentos a que se refiere el Oficio del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

En el artículo 40 de la Ley de Registro Público se determinan los casos en los cuales los Registradores deben abstenerse de protocolizar documentos. Entre esos casos no se halla el exigido por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Tampoco esa prohibición existe en ninguna ley especial. A su vez, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional impone a los Registradores la obligación de enviar al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría

.../...

NO SE TRATE MAS DE UN ASUNTO EN CADA OFICIO.

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección de Justicia y Registro Público

Caracas, de de 1964.

155° y 106°

No. 0230-

General de la República, "copia certificada de los documentos que les presenten los particulares y de cuyo texto se desprende algún derecho en favor del Fisco Nacional". En consecuencia, en criterio de esta Consultoría, el Ministerio de Justicia no puede acceder a lo solicitado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos."

Dios y Federación,

Miguel Angel Burelli Rivas
Ministro de Justicia

JDU/abs
3-6-64

NO SE TRATE MAS DE UN ASUNTO EN CADA OFICIO.

Entre el Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela representado en este acto por el Dr. Arturo Hernández Grisanti, Encargado del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, por el Dr. Andrés Germán Otero, Ministro de Hacienda, el General Antonio Briceño Linares, Ministro de la Defensa Nacional, el Dr. Leopoldo Sucre Figarella, Ministro de Obras Públicas y el Capitán Pablo Miliani, Ministro de Comunicaciones, quienes proceden suficientemente autorizados para este acto por el Consejo de Ministros de la República de Venezuela, en sesión de fecha _____ por una parte; y por la otra, la Iron Mines Company of Venezuela, Sociedad Anónima debidamente organizada, constituída y existente con arreglo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en esta ciudad, como consta del Registro de Comercio N° 514, de fecha 4 de octubre de 1933, publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno del Distrito Federal N° 4570 de 11 de los mismos mes y año, y que a los efectos del presente contrato se denominará "La Compañía", se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERO: "La Compañía" construye actualmente, previo permiso concedido por el Ejecutivo Nacional, la ampliación y modificación del Puerto de Palúa sobre el río Orinoco, en jurisdicción del Distrito Piar del Estado Bolívar, a fin de utilizarlo como Puerto directo de exportación del mineral de hierro que explota en sus concesiones mineras. En razón de dicha construcción, la Estación de Trasbordo existente actualmente en Puerto de Hierro, Distrito Valdés

del Estado Sucre, dejará de ser utilizada como parte integrante del sistema de transporte de "La Compañía". Dicha Estación de Trasbordo, con todos sus anexos y pertenencias fué construída por "La Compañía" en virtud del convenio celebrado con el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Venezuela el día 3 de diciembre de 1945, en el cual "La Compañía" se obligó a devolver al Patrimonio Nacional, al término del convenio, las tierras que el Estado le hubiera cedido y a entregar a éste los fondos que "La Compañía" obtuviera en virtud de expropiación por causa de utilidad pública y todas las instalaciones, muelles, almacenes, hospitales, edificios, patios, obras portuarias y depósitos de la Estación, todo lo cual pasaría al Patrimonio Nacional libre de gravámenes y sin compensación alguna. Ahora bien, a los efectos de regular la entrega adelantada de la referida Estación de Trasbordo a la Nación, las partes han convenido en celebrar al respecto el acuerdo contenido en las cláusulas siguientes.

SEGUNDO: El día 31 de octubre de 1963 "La Compañía" dejará de usar la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro y, por tanto, el día 1º de noviembre del mismo año 1963, ella entregará, en virtud de lo dispuesto en el referido contrato de fecha 3 de diciembre de 1945, a la Nación y esta recibirá libre de gravámenes y sin compensación alguna por su parte la referida Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, con todos sus anexos, muelles, hospitales, edificios, casas, obras portuarias, depósitos y, en general, toda construcción allí existente.

TERCERO: Igualmente, el día 1° de noviembre de 1963, "La Compañía" entregará, en virtud de lo dispuesto en el referido convenio de 3 de diciembre de 1945 a la Nación, y ésta recibirá, libres de gravámenes, cargas y sin compensación alguna, la propiedad de todos los terrenos que la Nación hubiere transferido a "La Compañía" para la construcción de la nombrada Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, así como la propiedad de todos los terrenos y derechos de servidumbre adquiridos por "La Compañía" para la construcción de la referida Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro y todos los títulos anteriores relacionados con dichas propiedades y servidumbres.

CUARTO: Tan pronto como "La Compañía" haya hecho entrega a la Nación de la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, quedarán sin efecto las facilidades y franquicias que el Gobierno Nacional concedió a "La Compañía" mediante el convenio de 3 de diciembre de 1945, relativas al régimen aduanero y a la construcción y funcionamiento de la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro. Igualmente quedarán sin efecto las obligaciones asumidas por "La Compañía" en las cláusulas Primera y Décima Quinta del mencionado convenio de 3 de diciembre de 1945, referentes al pago de cánon de arrendamiento de tierras baldías e instalación y mantenimiento de boyas, luces u otras señales de navegación en el río Orinoco entre Palúa y Boca Grande, en los caños Peñeranales, Mánamo, Macareo y Manamito y en el Golfo de Paria, así como la obligación de mantenimiento de todos los muelles, obras portuarias y demás construcciones que "La Compañía" entregará a la Nación en razón del presente convenio,

ya que los efectos del convenio de 3 de diciembre de 1945 cesan con el presente, a excepción de lo establecido en la cláusula Décima Sexta de aquel, referente a la prórroga del contrato celebrado entre "La Compañía" y el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos de Venezuela con fecha 1° de enero de 1941. En consecuencia, tanto el término del referido contrato de fecha 1° de enero de 1941 como el de los regímenes de aduana aplicables al Puerto de Palúa es el mismo de los derechos que tiene "La Compañía" sus cesionarios o causahabientes sobre todas o sobre cualesquiera de sus concesiones mineras en Venezuela.

QUINTO: Es pacto expreso que una vez extinguidas, por cualquier causa, las concesiones de "La Compañía" de las cuales se obtiene el mineral de hierro que se exportará por el Puerto de Palúa, o una vez que se deje de utilizar definitivamente el referido Puerto para exportar dicho mineral, pasarán al Patrimonio Nacional, libres de gravámenes y sin que la Nación tenga que pagar compensación alguna por ello, las tierras adquiridas por "La Compañía" para la construcción del Puerto o para su servicio y todas las instalaciones, equipos, muelles, almacenes, hospitales, edificios, obras portuarias y depósitos, destinados al servicio del Puerto de Palúa.

SEXTO: Las dudas o controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre este convenio y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con las leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras.

SEPTIMO: Se hacen seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Caracas a los _____ días del mes de _____ de mil novecientos sesenta y tres.

Set 1963 25

NOTA EXPLICATIVA.

A) El 1° de enero de 1941 la Iron Mines Company of Venezuela celebró un contrato con el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos de Venezuela, por un plazo de treinta años, mediante el cual se habilita permanentemente a favor de "La Compañía", sus cesionarios y causahabientes, el Puerto de San Félix, sobre el río Orinoco, así como cualquier edificio que se erezca en el futuro en la zona de San Félix, a los efectos de practicar todas las operaciones de entrada y salida, carga y descarga de buques o aeronaves, en relación con las operaciones de la concesionaria.

Se concedieron a "La Compañía" en dicho convenio una serie de facilidades aduaneras a cambio de lo cual ella se comprometió a: 1) construir y mantener una carretera de uso público entre Palúa y sus concesiones 2) construir y mantener un aeropuerto que pudiera ser utilizado por la aviación civil y militar y 3) construir y mantener un edificio para la aduana y tres casas para los funcionarios de la misma. Tales construcciones serían propiedad de la Nación desde su construcción.

B) El 3 de diciembre de 1945 la Iron Mines Company of Venezuela celebró con el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Venezuela otro contrato a fin de construir una Estación de Trasbordo al sur de la Península de Paria, que se denominó después Puerto de Hierro, donde pudieran llegar barcos de gran calado para cargar el mineral de Marco de la contratista transportado hasta allí en buques de poco calado desde el Puerto de Palúa, en el Orinoco, ya que no existía el dragado de este río.

Mediante este convenio se concedieron a "La Compañía" una serie de facilidades aduaneras para el funcionamiento de la Estación de Trasbordo, ampliándose las de que gozaba según el convenio de 1° de enero de 1941 en el Puerto de San Félix, convenio este cuyo plazo fue ampliado de 30 años al de duración de las concesiones de que es titular "La Compañía".

"La Compañía" se comprometió fundamentalmente, a construir, a sus expensas, la Estación de Trasbordo, a fabricar un edificio para la aduana y dos casas para el personal de la misma, así como a efectuar un estudio para la instalación de boyas y señales de navegación en el río Orinoco entre Palúa y Boca Grande, en los caños Pedernales, Mánamo, Macareo Manamito y

en el Golfo de Paria; a mantener dicho sistema una vez instalado y a pagar un canon de arrendamiento por las tierras baldías que ocupara.

Se pactó expresamente que "terminado este convenio, concluirán también con él las facilidades portuarias estipuladas para dicha estación de depósito, trasbordo o transferencia y se devolverán al Patrimonio Nacional las tierras que el Estado hubiera cedido a "La Compañía", entregándose a aquél los fundos que la empresa obtuvo en virtud de expropiación por causa de utilidad pública y todas las instalaciones, muelles, almacenes, hospitales, edificios, patios y las obras portuarias o depósitos en esa estación, los cuales pasarán al dominio de la Nación libres de todo gravamen."

C) El 3 de septiembre de 1962, la Iron Mines Company of Venezuela propuso ampliar el Puerto de Palúa para hacer directamente desde allí el despacho de su mineral de hierro en bodegas de gran calado y abandonar, en consecuencia, la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro. El Ejecutivo Nacional consideró conveniente el cambio propuesto y autorizó la ampliación del Puerto de Palúa.

La concesionaria solicitó igualmente celebrar un convenio que regulase la entrega anticipada a la Nación del Puerto de Hierro, sobre las bases de que: a) se le autorizase para transportar algunos equipos desde dicha Estación de Puerto de Hierro, antes de ser entregada, hasta el Puerto de Palúa, para ser instalados allí; b) devolver al Patrimonio Nacional, sin compensación, las tierras obtenidas mediante expropiación y las que la Nación le hubiera entregado, y que se le indemnizara por las tierras y servidumbres adquiridas de los particulares; c) se la liberase de las obligaciones, especialmente la de mantener el sistema de señales en el Orinoco y el Golfo de Paria, nacidas en el contrato de 3 de diciembre de 1945, el cual quedaría sin efecto, salvo en lo que se refiere a la prórroga del contrato de 1° de enero de 1941.

Este Despacho sostuvo frente a la concesionaria que, en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Minas y en el contrato de 3 de diciembre de 1945, si se abandonaba la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, debían pasar al Patrimonio Nacional libres de gravámenes y sin indemnización alguna: a) todas las instalaciones, obras y construcciones existentes en la mencionada Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, sin que "La Compañía" tuviera derecho a trasladar ningún equipo hasta el Puerto de Palúa; b) la propiedad

15.

de todos los terrenos y las servidumbres, destinados al servicio de la Estación, ya hubiesen sido entregadas por la Nación o adquiridas de los particulares mediante expropiación o en cualquiera otra forma.

Todo lo anterior se apoya, además, en el hecho de haber solicitado y obtenido la concesionaria autorización de la Administración del Impuesto sobre la Renta para depreciar la parte no amortizada de los bienes por abandonar en un plazo extraordinario de dos años y no en el ordinario de 15 años previsto inicialmente.

Después de varias conversaciones, "La Compañía" ha convenido en entregar a la Nación el día 1° de noviembre de 1963, la totalidad de los terrenos adquiridos para la construcción de la Estación de Trasbordo de Puerto de Hierro, así como la totalidad de las instalaciones y equipos allí existentes, desistiendo de su reclamación de indemnización y de su pretensión de trasladar algunos equipos hasta el Puerto de Palúa.

De acuerdo con el estado actual de las negociaciones entre este Despacho y la Iron Mines Company of Venezuela se ha preparado el proyecto de contrato que se acompaña, con inclusión, además, de una cláusula expresa de reversión al Patrimonio Nacional, libres de gravámenes y sin compensación alguna, de todos los terrenos adquiridos para construir el Puerto de Palúa o para su servicio, así como de todas las instalaciones, obras, edificaciones, construcciones y equipos destinados al servicio del referido Puerto, una vez que se extingan las concesiones de la contratista o que deje de utilizarse el Puerto de Palúa para la exportación de hierro o otros fines propios de las referidas concesiones. Esta cláusula amplía favorablemente para la Nación las disposiciones que sobre reversión contiene la Ley de Minas vigente.

9/63

9 julio 1965 26

144 c.j.

PARA LA OFICINA TÉCNICA DE HIDROCARBUROS

ASUNTO: Reversión de bienes inmateriales, tales como posesión y servidumbres.

Esta Consultoría ha sostenido que de la reversión en las concesiones, tanto mineras como de hidrocarburos, no quedan excluídos los bienes de naturaleza inmaterial. Este criterio se expuso con ocasión del juicio interdictal promovido por la N.C.V. Ltd. contra la Nación venezolana en la oportunidad en que fueron caducadas y ocupadas las concesiones de níquel "Carmelas" y "San Onofre". (Memo Nº 36 C.J. de 27-2-62). Entonces se dijo que la ocupación por la Nación de los terrenos que para los trabajos de las concesiones había utilizado la ex-concesionaria, no configuraba una perturbación ni un despojo, por cuanto esta tenía la posesión de los mencionados terrenos, la cual continuaba el Estado por el derecho de reversión de todas las mejoras de las concesiones y dentro de ellas debe considerarse incluída la posesión adquirida por los concesionarios.

Ahora el problema aparece con relación a las servidumbres constituídas por los concesionarios de hidrocarburos, en el momento en que las concesiones en cuyo beneficio se constituyeron son renunciadas. Creemos que el criterio expuesto en el caso de las concesiones "Carmelas" y "San Onofre" es valedero en el presente caso y que la Nación debe suceder, por reversión, a los ex-concesionarios, entendiéndose con los propietarios de los terrenos en cuanto a los pagos de cánones con posterioridad a la renuncia de las concesiones u oponiéndoles el derecho que las servidumbres otorgan, sin pagar ninguna cantidad, si los concesionarios han cancelado de una sola vez la totalidad del precio de la servidumbre por toda su duración.

Generalmente las servidumbres se constituyen por el término de las concesiones, lo cual debe entenderse como el plazo de duración ordinario de las mismas. Si el término es otro, hasta que se cumpla, tiene la Nación el derecho a la servidumbre.

Caracas, 9 de julio de 1965

A.S.C.

Juan José Navarrete Senior
Consultor Jurídico

Papel de trabajo 27

EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE HIDROCARBUROS.

Por cuanto las tierras, construcciones obras e instalaciones permanentes adquiridas con destino a la exploración o explotación de los hidrocarburos, sus mejoras y accesorios comprendidos bienes incorporales, por mandato de la Ley deben revertir en plena propiedad al Estado Venezolano, sin indemnización alguna, al extinguirse las concesiones por cualquier causa, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha sostenido, reiteradamente, que por tal motivo debe solicitarse permiso del Ejecutivo Nacional para que éste, si lo juzga conveniente, conceda o no la autorización correspondiente para su disposición, gravamen, modificación, destrucción o abandono. Igualmente se ha mantenido el criterio de que debe también ser aprobado cualquier otro acto que pueda significar una disminución de los derechos o mejoras constituidos con ocasión de los trabajos y actividades relacionadas con las concesiones, incluidos derechos de propiedad, de servidumbre, posesión y otros semejantes.

En efecto, dicho principio debe hacerse siempre efectivo ya que su incumplimiento acarrearía pérdidas económicas para el país.

Tal aserto, por lo demás, tiene amplio basamento legal. Asi vemos que tanto el artículo 103 de la Constitución Nacional como el 80, primer aparte, y 81, último aparte, de la Ley de Hidrocarburos, pautan en forma terminante que el Estado adquirirá indiscutiblemente en plena propiedad las tierras, obras e instalaciones permanentes que dichas disposiciones señalan. De allí que por ser imperativ

la reversión, mal puede admitirse que la Nación recibiría al extinguirse las concesiones, tan solo los bienes que las empresas petroleras dejasen, pues si así fuere, los concesionarios antes de ocurrir la extinción podrían a su arbitrio disponer de ellos en su beneficio.

Del mismo modo, el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos al conceder al Ejecutivo Nacional la facultad de inspeccionar y fiscalizar todos los trabajos y actividades relacionados con la industria petrolera, indudablemente le está reconociendo el derecho de conocerlos y aprobarlos previamente, como único medio para que pueda ejercer eficientemente dicha atribución. De no ser así, tal potestad quedaría como letra muerta de la Ley, es decir, completamente inoperante.

Si al Estado se le privara de su facultad de otorgar o no la autorización mencionada, se incurriría en flagrante violación de los artículos citados, puesto que no podría realizarse debidamente la incorporación de los bienes al patrimonio nacional y dejaría inoficiosa la característica de imperatividad que tienen las disposiciones legales analizadas. Por tanto, es nuestro criterio que el articulado mencionado soporta suficientemente, la obligatoriedad de la autorización.

Ahora bien, es el caso, de que recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia dictadas a fines del año 1963, podrían dar pie para posibles contravenciones al principio aludido, ya que en ellas se asienta que lo que tiene el Estado es una simple expectativa de derecho , al contrario de la opinión sustentada por este Despacho de que es un derecho cierto y actual, que necesariamente está ma-

terializado desde su orígen puesto que hay la seguridad de que los referidos bienes pasarán en plena propiedad a la Nación en el momento en que se extingan las concesiones, lo cual se producirá indefectiblemente por estar limitadas en el tiempo. El derecho es pues, repetimos, absoluto, ni siquiera condicionado, ya que la condición es un hecho futuro e incierto, mientras la reversión es un hecho fatal de indiscutible ocurrencia al extinguirse las concesiones por cualquier causa. Por ello, en ese orden de ideas, el Estado, quien en definitiva será pleno propietario por disposición expresa de la Ley, tiene que intervenir con su autorización para que se pueda verificar cualquier operación con los bienes que le son propios y que los concesionarios, no obstante haberlos construido o adquirido, a nuestro juicio, solo tienen sobre ellos una especie de usufructo aplicado a la industria; bienes que, por otra parte, no los recibe el Estado a título gratuito puesto que, además de constituir una ventaja legal a su favor, permite también que sean amortizados.

Es preciso hacer notar, que si los concesionarios están obligados por la Ley de Hidrocarburos a solicitar autorización para instalar o construir, es decir, para el surgimiento de algo nuevo que al extinguirse las concesiones pasarán en plena propiedad al Estado, por simple lógica, para la enajenación, desmantelamiento, destrucción, etc. de esos bienes que entrarán integramente al patrimonio nacional, debe requerirse de igual modo la autorización respectiva para impedir asi que se haga nugatoria la reversión.

No obstante lo antes expresado, con el fin de evitar dudas de todo género, este Despacho, tomando en cuenta la facultad reglamentaria que consagra la atri-

bución 10° del artículo 190 de la Constitución Nacional, ha elaborado un proyecto de Reglamento Parcial de la Ley de Hidrocarburos para que sea considerado en Consejo de Ministros.

Dicho Reglamento se fundamenta en los artículos 68, 80, primer aparte y 81, último aparte de la Ley de Hidrocarburos, a los cuales hace referencia en su parte dispositiva. También encuentra base en el artículo 103 de la Constitución Nacional, pero no lo cita en su parte dispositiva, primeramente, porque tratándose de un Reglamento podría dar lugar a que se pensara que está reglamentando un artículo inserto en el título relativo a las garantías constitucionales; y en segundo término, porque la propia Ley de Hidrocarburos consagra el contenido de ese artículo constitucional en las disposiciones a que antes se ha hecho referencia.

Consta el Reglamento de tres artículos, el primero de los cuales señala los diferentes casos en que se requiere la autorización del Ministerio de Minas e Hidrocarburos; el segundo, se contrae a la obligación de los concesionarios de presentar a los Registradores, Notarios, Jueces y demás funcionarios que protocolizan, autentican o reconocen documentos constitutivos de los actos indicados en el artículo 1°, la mencionada autorización del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, requisito sin el cual los funcionarios dichos deberán abstenerse de dar curso a los aludidos instrumentos; y el tercero se refiere a las penas por las infracciones al Decreto, las cuales se impondrán de acuerdo con lo establecido en los artículos 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Hidrocarburos.

RAUL LEONI

Presidente de la República de Venezuela,

en uso de la atribución 10° del artículo 190 de la Constitución Nacional, y en consideración al contenido del artículo 103 ejusdem, en Consejo de Ministros,

Considerando:

Que las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de los hidrocarburos pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva;

Considerando:

Que del mismo modo la Nación se hará plena propietaria de todas las obras e instalaciones permanentes que hayan construido o adquirido los concesionarios de hidrocarburos;

Considerando:

Que la reversión al Estado de la estructura con la cual opera la industria de los hidrocarburos, conlleva la de todas sus mejoras y accesorios, incluidos bienes incorporales;

Considerando:

Que la reversión es imperativa por mandato de la Ley y confiere al Estado un derecho cierto y actual que se consolida con la plena propiedad cuando esta se realice conforme a las normas legalmente establecidas;

Considerando:

Que la reversión al patrimonio nacional de los bienes y derechos referidos

no es a título gratuito, sino una ventaja económica establecida por la Ley a favor del Estado, quien además, permite a los concesionarios de los hidrocarburos que amorticen tales bienes con los beneficios provenientes de la explotación de los yacimientos;

Considerando:

Que el conocimiento y previa aprobación de todos los trabajos y actividades relacionados con la industria de los hidrocarburos, son indispensables para que el Ejecutivo Nacional ejerza eficientemente la facultad de inspección y fiscalización que le atribuye la Ley.

DECRETA:

Artículo 1°.- A los efectos del cumplimiento de los artículos 68, 80, primer aparte, 81, último aparte, de la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales sobre la materia, los concesionarios sin la autorización previa del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, no podrán:

a) Disponer, gravar, modificar, destruir o abandonar las instalaciones y obras permanentes que hayan sido construidas en las parcelas concedidas.

b) Disponer, gravar, modificar, destruir o abandonar las instalaciones y obras que hayan sido construidas en relación con los trabajos y actividades de exploración, explotación, manufactura o refinación, transporte y manejo de las sustancias a que se refiere la Ley de Hidrocarburos; y

c) Ejecutar cualquier otro acto que pueda significar una trasmisión y una disminución de los derechos o mejoras constituidos o adquiridos con ocasión

de los trabajos y actividades relacionados con las concesiones de hidrocarburos, incluídos derechos de propiedad, servidumbre, posesión y otros semejantes.

Artículo 2°.- Los concesionarios de hidrocarburos no podrán otorgar ningún documento contentivo de las operaciones a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo anterior sino después de haber presentado la autorización del Ministerio de Minas e Hidrocarburos a que se contrae el mencionado artículo. Los Registradores, Notarios, Jueces o cualquier otro funcionario que deban protocolizar, autenticar o reconocer tales instrumentos, no les darán curso sin la presentación de dicha autorización de la cual deben dejar constancia en las notas respectivas.

Artículo 3°.- Las infracciones al presente Reglamento serán penadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Hidrocarburos.

Dado, firmado, etc.

Caracas,

JJNS/ASC/mbv.

15 mayo 1964

28

EL MEDIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE [illegible] POR CONCESIONARIOS EXTRANJEROS Y PETROLERA

1) Planteamiento del problema

Al extinguirse la concesión minera o petrolera, por cualquier causa, (vencimiento del término, renuncia del concesionario, caducidad) la Nación tiene derecho a la reversión de los bienes afectados a la misma. Este poder de la Nación, que consiste en reincorporar a su patrimonio todos los bienes relacionados a la explotación de la concesión, está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional, en forma general, en el artículo 61 de la Ley de Minas, y en el aparte único del artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos.

Sin embargo, ¿cómo protege el Estado su derecho a la reversión mientras dura la concesión? En efecto, si se interpretan las disposiciones legales mencionadas empleando que el Estado solamente tiene algún derecho sobre los bienes afectados a la concesión al extinguirse ésta, y que durante el período de vigencia de la misma, el concesionario tiene plenas facultades de disposición sobre los mismos, el derecho de reversión del Estado corre el riesgo de hacerse nugatorio, ya que el concesionario podría enajenar todos los bienes haciendo ilusorio el derecho del Estado.

Habría, entonces, que llegar a la conclusión de que el Estado tiene un poder que no puede ejercer por falta de medios legales, y esto iría contra el espíritu de la Constitución que ha consagrado el principio de la reversión. Si el poderdante pregunta ésto, dile en una deposición concreta de dentro de un [illegible] poder efectivo.

2) Intento de solución de lege lata

El Ministerio de Fomento o Hidrocarburos ha tratado de resolver el problema, dentro de los términos de la legislación vigente, exigiendo en los contratos que soliciten del Despacho un permiso previo a todo acto de disposición o contrato o acto unilateral del concesionario que lo involucre a él o a sus bienes afectados a obras permanentes afectadas a la concesión, tales como hipotecas de los concesionarios, solicitudes de permiso para el cambio de control del concesionario a terceros, donación a organismos públicos o particulares, Autoridades, etc. Las disposiciones legales referentes a la reversión han sido interpretadas extensivamente por el Ministerio, aplicándolas, aún en el caso de inmuebles ubicados fuera del perímetro de la concesión.

El procedimiento seguido hasta ahora en los casos planteados, ha sido solicitar un informe económico previo para determinar si conviene o no a la Nación conceder el permiso para la enajenación correspondiente desde el punto de vista de la cuestión impositiva, en el sentido de que si el bien es enajenado, la Nación percibe la mitad de su valor por concepto de cargas fiscales mientras que, si el bien revierte al Estado, por considerarse que la voluntad de realizar un acto de disposición, constituye una desafectación de la concesión, la Nación podría adquirir una carga económica inconveniente o desventajosa, o por el contrario en su valor total, sin desventaja alguna.

Cuando el concesionario ha efectuado actos de disposición sobre los bienes, sin el permiso previo del Ministerio, se ha procedido a la imposición de multas, particularmente con base en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos en concordancia con el ordinal 9° del artículo 59 ejusdem, por infracción del aparte único del artículo 80 sobre reversión.

2) Posición de la jurisprudencia de la Corte Suprema

Tres decisiones de la Corte Suprema, no obstante, han sido contrarias a la doctrina de la administración pública. Por sentencia del 5 de diciembre de 1963, la sala Político-Administrativa declaró nula la Resolución No. 525, del 5 de septiembre de 1962, del Ministerio de Minas e Hidrocarburos que fundada en los artículos 80 y 59, ordinal 9°, impuso una multa de Bs. 4.000,00 a la Mene Grande Oil Company por desmantelar la estación de recolección Lamar No. 1, ubicada en Lagunillas, Distrito Bolívar del Estado Zulia antes de haber obtenido la autorización de la respectiva Inspectoría Técnica. Otra sentencia del 12 de diciembre de 1963, declaró nula, también por ilegalidad, la Resolución No. 937, de fecha 9 de octubre de 1963, del Ministerio que impuso una multa de Bs. 5.000,00 a la Compañía Shell de Venezuela Limited, basándose dicha Resolución en los artículos 80 y 59, ordinal 9° de la Ley de Hidrocarburos, por desmantelamiento, sin permiso, del Hospital Shell, ubicado en Mene Grande, Distrito Baralt del Estado Zulia. Finalmente, la decisión de la misma Sala del 12 de septiembre de 1963, declaró nula la Resolución No. 822, del 5 de septiembre de 1962, del Ministerio, que impuso multa de Bs. 3.000,00 a la Mene Grande Oil Company por desmantelar la estación de recolección Peten No. 1, ubicada en Lagunillas, Distrito Bolívar del Estado Zulia, fundada en los artículos 85 y 80 de la Ley y 25 del Reglamento. El fundamento de las sentencias, muy parecidas en su forma y contenido, fue el mismo en los tres casos, a saber: que las disposiciones citadas por las Resoluciones no imponían a los concesionarios el requisito del permiso del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y que el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos solamente contenía una "expectativa de derecho" en favor de la Nación que sólo se materializa al fin del término de la concesión, que alcanza sólo

las obras, por medios que en muchos casos existieron en las áreas concedidas y que no alegan sin embargo el derecho que tienen los concesionarios, durante la vigencia de la misma, de hacer a dichas áreas todas las construcciones, perforaciones y demoliciones que puedan ser útil o conveniente a los intereses de la explotación petrolera".

Esta declaración de la sentencia, que sin duda, se pronuncia sobre el contenido general del artículo 60 L.H., amenaza indudablemente la efectividad del ejercicio de los derechos de la Administración al extinguirse la concesión.

d) Solución de ley forzada

Con las razones anteriormente expuestas, puede considerarse que para llegar a una posición que robustezca los derechos de la Nación durante la vigencia de la concesión se hace necesario una reforma de la Ley, mediante un artículo que bien podría incluirse en la nueva Ley de Registro Público y que estaría concebido más o menos así:

"Artículo . . . : "Los Registradores deberán abstenerse de protocolizar documentos constitutivos de cualesquiera actos de disposición sobre bienes inmuebles o sobre pertenencias vinculadas a una concesión minera o petrolera mientras hayan sido denunciados de alla sin la presentación del permiso previo del Ministerio de Minas e Hidrocarburos".

El fundamento de tal disposición diferente de las normas comunmente aceptadas y legales sobre convención, ya citadas, y de la conveniencia de proteger el bien involucrado durante el período de vigencia de la concesión. Así mismo, a todo, en el estado actual de la jurisprudencia, la Corte Suprema, la ha negado hasta la posibilidad de vacilar los actos conservatorios de sus derechos que consagra el Código Civil en su artículo 1.210 al acreedor condicional, al aplicar el criterio de "la expectativa de derecho".

Caracas, 19 de Mayo de 1964

A./c.c.

Raúl Ramírez
Abogado

15 Mayo 1964 + 29

74 C.J.

PARA EL DIRECTOR GENERAL:

ASUNTO: Procedencia de la inclusión de un artículo en el proyecto de Ley de Registro Público, referente al control por la Nación sobre los actos de disposición de los concesionarios en materia minera y petrolera.

En relación al asunto de la referencia me permito expresarle lo siguiente:

Como es de su conocimiento, este Ministerio ha estado interesado en que el de Justicia, tome las medidas necesarias, para que los Registradores se abstengan de protocolizar los documentos por los cuales se enajenan o gravan bienes afectados a concesiones petroleras o mineras, basándose para ello en disposiciones de la actual Ley de Registro Público. El Despacho de Justicia no ha actuado al respecto, al parecer por opinar que no hay asidero legal para ello. Aún cuando nuestro criterio es el mismo en cuanto al fundamento que da la citada Ley para impedir el registro de los instrumentos mencionados, teniendo conocimiento de la próxima introducción en las Cámaras Legislativas de un proyecto de Ley de Registro Público, sugerimos que el señor Ministro se dirija al de Justicia propiciándole hacer las diligencias pertinentes para que se incluya en dicho proyecto, un artículo, que en forma expresa consagre la facultad que a nuestro juicio existe en la Ley vigente.

Al efecto, remito a usted un informe preparado por el doctor Raúl Ramírez, abogado de esta Consultoría, donde se inserta el texto del artículo en cuestión, el cual podría acompañarse al oficio que envíe el ministerio al de Justicia.

Para dicha comunicación se sugiere el texto que a continuación se expresa.

"Tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle lo siguiente:

Ha sido un principio reiteradamente sostenido por este Ministerio

que las tierras, construcciones e instalaciones para asientos de las concesiones petroleras o mineras, por mandato de la Ley deben revertir al Estado Venezolano, sin indemnización alguna, al extinguirse las concesiones por cualquier causa, y que por tal motivo, debe solicitarse permiso del Ejecutivo Nacional para que éste si lo cree prudente de su autorización para el desmantelamiento, destrucción, enajenación o traslado. Este principio con amplio basamento legal debe hacerse efectivo a todo trance ya que su incumplimiento acarrearía pérdidas económicas para el país.

En efecto, tanto el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, el 61 de de la Ley de Minas, así como el 105 de la Constitución, pautan en forma terminante que el Estado adquirirá indefectiblemente las tierras y las instalaciones permanentes que dichas disposiciones señalan. De allí que por ser imperativa la reversión, mal puede pensarse que la Nación recibirá, al extinguirse las concesiones, tan solo los bienes que las empresas petroleras o mineras determinen, pues si tal fuere el caso, los concesionarios, antes de que ocurra la extinción, tendrían buen cuidado de retirarlos o venderlos para mayor beneficio. Si al Estado se le privara de su facultad de dar o no su autorización para los desmantelamientos, enajenaciones, etc., se incurriría en flagrante violación de los artículos citados puesto que no podría hacerse efectiva la incorporación de los bienes al patrimonio nacional y se haría ilusoria la característica de imperatividad de entregar los bienes al Estado que tienen las disposiciones analizadas. Ahora bien, es el caso que recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia dictadas en el mes de diciembre de 1983, dan pie para posibles contravenciones al principio analizado, ya que en ellas se afirma que lo que tiene el Estado es una simple expectativa de derecho, al contrario de lo sostenido por este Despacho de que es un derecho actual, puesto que hay la seguridad de que pasarán a la Nación las tierras y obras permanentes, cuando transcurra un plazo, es decir, -cuando ocurra la extinción de las concesiones-. El derecho es puro, perpetuo, absoluto, no alguno condicionado, puesto que la condición es un hecho futuro e incierto y la reversión es un hecho fatal de indiscutible ocurrencia -al extinguirse las concesiones por cualquier causa-. En este orden de ideas, el Estado, quien en definitiva será el propietario por disposición expresa de la Ley, tiene que intervenir con su autorización para que se pueda hacer algo con los bienes que le serán propios y que los concesionarios no obstante haberlos construido o adquirido, tan so-

lo tienen una especie de usufructo, aplicado a la industria y que a mayor abundamiento por el hecho mismo de ir amortizándolas, su reversión al Estado no lo es a título gratuito.

Además, se puede agregar que si los concesionarios están obligados por la Ley de Hidrocarburos a solicitar la autorización para instalar o construir, es decir, para el hecho positivo del surgimiento de algo nuevo que al extinguirse las concesiones irá a formar parte del patrimonio del Estado, por simple lógica, también es necesaria la autorización para enajenar, desmantelar, destruir o desafectar bienes que al cumplimiento de un plazo estarán definitivamente incluidos en el patrimonio nacional.

Con el objeto de hacer más efectivo el cumplimiento de las disposiciones mencionadas, este Ministerio fundándose en disposiciones de la vigente Ley de Registro Público, solicitó del Despacho a su cargo tuviera a bien instruir a los funcionarios de Registro para que se abstuvieran de protocolizar documentos contentivos de actos de disposición sobre bienes afectos a concesiones mineras o petroleras sin la previa presentación de la autorización escrita de este Ministerio, pero quien por motivo de interpretación de las referidas disposiciones de la mencionada Ley de Registro, ese Despacho no se pronunció sobre lo pedido. En tal virtud, independientemente del contenido de los artículos de la citada Ley y del pedimento anterior, en la seguridad de que no escapará a usted la trascendencia del principio contenido por este Ministerio, y en conocimiento de que se está preparando un proyecto de reforma de la Ley de Registro para su sometimiento a la consideración de las Cámaras Legislativas, me dirijo a usted para solicitar su colaboración en el sentido de que imparta las instrucciones pertinentes, para que se tomen las medidas necesarias a la inclusión en el proyecto, de un artículo que contribuya al cumplimiento por parte de los concesionarios, de su obligación de solicitar el permiso correspondiente a este Ministerio, en los casos de enajenación de los bienes preindicados.

El texto del artículo en cuestión es el siguiente:

"Artículo . . . "Los Registradores deberán abstenerse de protocolizar documentos contentivos de cualesquiera actos de disposición o grava-

...os sobre bienes inmuebles u obras permanentes vinculados a una concesión minera o petrolera, aunque hayan sido desafectados de las mismas, sin la presentación del permiso previo del Ministerio de Minas e Hidrocarburos".

Caracas, 15 de mayo de 1964.

Juan José Navarrete Senior
Consultor Jurídico Encargado

JJNS/ero

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACION
CONSULTORIA JURIDICA

30

6 Set - 1965

No. CJ-

ACTA DE RECEPCION DE LA ESCUELA "RAFAEL MARIA BARAIT".

En la ciudad de Caracas, a seis de septiembre de 1.965, reunidos en el Despacho del Ministerio de Educación; el Doctor José Manuel Siso Martínez, Ministro de Educación, en representación del Ejecutivo Nacional, y el señor Carmichadl Charles Pocock, en su carácter de Presidente de la Compañía Shell de Venezuela Ltd., Compañía Anónima Concesionaria de Hidrocarburos, domiciliada en el país, declaran: Como resultado de las conversaciones sostenidas, y de la correspondencia cruzada sobre el mismo fin, tendientes a la entrega del Edificio y terreno - donde funciona la Escuela "Rafael María Baralt", ubicada en el Municipio Cabimas, Distrito Bolívar del Estado Zulia, construída en terrenos de la Compañía, por ésta, el Ministerio declara, que a partir de esta fecha y conforme a esta Acta de Recepción, entra en posesión por tiempo indefinido, del inmueble citado, - con todas sus adherencias y pertenencias, donde funciona la Escuela "Rafael María Baralt", la cual en adelante dependerá de - ese Despacho.

Conforme a la estimación hecha por el Ministerio, la Compañía Shell sufragará el costo de sostenimiento de la mencionada Escuela durante los 14 meses contados a partir del lo. de septiembre del corriente año, vencidos los cuales cesará toda obligación para la Compañía a este respecto, quedando a salvo que será de su cargo cualquier obligación eventual originada con anterioridad a esta Acta de Recepción.

Serán por cuenta de la Compañía Shell los trabajos de pintura, arreglo de sanitarios, realambrado de las instalaciones eléctri

cas y encementado del patio frente al escenario del Edificio requeridos para el reacondicionamiento para el momento de su entrega.

La Compañía Shell entregará también 300 pupitres y 300 sillas plegables nuevos.

Se hace constar que conforme a los cálculos previamente hechos por el Ministerio las obligaciones totales cuyo pago sufragará la Compañía alcanzan a la suma de TRESCIENTOS SESENTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 363.250,00), integrada por el pago de funcionamiento de la Escuela (Bs. 308.000,00) y el reacondicionamiento del edificio y dotación de muebles (Bs. 55.250,00).

La Compañía Shell de Venezuela procederá a pagar todas las prestaciones legales y contractuales a los miembros del actual personal docente de la Escuela que el Ministerio de Educación decida incorporar a su servicio. En cuanto a los maestros que no vayan a ser utilizados por el Ministerio la Compañía procederá a reubicarlos en otras áreas si ese fuera el deseo de ellos. Finalmente, la Compañía otorgará cualesquiera documentos que fueren necesarios conforme a las leyes a favor de la Nación en relación con el inmueble.

Se hacen cinco ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y a un solo efecto.

J. M. Díaz Martínez
Ministro de Educación

Carmichael Charles Pocock
Presidente de la Compañía
Shell de Venezuela Ltd.

DEBE TRATARSE MAS DE UN ASUNTO EN ESTE OFICIO

22-9-1965

31

Dirección General

2639

Caracas, 2 [illegible] 1965

156 y 107.-

Ciudadano
Director General del
Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales
Su Despacho.-

En atención al contenido de su comunicación distinguida con el No. 00004-A de fecha 19 de mayo último, llevo a su conocimiento que este Ministerio está actualmente terminando los estudios definitivos acerca del problema de la entrega de bienes sujetos a reversión, pero no obstante, considera que por los momentos, ese Instituto puede adoptar la forma de Acta de Recepción Provisional, conforme a copia adjunta de instrumento suscrito por el Ministerio de Educación.

En esta misma fecha, se ha dirigido comunicación a las empresas Mene Grande Oil Company y Creole Petroleum Corporation confiriéndoles la autorización solicitada, para que procedan a efectuar la entrega respectiva, concediéndoles a la vez la exoneración de los derechos de importación que puedan recaer sobre los materiales utilizados en la construcción de los inmuebles correspondientes, haciéndola extensiva a dicho Instituto.

Atentamente,

Manuel Pérez-Guerrero
Ministro.

JJM/berr.-

Dirección General

22 set. 1965

Caracas,

156 y 107.-

Señores
Apoderados de las Compañías
Mene Grande Oil Company y
Creole Petroleum Corporation
C i u d a d.-

En contestación de su solicitud de fecha 12 de mayo de 1965, este Ministerio autoriza a las empresas representadas por ustedes para efectuar la entrega a que se contrae su aludida representación y con respecto a la exoneración de los derechos de importación que pueden recaer sobre los materiales utilizados en la construcción de los inmuebles correspondientes, extensiva al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se concede conforme a lo establecido por el parágrafo 2º del artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos en concordancia con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la letra c) del artículo 124 de la Ley de Aduanas.

Atentamente,

Manuel Pérez-Guerrero
Ministro

JJNS/barr.-

21-10-65

33

ALGO MAS SOBRE EL DERECHO DE REVERSION

Se remite una copia de este trabajo al Ministerio de Minas por instrucciones del Dr. Juan P. Pérez Alfonzo, Jueves 21 de octubre de 1965.

21-10-68 33

DERECHO DE REVERSION EN LAS CONCESIONES

Fundamento.-

La situación jurídica creada por la concesión determina el derecho de reversión, cuando la ley o el acto jurídico no modifican directa o indirectamente -por interpretación- ese derecho implícito. El concedente actúa por y para el concesionario y, de consiguiente, moviéndose dentro del esquema económico creado por la situación jurídica de la concesión, en sus previsiones económicas incluirá los gastos para cubrir las consecuencias de la reversión.

Además, el derecho escrito venezolano confirma expresa y ampliamente el fundamento jurídico implícito del derecho de reversión en las concesiones mineras, tanto en la Constitución Nacional como en las leyes especiales respectivas. - En relación a los hidrocarburos las disposiciones son las siguientes:

> Art. 103, C.N.: "Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de - concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna al extinguirse por - cualquier causa la concesión respectiva".
>
> Art. 80, L. Hidr.: "...la Nación readquirirá, sin pagar indemnización alguna, las pertenencias concedidas y se hará propietaria, del mismo modo, de todas las obras permanentes que en ellas se hayan construído".

En todo esto se hace evidente el antiquísimo principio jurídico de que lo accesorio ha de seguir a lo principal, en razón de la conveniencia social y el mejor uso que ha de dar

./....

se a los bienes que interesan a la humanidad (1) Y tan es principalísimo el patrimonio minero de los venezolanos que, por su importancia, se mantiene dentro del dominio público de uso privado de la Nación, con carácter inalienable e imprescriptible.

Cuando a los particulares se otorgan derechos de explotación sobre porciones delimitadas de ese patrimonio intransferible de la Nación, todo aquello que se le agregue, se hace parte integrante del derecho principal, por razones de interés social. En el derecho concesionario esta accesión se realiza sin pagar indemnización alguna, porque ningún daño se ocasiona al concesionario, que sabe que ha de devolver el derecho principal que explota, con todos sus accesorios.

En la concesión, el derecho principal no sale del patrimonio del concedente, sino que esa concesión confiere al concesionario el derecho a explotar la porción que recibe, por un término fijo que, sin embargo, puede terminar antes por renuncia o caducidad. El derecho principal que sólo se restringe por el derecho de explotación otorgado, se devuelve o revierte sin restricción alguna, pero con sus accesorios, al vencimiento de la concesión.

Modalidad de la Reversión.-

El derecho de reversión no es un derecho puro y simple, puesto que no se realiza de inmediato, sino que ha de a

./....

(1) El principio lo consagraba ya el adagio latino que, según lo formuló el Digesto, dice: "Accessorium sequitur suum principale", l. 26 # 1 de acquir. rer. dom.

poseer el momento en que se reintegre el derecho principal - cuando se extinga, por cualquier causa, el derecho de explotación del concesionario, consolidando el Estado su dominio sobre esa parte de su patrimonio minero.

De consiguiente, es preciso determinar cual sea la modalidad que restringa al derecho de reversión para conocer las facultades que tiene el Estado mientras no se realiza ese derecho.

El término y la condición son las dos modalidades que la doctrina y la ley distinguen con toda claridad. En las dos existe el hecho futuro que impide que el derecho sea puro y simple. Pero, la diferencia entre una y otra modalidad se encuentra en la certidumbre de que el hecho se cumpla. Cuando existe la certidumbre la modalidad que afecta al derecho es el término, en tanto que cuando el hecho futuro se puede o nó realizar, esa incertidumbre afecta al derecho como una condición (2).

Muchísimas consecuencias importantes y de diferentes efectos se producen en el derecho según lo afecte un término o una condición. Se hace así necesario hasta el empleo de un lenguaje distinto, cuando se refiere a una u otra modalidad.

./....

(2) Art. 1197, C.c. "...acontecimiento futuro e incierto", caracteriza la condición. El término, como no lleva dudas de que el hecho ocurrirá, "no suspende la obligación, y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma", Art. 1211, C.c.

Para el término se dice que venga cuando al ocurrir el hecho futuro pero cierto, el derecho se hace puro y simple; mientras eso no ocurre, el término no se ha vencido. La incertidumbre del hecho en la condición lleva a que cuando ocurra el hecho se diga que se cumplió la condición (3).

En la concesión existe un término para su vencimiento, que tiene además el carácter de fijo, porque el hecho ocurrirá cierto día fijado en el calendario, que todos conocen desde el mismo momento en que se otorga el respectivo título. Es así que el derecho a que se devuelva o revierta al concedente, la porción del patrimonio minero objeto de la concesión, es un derecho a término fijo, que confiere todas las facultades acordadas por las leyes a quienes tienen derechos simplemente suspendidos por la modalidad de un término que tendrá que vencerse.

Por consecuencia del carácter de término que suspende el derecho de reversión, ese derecho "existe ya, aún antes del vencimiento. Está ya adquirido de una manera definitiva: su ejecución sólo está diferida"(4).

Entre las consecuencias de la existencia del derecho y de que únicamente su ejecución esté suspendida por la modalidad del término, se encuentra la facultad de demandar el reconocimiento del derecho por parte del acreedor, cuando el deudor lo niega (5). Sólo su exigibilidad está suspendida, pero el acreedor puede perseguir al deudor que por sus actos ni

./....

(3) Art. 1213 y Art. 1209, C.c.
(4) Planiol, M., y Ripert, G., "Droit civil", París 1925,I:123; Conf. Dominici, A.,"Coment. C.c.venez.", II:657
(5) Page, H., "Droit c. belge" I: 148

ga total o parcialmente el derecho que existe, cuando dispone en cualquier forma de lo que tiene que entregar al vencimiento.

Objeto de la Reversión.-

Lo que debe revertir a la Nación es lo que se entregó al concesionario, el derecho a explotar hidrocarburos que se encontraran en una porción determinada de territorio nacional: parcela. Pero, con ese derecho a explotar que se devuelve, habrá de revertir "del mismo modo, todas las obras permanentes que en - ellas se hayan construído". El lenguaje utilizado por el legis - lador no es el más apropiado, cuando en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos se refiere al objeto complementario de la reversión. Ni siquiera lo es tampoco en el Art. 103 de la Constitu - ción Nacional, al mencionar en un sentido más amplio "las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación", puesto que siempre abre mucho el camino de la interpretación a los abogados, a veces dispuestos a defender al diablo.

En el estado de desarrollo de nuestros países, nada escapa a las condiciones de atraso que queremos superar. Pero los defectos del lenguaje para expresar las ideas del hombre son - tan generales como para que hasta en los pueblos más avanzados y - sistemáticos, la interpretación de las leyes resulte ser una necesidad constante del derecho. Surge de aquí la doctrina más gene - ralmente aceptada de que toda ley reclama interpretación, contra - riamente a lo que se pretendió sostener por una muy vieja tradi - ción de que cuando la ley es clara no admitía la interpretación (6).

./.....

(6) Expresado en las palabras de Paulo el adagio decía: "Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio".

Pero precisamente, para llegar a la conclusión de que la ley es - clara se necesita un proceso mental de indagación que consiste en subsumir el hecho tratado por el derecho, bajo las ideas formuladas con las palabras contenidas en la disposición escrita de la - ley.

En la disposición constitucional la cuestión consiste en fijar el alcance que tiene el concepto tierras. Reclama darle el sentido lógico de que esa palabra no tiene el alcance limitado que sugiere al campesino. El alcance de tierras dentro - del sistema jurídico concesionario tiene que ser el de bienes raíces, arquetipo de los bienes que integran el derecho inmobiliario. El patrimonio minero nacional es el bien inmueble principal al - cual siguen por accesión "las tierras adquiridas con destino" a - concesiones mineras, y a las tierras siguen, también por accesión, "las obras permanentes que en ellas se hayan construído", mencionadas por la Ley de Hidrocarburos. Y lógicamente, aún cuando no - lo menciona la ley, con las obras permanentes, al igual que con - las tierras, van"sus accesorios y todo cuanto esté destinado a - perpetuidad para su uso", según lo explica el artículo 1495 del Código Civil, en relación a la venta, pero con alcance general.

Las dos disposiciones legales sobre reversión emplean la expresión propiedad en el sentido lato de bienes o derechos patrimoniales que tiene, por ejemplo, en la Ley de Expropiación, y no en el sentido estricto del derecho de propiedad, distinto del derecho de usufructo o de uso o de otro derecho patrimonial. Las tierras adquiridas por el concesionario con destino a la conce-

./.....

sión, por destinación se hacen propiedad de la Nación desde el momento de su adquisición, porque sobre ellas, como sobre la concesión misma, el concesionario sólo tiene un derecho de uso, que al terminar, consolida la propiedad de la Nación, la hace plena como lo expresa la disposición constitucional.

En la Ley de Hidrocarburos el "se hará propietaria", igualmente significa hacerse titular del derecho de uso que tenía el concesionario, consolidando o haciendo plena así la propiedad - adquirida, desde el momento mismo de iniciarse la construcción de "las obras permanentes". Sin embargo, la disposición abre un campo más al picapleitismo, al sugerir la idea de que las obras permanentes reversibles son las que en ellas, en las parcelas concedidas, se hayan construído, porque la idea de parcelas concedidas, para - el campesino sería la de la tierra agrícola demarcada en los linderos de la concesión. En consecuencia, es necesario la elaboración mental del verdadero derecho minero parcelado, independientemente del derecho de propiedad de la tierra al cual se refiere -pero simplemente se refiere- la parcela minera. De consiguiente, en ellas, en los minerales de las parcelas mineras, no puede haber realmente construcción alguna, en el sentido físico. En el sentido jurídico la construcción en ellas, es en relación a ellas, o como lo dice - la Constitución "con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras". La unidad no es física sino fundamentalmente ideal, y si bien esta unidad ideal puede a veces coincidir con la unidad física, lógicamente lo que ha de entenderse como fundamental para el derecho es lo primero.

./...

En el espacio físico del territorio nacional, "continente de todos los objetos sensibles", como dice el diccionario, coexisten los objetos mineros del dominio público y los demás objetos sensibles que pueden ser del dominio privado. Es así como la parcela minera que haya sido objeto de una concesión, coexiste con la parcela de los demás objetos sensibles que la integran, que pueden ser de propiedad particular. Y es posible, como sucede frecuentemente, que el concesionario de la parcela minera no tenga que adquirir para su explotación la propiedad de la parcela no minera.

De consiguiente, frecuentemente la reversión de las parcelas mineras no conlleva necesariamente la transmisión de la propiedad de las parcelas de tierras que coexisten con las parcelas mineras. En cambio, esa reversión de parcelas mineras, en las que nunca nada se puede construir físicamente, sí impone la transmisión al concedente de todo cuanto se haya construído e instalado para la explotación de las mismas. Si las construcciones e instalaciones se hicieron, como a veces ocurre, en la misma parcela de tierra que coexiste con la parcela minera, habrá una aparente coincidencia con el sentido vulgar del lenguaje de la ley. Pero, aún en tales casos, la realidad, no la apariencia, es que la construcción e instalación se han hecho en una parcela material y jurídicamente diferente de la parcela minera objeto de la concesión, y para la cual se hizo la construcción e instalación.

Cualquiera interpretación que no distinga entre las parcelas objeto del derecho minero y las parcelas de tierra que

./.....

con las otras coexisten, conduce a soluciones irracionales. Pero además, la disposición constitucional resuelve el problema al ordenar con carácter general que las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones revierten a la Nación con esas concesiones. Y hemos visto que a la tierra, como bien dominante y principal, le siguen construcciones e instalaciones.

Errores de Jurisprudencia.-

Hace algún tiempo la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar apelaciones de compañías petroleras, contra resoluciones del Ministerio de Minas imponiendo multas por desmantelar instalaciones sin autorización del Ministerio. Tales decisiones desconocen claramente algunos alcances del derecho de reversión, que se encuentra así debilitado. La limitada importancia económica del derecho debatido ante la Corte, explica el error cometido al no entrar a fondo en la consideración objetiva del derecho de reversión que se afectaba. Se puede tener la seguridad de que al analizarse con algún detenimiento la situación, los jueces rectifiquen el error manifiesto de las sentencias que se creyeron de poca significación.

Pero están en juego intereses nacionales de mucha importancia, para que por todos los medios disponibles se deje de hacer lo necesario a la defensa de esos intereses. Por todos los medios es preciso contribuir a que quede elaborado con la mayor nitidez una doctrina clara del derecho de reversión. Es por ello que, como se prepara un proyecto de Ley de Expropiación, se consi-

./....

dera que en alguna disposición de ese proyecto se incluya una manifestación expresa del Poder Legislativo, dirigida a delinear en alguna forma el alcance de un derecho tan importante.

Proyecto de Disposición para la Ley de Expropiación.-

Se ha sugerido que en el articulado de la ley se introduzca una disposición que diría:

"Art. 10.- Las tierras, obras, e instalaciones permanentes adquiridas por los concesionarios del Estado para cumplir el objeto de las concesiones y a quienes se les haya facultado para la expropiación mediante ley especial, pasarán en plena propiedad a la Nación y serán conservadas y entregadas a ella, sin pago ni indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa las respectivas concesiones.

Todo acto de disposición de los referidos bienes por parte de los concesionarios requerirá la autorización previa del Ministerio correspondiente".

Observaciones:

1.- Se supedita el derecho de reversión a la facultad de expropiación en el sentido del artículo propuesto. El derecho y la facultad son generalmente coincidentes, por razones comunes provenientes del sistema concesionario. Pero, necesariamente no tiene que ser siempre así. Siempre que se tenga la facultad de expropiar, razonablemente se debe concluir en que el objeto de la expropiación finalmente deba ir al Estado. Sin embargo, la referida no es una consecuencia que se impone. Por lo contrario, es posible que se tenga el derecho de reversión aún cuando no se haya facultado a expropiar al concesionario u otro particular, obligado a adquirir algún bien que debe pasar al dominio del Estado. En otras palabras, el título al derecho de reversión no depende de la -

./.....

facultad de expropiar que se acuerde a quien está obligado a la reversión.

Esta cuestión coloca una primera barrera al propósito de emplear el proyecto de Ley de Expropiación para definir mejor la reversión. Sin embargo, en la realidad actual venezolana existe la coincidencia de ese derecho con la tal facultad, y puede así medirse la conveniencia práctica de unir en esta ocasión esos conceptos, en vista del fin que se persigue.

La redacción propuesta, sin embargo, se presta a interpretar que los bienes contemplados por esa disposición, para que pasen a la Nación, son los adquiridos mediante el ejercicio de la facultad de expropiación. Se hace por ello indispensable precisar que pasarán tales bienes a <u>cualquier título</u>, que se adquieran y las palabras "cualquier título" irían inmediatamente después de la palabra "adquiridas".

2.- Al intentar redondear el objeto de la reversión empleando las palabras <u>tierras</u>, de la Constitución, y <u>obras permanentes</u> de la ley, se ha intercalado el concepto de <u>instalaciones</u>, y así ahora pareciera que la idea de permanentes se refiriese a instalaciones, limitándose así el alcance que tienen las obras permanentes hacia sus <u>accesorios</u>, entre los cuales están las instalaciones que sean o nó permanentes.

Por lo anterior, se debe considerar una redacción más amplia del objeto de la reversión, empleando las palabras de la legislación vigente, más directamente dirigida al derecho de reversión. Así podría tenerse la siguiente redacción: "Las tierras y obras permanentes, así como sus instalaciones y accesorios,...".

./.....

3.- El aparte de la disposición contempla la autorización previa, sin señalar que esa autorización no puede implicar la pérdida de derecho alguno de la Nación. Parecería recomendable fijar algún criterio al funcionario que puede dar la autorización. Quizás convendría ordenarle tomar las medidas de protección de los derechos de la Nación, que se recomienden en el caso. Bastaría añadir al párrafo propuesto, refiriéndose al Ministerio correspondiente, "el cual tomará las medidas necesarias a la protección de los derechos de la Nación".

En el campo de las modificaciones formales, se puede considerar que en vez de referir los bienes, se ratifique que estos son los destinados a las concesiones. En cambio, parece, que huelga decir que los actos de disposición sometidos a autorización son los de "por parte de los concesionarios" cuando es evidente que no puede ser por parte de nadie más. Por último, en relación a este aparte, el requerirá resulta siempre más mandatorio y obligante al imponerse en el presente. Además, es más cierto que es desde ahora, desde que se sancione la ley y permanentemente, que se requiera la autorización previa para "todo acto de disposición", ya sea hoy, mañana o pasado que se ejecute ese acto.

Nueva Base de Discusión.-

Con el exclusivo propósito de incluir las observaciones actuales a las sugerencias de artículos para la Ley de Expropiación, sin incluir, desde luego, la primera de esas observaciones que constituiría el rechazo de la sugerencia, se hace la siguiente redacción:

./.....

"Los concesionarios del Estado que tengan la facultad para expropiar mediante ley especial y en razón del carácter de utilidad pública de la actividad que cumplan, deberán conservar para entregar a la Nación, sin pago de indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa las respectivas concesiones, las tierras y obras permanentes, así como sus instalaciones, accesorios y todo cuanto esté destinado a perpetuidad para su uso, cualquiera hubiese sido el título de su adquisición, aún cuando no fuese el de expropiación, si tales bienes se destinan a las concesiones.

Todo acto de disposición de los bienes destinados a las concesiones requerirá la aprobación previa del Ministerio correspondiente, el cual tomará las medidas necesarias a la protección de los derechos de la Nación".

ANTEPROYECTO DE LEY QUE PROPONE EL DR. MARTIN PEREZ GUEVARA PARA REGULAR EL USO Y DISPOSICION DE LOS BIENES ANEXOS A LAS CONCESIONES DE SERVICIOS O RIQUEZAS NATURALES.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente

LEY SOBRE USO Y TRANSFERENCIA DE BIENES ANEXOS A LAS CONCESIONES PARA LA EXPLOTACION DE SERVICIOS O RIQUEZAS NATURALES.

Artículo 1.- Los terrenos, edificios, construcciones, maquinarias, equipos y demás obras de carácter permanente, que adquieran, instalen o ejecuten los concesionarios del Estado para la explotación de sus concesiones o para el cumplimiento de las obligaciones que de éstas deriven y que según la Ley o el título de la respectiva concesión, deben pasar al patrimonio nacional al extinguirse aquellas, se denominan bienes anexos y se rigen por las disposiciones de esta Ley y por las demás leyes que les conciernan en lo no previsto especialmente por ella.

Artículo 2.- El uso, disfrute, custodia, conservación y disposición de dichos bienes corresponden al concesionario mientras permanezcan en

su patrimonio.

Artículo 3.- La cesión o traspaso de una concesión entraña la de los bienes anexos, quedando el cesionario subrrogado al cedente en todas sus obligaciones legales.

Cuando el objeto de la concesión sea divisible, la cesión o traspaso de una parte del mismo solo conlleva la transferencia de los bienes anexos a la parte cedida si ellos no forman parte esencial de las instalaciones y obras que queden en manos del cedente.

Artículo 4.- Los bienes anexos no podrán ser transferidos en su conjunto sino cuando se ceda o traspase la concesión respectiva y solo a quien sea el adquirente de ésta.

Artículo 5.- Previa autorización del Ministro del ramo los concesionarios podrán: 1°) utilizar algún bien anexo o parte del mismo dentro de la propia explotación o servicio pero en lugar o sección diferentes al que antes le correspondía; 2°) destinar alguno de dichos bienes o parte del mismo a un objeto distinto al que esté dedicado, pero no fuera de la explotación o servicio que constituya el objeto de la concesión; 3°) permitir a terceros el uso de alguno de dichos bienes o parte del mismo por tiempo determinado; y, 4°) desafectar un bien anexo o parte del mismo para venderlo, permutarlo o enajenarlo a título oneroso, para entregarlo a la Nación o para donarlo a un ente o estableci-

miento público, o a un particular, con destino a obras de utilidad pública o social.

Artículo 6.- A los fines del artículo anterior, el concesionario deberá dirigirse al Ministro del ramo en escrito razonado en el cual expondrá, junto con sus propósitos, los motivos en que funde su petición.

Dicho funcionario decidirá sobre la solicitud en resolución motivada en el plazo que luego se señala, pero cuando no lo haga, se considerará otorgada la autorización por el solo vencimiento del término, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir por su omisión aquellos a quienes sea imputable.

Artículo 7.- En los tres primeros casos a que se refiere el artículo 5 el Ministro decidirá en el plazo de 30 días a contar de la fecha del recibo de la solicitud, y no podrá negar la autorización sino cuando la necesidad del cambio no se justifique plenamente, o éste sea perjudicial a los intereses de la empresa o del Fisco Nacional, o por otras causas semejantes, debidamente comprobadas.

Artículo 8.- En el último de los casos señalados en el artículo 5, el Ministro decidirá en el plazo de 60 días, también contados desde la fecha del recibo de la solicitud, y negará la autorización cuando el interesado no pueda demostrar que el bien ya no se necesita para el objeto con que fué adquirido o cuando concurra alguna de las circunstancias

a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 9.- Antes de dictar la resolución que deba recaer en el último de los casos contemplado en el artículo 5, el Ministro deberá someter la solicitud al Presidente de la República y atenerse a lo que se decida en la correspondiente sesión del Consejo de Ministros.

Artículo 10.- El plazo a que se refieren los artículos anteriores podrá ser prorrogado por el Ministro del ramo hasta por 30 días cuando la necesidad de practicar algunas comprobaciones adicionales así lo requiera.

Artículo 11.- De la resolución en que se niegue la autorización solicitada podrá apelar el concesionario para ante el Consejo de Ministros a menos que éste ya haya conocido del caso según lo dispuesto en el artículo).

Artículo 12.- Para el ejercicio de los derechos que les concede esta Ley, los concesionarios deberán mantener informado al Poder Ejecutivo acerca de las tierras u obras de carácter permanente que hayan incorporado a sus concesiones en el curso del año inmediatamente anterior.

Cuando, para la fecha de promulgación de esta Ley, el concesionario no hubiere suministrado suficiente información al respecto, deberá presentar al Poder Ejecutivo el inventario completo de los bienes anexos que posea, dentro del año siguiente a esa misma fecha.

Artículo 13.- El poder de inspección, fiscalización y control que corres-

ponde al Poder Ejecutivo Nacional sobre las actividades de los concesionarios del Estado a que se refiere esta Ley, comprende la facultad de verificar el estado de conservación de los bienes a que ella se contrae, de obtener y recabar la información que sea necesaria sobre el uso y destino de los mismos y de oponerse a cualquier cambio o enajenación que pretenda hacerse en contravención a las disposiciones anteriores.

Artículo 14.- Serán nulas y sin ningún efecto respecto del Estado las enajenaciones realizadas sin haberse cumplido el requisito a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.

Artículo 15.- Los bienes anexos pasan, de pleno derecho y sin gravamen alguno al patrimonio nacional, al extinguirse la concesión a que correspondan.

Sin embargo, en cada caso deberá dictarse una resolución en que se deje constancia de la extinción de la concesión y de la causa que la haya originado con indicación de los bienes anexos a ella afectados, la cual, después de publicada en la Gaceta Oficial, se protocolizará en la Oficina Subalterna de Registro donde se haya registrado el título de la concesión y en las correspondientes al lugar de la ubicación de los inmuebles, si estuvieren situados en otro Distrito, y en la cual se dispondrá, además, que los Registradores ante los cuales hayan de cumplirse tales diligencias pongan las notas marginales a que pueda haber lugar.

Artículo 16.- Si al extinguirse por cualquier causa una concesión sub-

sista la explotación o servicio que le servía de objeto, los bienes anexos a ella no serán incorporados individualmente al patrimonio nacional ni sujetos al régimen ordinario de los bienes nacionales, sino que continuarán formando un todo indivisible, hasta que dejen de ser útiles al propósito o fin a que venían siendo destinados.

Artículo 17.- El concesionario que haya hecho inversiones en bienes anexos tendrá derecho a que se tenga en cuenta el valor de ellas al estimarse las proposiciones que se presenten, cuando habiéndose extinguido la respectiva concesión se decida otorgarla de nuevo.

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, los infractores de esta ley serán sancionados con multa de un mil a cien mil bolívares, que impondrá el Ministro del ramo, en cada caso de infracción, por resolución motivada.

Mientras la ley de lo contencioso administrativo no disponga lo contrario, de la decisión dictada conforme a esta disposición podrá apelar el infractor dentro del término de cinco días para ante la Corte Suprema de Justicia.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los

El Presidente,

(L.S.)

El Vicepresidente,

Los Secretarios

Palacio de Miraflores, Caracas

Años de la Independencia y de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

El Presidente,

(L.S.)

Refrendado

Adición: Después de pasado en limpio este anteproyecto, advierto que sería preferible sustituir el párrafo que en el artículo 1 dice que "Los terrenos, edificios, construcciones ....., que adquieran, instalen o ejecuten los concesionarios del Estado deben pasar etc., por el siguiente: "Los terrenos, edificios, construcciones ..... adquiridos, instalados o ejecutados por los concesionarios del Estado deben pasar ..... etc.

18 nov. 1965 35

M E M O R A N D U M

ACERCA DEL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE USO Y TRANSFERENCIA DE BIENES ANEXOS A LAS CONCESIONES PARA LA EXPLOTACION DE SERVICIOS O RIQUEZAS NATURALES.

PARA: El Dr. Manuel Pérez Guerrero,
Ministro de Minas e Hidrocarburos.

El anteproyecto en referencia ofrece una fórmula para resolver por la vía legislativa los problemas que estuvimos considerando en unión de algunos de sus distinguidos e inmediatos colaboradores, en la reunión celebrada en ese Ministerio el día 4 del presente mes.

Dicho anteproyecto se basa en las siguientes consideraciones:

1°) Los problemas examinados tienen su origen principal en algunos vacíos que presenta nuestro ordenamiento jurídico y cuyos efectos se extienden a todas las concesiones que tienen por objeto la explotación de riquezas naturales o la prestación de servicios públicos; en consecuencia, parece que antes que buscar una solución especifica a las situaciones que se han venido presentando últimamente en el sector correspondiente a las concesiones de hidrocarburos, debiera intentarse la busqueda de una solución que, por su generalidad, pueda aplicarse también a otras concesiones.

2°) Siendo adversos a los intereses del país los precedentes administrativos y jurisprudenciales que podrían invocarse al surgir nuevos motivos de disentimiento entre la Administración y los concesionarios, me parece prudente evitar cualquier acto administrativo que pueda colocar otra vez al alto tribunal ante el dilema de ratificar su jurisprudencia anterior, dando nuevamente la razón a estos últimos, o revocarla, acogiendo el criterio gubernamental, pues, es muy humano que mientras no se altere su actual composición, la Corte reafirme los puntos de vista ya sustentados por ella en anteriores decisiones. No obstante que tales precedentes dificultan cualquier acción encaminada a resolver, administrativamente, las situaciones examinadas en nuestra citada reunión, considero que no existen obstaculos constitucionales ni legales, para que el Gobierno formule la política que considere más recomendable en esta materia, recurriendo a la vía legislativa. El éxito o la aceptación de esa política no dependerá, sin embargo, de que se siga este camino en vez de alguno de los otros que ya han sido recomendados, sino de la sabiduría con que el Congreso defina las atribuciones del Gobierno y los derechos y obligaciones de los concesionarios, en relación con los bienes sujetos a reversión.

3°) A mi juicio, no hay el menor riesgo en que se reconozca, expresamente, que los concesionarios tienen sobre los bienes que adquieran con destino a sus concesiones los derechos que corresponden a los

propietarios, si, al propio tiempo, se establecen las obligaciones que conlleva el ejercicio de ellos, las limitaciones impuestas al uso y transferencia de esa clase de bienes y, en general, el régimen a que están sometidos, con el fin de asegurar los derechos de la Nación y garantizar la integridad del complejo industrial que representa la concesión y la continuidad del servicio o explotación que constituye su objeto.

4°) La facultad que tiene el Congreso para reglamentar esta materia no me parece discutible dentro del marco fijado por la Constitución y las leyes a partir de 1936. Sin pretender por el momento ahondar sobre este punto, basta recordar que la Constitución de dicho año establecía que, por razón de interés nacional, la ley puede establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, o por su condición o por su situación en el territorio (Artículo 32, ordinal 2°), y que la Ley de Hidrocarburos, dictada bajo el imperio de esa Constitución y que rige el mayor número de las concesiones, otorgadas en los últimos 22 años, señala entre las obligaciones complementarias de los concesionarios, la de "cumplir todas las disposiciones que le sean aplicables contenidas en leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y ordenanzas, sin perjuicio de los derechos que adquieren en virtud de la concesión" (ordinal 9 del artículo 59). Aunque el orden constitucional

ha sido objeto de modificaciones, en el curso de los últimos 30 años, las disposiciones correspondientes al régimen de la propiedad en los textos constitucionales más recientes, solo han acentuado la orientación doctrinal y filosófica adoptada por el constituyente desde el citado año, como puede comprobarse al observar que, después de garantizar el derecho de propiedad, la Constitución en vigor dispone que "en virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general". (artículo 99).

5°) Para apreciar las repercusiones que estos cambios han tenido aún en el dominio del derecho privado, basta comparar el artículo 545 del Código Civil vigente con su correspondiente en el Código derogado (artículo 523). "Se observa - dice un comentarista (en la Compilación Legislativa de Venezuela, Tomo correspondiente a 1942, Página 103)- que ha desaparecido el concepto de propiedad absoluta que privó hasta el Código anterior (artículo 523) contrario a las nuevas corrientes jurídicas a cuyo impulso se ha llegado ya a un criterio cada vez mas preciso de que todo derecho es relativo. Como medio de su ejercicio se alude además al uso que de la propiedad se tenga (M). Para afirmar la inmanencia que de su función social corresponde a este derecho de las personas se incluyó la palabra "obligaciones". Dado

que toda restricción puede implicar una obligación de no hacer, el concepto que se agrega aún cuando genérico, permite mejor que ninguno imponer cargas positivas, esto es, obligaciones de hacer, lo que ya no se discute en la vida moderna".

6°) Concentrando nuestra atención al campo de las concesiones de hidrocarburos y demás minerales combustibles, es de notar que la naturaleza del derecho que corresponde a los concesionarios sobre los bienes a que el proyecto se refiere queda esclarecida por algunas disposiciones legales, entre las cuales destaca de manera singular el ordinal 6° del artículo 102 de la Ley de la materia, el cual textualmente dispone que "continuarán sin alteración la propiedad y otros derechos relativos a los bienes, efectos, instalaciones, maquinarias, edificios y demás obras, adquiridos, instalados, o construidos por el concesionario en ejercicio de los derechos que le otorgaban los contratos o concesiones anteriores". No hay duda, por lo tanto, de que el dominio que tienen las empresas petroleras sobre los citados bienes, es para el legislador patrio un derecho de propiedad .

Sin embargo, como lo acabamos de expresar, la propiedad ha dejado de ser en nuestro país un concepto unívoco y absoluto y su contenido puede variar considerablemente según el fin a que deba servir, o, para expresarlo en otros términos, según el régimen a que las someta el Legislador de acuerdo con su destino.

¿Puede imaginarse algo mas alejado del concepto clásico de la propiedad que el derecho que tienen los Estados, por ejemplo, sobre algunos de los bienes que constituyen su patrimonio privado (tierras baldías, minas, salinas, etc.) y que, por muy justificadas e indiscutibles razones de utilidad y conveniencia pública, han pasado a la administración del Gobierno Nacional?. Los Estados no administran dichos bienes ni pueden disponer de ellos en forma alguna. Tampoco pueden usarlos ni disfrutarlos. Sin embargo, nada de esto ha sido obice a que el constituyente considere que las entidades federales tienen sobre ellos un derecho de propiedad. A un nivel menos elevado, el derecho público venezolano nos ofrece otro caso singular de propiedad (Artículos 78 y siguientes de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos), en el derecho que, gratuitamente, puede conceder el Ejecutivo a los adjudicatarios sobre terrenos baldíos susceptibles de ser enajenados, quienes, no obstante ser propietarios de sus respectivas parcelas, no pueden arrendarlas, gravarlas, ni enajenarlas en forma alguna durante los primeros 10 años, y una vez transcurrido este término solo pueden hacerlo previo el cumplimiento de los requisitos que establece la ley. El derecho de propiedad nacido de la adjudicación es tan precario en ese caso que puede extinguirse hasta por causas ajenas a la voluntad del propietario. En estos ejemplos, los atributos que configuran el derecho de propiedad, según la noción tradicional que heredamos

de los romanos, gracias a la obra codificadora cumplida por sus albaceas en el Viejo Continente, o no existen o han sido tan desfigurados, que en la práctica resultan irreconocibles. Pero ello no nos autoriza a negar la existencia de aquél derecho, sino a reconocer que nos hallamos en presencia de un régimen de excepción. En consecuencia, cuando hablamos del derecho de propiedad o de su régimen, siempre hay que tener presente que podemos estar refiriendonos a dos ordenes diferentes de normas: Las que forman parte del orden civil y constituyen el derecho común u ordinario, y las que emanan de una legislación especial y forman un derecho de excepción.

7°) El régimen de la propiedad es el conjunto de disposiciones que definen algunas de las relaciones económicas entre el hombre y el mundo que lo rodea, entre el ente a quien la ley atribuye el carácter de sujeto de derecho y las cosas que lo circundan.

En general, ese régimen se refiere a los bienes que están o pueden estar bajo nuestro dominio, a los medios por los que entran o salen del mismo y al disfrute y uso que de ellos podemos hacer.

Pero como la propiedad es, según hemos visto, un concepto relativo, las modalidades que es susceptible de ofrecer su régimen, se nos presentan en la práctica con una ampliación o disminución de los derechos y obligaciones de cada categoría de sujetos, frente a los derechos reconocidos

o las obligaciones impuestas a los demás.

8°) El carácter excepcional del régimen que regula la adquisición uso y disposición de los bienes a que me vengo refiriendo, deriva del fin de utilidad pública a que ellos están destinados, y sus principales características, particularmente en el sector de los hidrocarburos y demás minerales combustibles pueden apreciarse y resumirse tomando como base las siguientes observaciones:

a) Para adquirir la posesión y derechos reales sobre esos bienes, incluyendo el de propiedad, la ley pone a disposición de los concesionarios no solo los medios ordinarios consagrados en el Derecho Civil, sino recursos excepcionales, tales como la ocupación temporal y la expropiación, lo cual rompe la igualdad jurídica entre los particulares que es tradicional en este orden de relaciones, mientras se mantienen en la esfera del derecho común (Artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos).

b) Algunas limitaciones fiscales que impiden o restringen la importación y, por lo tanto, la adquisición de ciertos bienes por los particulares en general, ceden gracias a la exoneración de derechos que es otorgada a los concesionarios, respecto de los bienes que importen con destino a la explotación de sus concesiones. Aunque estos bienes pueden ser enajenados, previo el pago de los correspondientes derechos, su destino ulterior debe ser decidido por el Gobierno, cuando los concesionarios deseen abandonarlos o destruirlos (Artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos).

c) Los particulares no tienen sobre los terrenos baldíos más derechos que los que les acuerde el Poder Ejecutivo sobre determinadas porciones de ellos en conformidad con la Ley de la materia, en tanto que los concesionarios de hidrocarburos tienen el derecho de ocupar, casi sin limitación alguna cualquier superficie que necesiten para sus trabajos, construcciones, vías de comunicación y de transporte y para establecer en ellos todas las servidumbres que necesiten para sus actividades (Artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos).

d) Los concesionarios tienen también el derecho de construir muelles almacenes, oficinas de depósito, vías de comunicación y de transporte y otras instalaciones y edificios, y de establecer las correspondientes servidumbres en los terrenos de la costa colindantes con la concesión o en la que estuviere mas cerca de ésta, en el caso de que los yacimientos estén cubiertos por las aguas del mar, lagos, lagunas o ríos (Artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos). El uso de los muelles puede ser permitido por el concesionario a otras personas naturales o jurídicas, aún por períodos de cierta duración en las circunstancias previstas por el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, previo permiso del Ejecutivo Nacional (Artículo 93).

e) Los concesionarios pueden producir energía eléctrica para los trabajos que la requieran en sus propias explotaciones o en las de otros concesioarios, pero no pueden utilizarla con otro destino, a menos que obtengan el correspondiente permiso del Poder Ejecutivo Nacional (Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos).

f) Cuando tengan capacidad para ello, el uso de los oleoductos, corresponde no solo a quienes los hayan instalado, sino también a terceros sin discriminación de personas y a un precio razonable que será el mismo para todos en igualdad de circunstancias (Artículo 37 de la Ley de Hidrocarburos).

g) Al extinguirse las concesiones de explotación por el vencimiento de sus respectivos términos, la Nación se hará propietaria, sin pagar indemnización alguna, de las obras permanentes construidas por los concesionarios en las parcelas que constituían el objeto de aquellas (Artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos). Las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras, comprendidas la s de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva (Artículo 103 de la Constitución).

9°) Las anteriores disposiciones constituyen el obligado punto de partida para la elaboración de cualquier construcción doctrinal o teoría sobre la situación jurídica de los bienes anexos a las concesiones de hidrocarburos y de los derechos, obligaciones o atribuciones que de ella derivan para el concesionario o la Administración Pública. La formulación de esa teoría supone un análisis o exploración mas profundos de toda la legislación que rige la materia, y su traducción en preceptos

legales un estudio de sus implicaciones económicas o fiscales que aún está por hacerse. Sin embargo, creo que paralelamente a tales estudios e investigaciones, es deseable iniciar la discusión de un proyecto que como el que se acompaña al presente memorándum tenga por objeto dar una idea aproximada de lo que podría ser una ley dirigida a llenar los vacios más notables que presenta el esquema legislativo arriba trazado. Es facil apreciar que las disposiciones que constituyen el articulado en proyecto (con excepción de los artículos 3, 4 y 16), son consecuencia lógica del derecho positivo vigente o desarrollo de algunas de sus normas. Podría decirse que ellas ya existen, aunque en forma larvada o implicita, en la legislación actualmente en vigor.

10°) En estricto derecho, la concesión es el acto por el cual el Estado otorga a un determinado sujeto, derechos o prerrogativas para la explotación de servicios o riquezas naturales, y define las obligaciones que nacen para el concesionario con tal motivo y el control y fiscalización de que él mismo se vale para asegurar el cumplimiento de aquellas.

Cuando la concesión requiere para su ejercicio la construcción de obras permanentes sobre el territorio, es natural que aquellas y este se consideren como partes de un todo indivisible, cuyo elemento esencial es la explotación de la riqueza o servicio que constituye su objeto.

Tales obras son la forma en que se materializa la concesión.

En buena lógica y haciendo abstracción por el momento, de lo que al respecto establece la ley, de lo dicho en el párrafo anterior y del carácter temporal de las concesiones pueden deducirse las siguientes consecuencias: a) En principio, las concesiones solo pueden transpasarse o cederse integramente, la cesión o traspaso de una parte de ellas solo es admisible cuando su objeto mismo sea divisible y pueda hacerse sin perjuicio de la explotación; b) la cesión o traspaso de la concesión conlleva la de los bienes que le sean anexos; c) la extinción de la concesión por una causa que no entrañe la del servicio o explotación que constituye su objeto, no solo implica la reversión al patrimonio nacional de los derechos y prerrogativas concedidos, sino del servicio o explotación mismos, surgidos con ocasión de su ejercicio, y de los cuales forman parte esencial los terrenos, edificios, construcciones, maquinarias, equipos y demás obras permanentes, adquiridas, instaladas o ejecutadas por los concesionarios, para los fines de utilidad pública implícitos en sus respectivas concesiones; d) Tales bienes no pueden ser adquiridos por el concesionario sino en la medida en que lo requieran sus trabajos, tampoco pueden ser destinados a un fin distinto de aquel a que hayan sido afectados, y no pueden ser cedidos o traspasados en su conjunto sino con la concesión a la que han sido incorporados y a la persona por quien ésta haya sido adquirida; e) El uso, disfrute, custodia, conservación

y disposición de tales bienes corresponden a los concesionarios con las restricciones indicadas en esta enumeración; f) es inherente a la naturaleza de este tipo de concesiones la facultad de fiscalización y control estatales sobre la adquisición, uso y disposición de dichos bienes no solo para defender los intereses públicos representados en ellas, sino, también para asegurar la conservación, eficacia, integridad o continuidad de la explotación o servicio respectivo.

11°) Si se compara la anterior enumeración con las disposiciones a que antes hice referencia, se podrá observar que el legislador patrio aún no ha regulado todos los aspectos que ofrecen las relaciones entre el Estado y sus concesionarios en lo que atañe a los bienes anexos a algunas concesiones, ni ha sido siempre consecuente con los principios que pueden deducirse de la naturaleza y características que tienen las concesiones de explotación de servicios o de riquezas naturales, de acuerdo con las normas por él mismo establecidas hasta ahora.

Por todo lo dicho, los problemas planteados no podrán resolverse hasta que no lleguemos a determinar cómo y en qué forma debe extenderse la legislación vigente, a los aspectos aún no previstos de las relaciones entre la Administración Pública y los particulares en lo que respecta a los bienes afectados a sus concesiones, teniendo en cuenta las limitaciones que actualmente ofrece dicha legislación y las posibili-

dades que ella misma brinda para aproximar el alcance de sus disposiciones al esquema que se considere más justo y conveniente.

En tal sentido creo que el anteproyecto elaborado puede ser de alguna utilidad, especialmente, si no se lo considera como el fruto elaborado de un largo estudio, sino como el punto de partida de una investigación que, al arrojar luz sobre puntos o aspectos que el presante análisis ha dejado en la penumbra, permita descubrir errores o fallas que bien pueden existir en las apreciaciones aquí contenidas y en el articulado que, junto con ellas, me es grato someter a su consideración.

Caracas, 18 de noviembre de 1965

Martín Pérez Guevara

Nota: El subrrayado en todos los parrafos copiados en este Memorándum es del autor.

21-7-65 36

SINTESIS DE LOS PUNTOS SOSTENIDOS POR LA CONSULTORIA JURIDICA EN MATERIA DE REVERSION.

A.- La posibilidad de que el Estado, por el deber y el derecho que tiene de prestar los servicios públicos, reasuma esa prestación de manos de los particulares, cuando la ley lo ordene o cuando las necesidades sociales lo requieran, ha hecho surgir la necesidad de la reversión, o sea, la figura mediante la cual la estructura destinada por los particulares a la prestación del servicio, pasa en su integridad a manos del Estado, para que éste pueda prestar el servicio eficazmente.

Se considera la explotación de los hidrocarburos, en todos sus aspectos, como un servicio público. Por tanto, el Estado tiene un deber y un derecho a prestarlo. Ese servicio, como otros, se ha otorgado mediante concesiones a los particulares, pero conservando siempre el Estado la posibilidad de prestarlo directamente, ya conjuntamente con los particulares, o asumiéndolo en forma exclusiva.

En ocasiones el régimen legal de las concesiones de servicio público prevé una indemnización a favor del concesionario en el momento del pleno regreso al patrimonio del Estado de los bienes con los cuales se maneja la concesión. En otras, el Estado establece la reversión como una carga al concesionario por los beneficios que éste recibe por la ex-

plotación del servicio. En ninguno de dichos casos la reversión se produce a título gratuito, no es una liberalidad, sino una contraprestación o carga legal a cambio de una ventaja recibida por el concesionario.

B.- La reversión con respecto a las concesiones mineras y de hidrocarburos, está expresamente acogida en nuestra Legislación positiva. El artículo 103 de la Constitución Nacional establece: "las tierras adquiridas con destino a la exploración o explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva". El artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos por su parte dice: "las concesiones se extinguen por el vencimiento del término de su duración según sus respectivos títulos. En el caso de concesiones de explotación, la Nación readquirirá sin pagar indemnización alguna, las parcelas concedidas y se hará propietaria, del mismo modo, de todas las obras permanentes que en ellas se hayan construido". Y el artículo 51 de esta misma Ley señala en su tercer aparte: "En el caso de renuncia de concesiones de explotación, se aplicará lo dispuesto en el primer aparte del artículo anterior".

C.- Las disposiciones legales citadas han sido interpretadas así:

1) Las expresiones de la Constitución de que las tierras adquiridas

con destino a la exploración o explotación de las concesiones "PASARAN" al patrimonio del Estado al extinguirse éstas y las de la Ley de Hidrocarburos de que la Nación "READQUIRIRA" las parcelas concedidas y se "HARA" propietaria, del mismo modo de las instalaciones permanentes, se han entendido en el sentido de que, tales bienes tienen necesariamente que pasar plenamente al patrimonio del Estado en un término que fatalmente habrá de cumplirse, ya que las concesiones se otorgan por tiempo limitado.

El Estado tiene sobre los bienes dichos, un derecho de propiedad, que se va consolidando con el tiempo, por consiguiente, los concesionarios no tienen sobre los mismos, sino el derecho limitado de usarlos durante la vigencia de las concesiones y una obligación de devolverlos al Estado al extinguirse éstas, lo cual niega el derecho a su libre disposición. Admitir que los concesionarios dispusieran libremente de los bienes con los cuales trabajan las concesiones, conllevaría la posibilidad de que los enajenasen todos, momentos antes de extinguirse aquellas, con lo cual se haría nugatorio el derecho del Estado e inútiles las disposiciones legales sobre reversión.

La anterior interpretación descarta, por contrapuesta, la que considera que solo pasarán al patrimonio del Estado aquellos bienes de los mencionados por la Ley, que se encuentren en manos de los concesionarios para el momento de la extinción de las concesiones y según la cual

los concesionarios podrían disponer de todos los bienes de las concesiones, mientras estas estén vigentes.

2) La reversión debe producirse cualquiera que sea la causa de extinción de las concesiones, como lo establece la Constitución y no sólo en el caso de extinción por vencimiento del plazo o por renuncia.

3) El derecho de los concesionarios de usar los bienes adquiridos con destino a las concesiones está condicionado al servicio que prestan a estas, o sea a un fin de utilidad pública, por el cual el Estado ha dotado a los titulares de concesiones hasta del derecho de expropiación para obtenerlos; por tanto, si tales bienes se desafectan de ese servicio deben ingresar al patrimonio nacional. Además, de no ser así, habría dos posibilidades: a) que el concesionario los dispusiera, con lo cual se caería en la situación arriba analizada de que no revertirían al Estado al extinguirse las concesiones; b) que el concesionario mantuviese en su poder los bienes desafectados de las concesiones, para utilizarlos con otros propósitos, con lo cual se desnaturalizaría su función o para mantenerlos inútiles, debiendo entonces gastar cantidades para su conservación hasta su ingreso al patrimonio del Estado, incurriendo en gastos innecesarios para la concesionaria y para la Nación. De manera que, todo bien reversible, según la Ley, debe ingresar al patrimonio nacional en el momento en que es desafectado del servicio de las concesiones.

D.- La Constitución dice que pasarán al patrimonio del Estado "las

tierras adquiridas con destino a la exploración y explotación de las concesiones". Así que, todas las tierras adquiridas "CON DESTINO" a las concesiones, estén o no dentro de los límites de las respectivas parcelas, quedan comprendidas en la disposición constitucional. Las tierras en los campos o en las ciudades, quedan afectadas por la norma señalada.

Si han de revertir las tierras, también habrán de hacerlo las obras e instalaciones permanentes que en ellas se hayan levantado, como accesorios que son de las mismas.

ASC/cre

21-7-65

No despachado. 37

Dirección General

s/f.

Caracas,

138 y 110

Ciudadano
Ministro de Sanidad y Asistencia Social
Su Despacho.-

Tengo a honra referirme a la carta dirigida a usted por la Creole Petroleum Corporation, marcada M-isis.-959, de fecha 14 del presente mes, relativa a la donación del Hospital "Sagrada Familia", de Caripito, Estado Monagas.

Al respecto debo manifestarle lo siguiente:

Como usted sabe, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, el Estado goza del llamado "derecho de reversión" sobre las concesiones de hidrocarburos que se otorguen, así como sobre todas las obras permanentes que en ellas se hayan construido.

Ahora bien, por cuanto consideramos que los términos empleados por la compañía en la carta objeto de este escrito podrían ser interpretados en menoscabo del referido principio jurídico, creemos que, de estimar conveniente el Ministerio a su cargo la negociación propuesta, deberá incluirse en la carta de aceptación respectiva, un párrafo del tenor siguiente:

"Consultado el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, como representante del Estado en materia de hidrocarburos, acerca del ofrecimiento contenido en su carta, ha dado su aprobación al traspaso propuesto por su representada, por considerar que él encuadra dentro del principio de la reversión legal.

Atentamente,

José Antonio Mayobre
Ministro

CAH/def.-